

Causa Rol N° 39.296.-

Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Claudio Mesa Latorre.

Temuco, veintidós de abril de dos mil veintitrés. -

VISTOS:

ÍNDICE

I. Relación de la Sentencia.....2-3

II. Resumen ejecutivo.....3-4

III. Actuarios de tramitación y dato técnico..... 4

IV. En cuanto a la Acción Penal:

 A. Declaraciones (21).....5 - 47

 B. Documentos (09).....47- 48

 Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal..... 48 -51

 Calificación jurídica de los hechos.....51- 54

 Concepto de Lesa Humanidad.....55-58

 C. Declaración indagatoria:

 Declaración indagatoria de Benjamín Farías Lavín.....58-62

 Análisis de las declaraciones de Benjamín Farías Lavín..... 62- 68

 D. En Cuanto a la Defensa:

 Defensa del abogado Cristián Salgado, en representación de Benjamín Farías Lavín..... .68- 70

 E. Análisis de la defensa: Consideraciones previas al análisis de la defensa:

 A. Obligación de Investigar.....70- 85

 B. Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por Tribunales alemanes.....85-95

 C. Estado de Derecho.....95- 99

 D. Matar a otro.....99 - 101

 F. Análisis de la defensa específica:

 Análisis de la defensa específica de Benjamín Farías Lavín101-104

G. Acusación particular presentada por el abogado Ricardo Lavin en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaria de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.....**104 -105**

H. Reflexiones sobre lesa humanidad y Convenio de Ginebra.....105 - 112

I. Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:

Atenuante de Responsabilidad Penal.....**112-113**

Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual.....**113-115**

Agravantes de Responsabilidad Penal.....**115**

Determinación de la Pena.....**116- 117**

Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.....**117 - 123**

V. Aspectos Resolutivos.....123- 125

I. RELACIÓN DE LA SENTENCIA:

Que se ha iniciado esta **causa rol N° 39.296** del ingreso del Juzgado de letras de Villarrica, para investigar el delito de Homicidio Calificado de la víctima NN y determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

1. BENJAMIN RODEMIL FARÍAS LAVÍN, R.U.N 7.023.207-3, chileno, natural de Teno, casado, 71 años de edad, funcionario en retiro del Ejército, domiciliado en Lonco N°7295, departamento 11, Pudahuel, región Metropolitana, extracto filiación y antecedentes de fs. 916 y siguientes (Tomo III) y 1.187 a 1.188 (Tomo IV)

Se inició la causa mediante auto cabeza de proceso del 17 de octubre de 2016, a fin de investigar las circunstancias y el contexto en que se habría ejecutado a una persona a orillas del Lago Villarrica en el año 1974.De fs.1 a 2 (Tomo I)

A **fs. 868 a 903 (Tomo III)** con fecha 30 de septiembre de 2020, se sometió a proceso a **BENJAMIN RODEMIL FARIAS LAVÍN**, como **autor** del delito de homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, en la víctima NN, perpetrado en la comuna de Villarrica, en los meses de enero y/o febrero de 1974 imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva. A **fs. 927 (Tomo III)**, con fecha 22 de octubre de 2020, apela del auto de procesamiento y de la medida cautelar de prisión preventiva. A **fs. 939 (Tomo III)**, con fecha 26 de octubre de 2020 se revoca la resolución apelada de fs. 868 y siguientes, en cuanto impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por la ltma. Corte de Apelaciones de

Temuco y sustituye por libertad bajo fianza. A **fs. 949 (Tomo III)** con fecha 04 de noviembre de 2020, la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco confirma la resolución de fojas 868 y siguientes en cuanto sometió a proceso a Benjamín Farías Lavín.-

A **fs. 1.093 (Tomo III)**, con fecha 22 de diciembre de 2021, **se declaró cerrado el sumario.**

A **fs. 1.097 a 1.127 (Tomo IV)** con fecha 13 de enero de 2022, se dictó auto acusatorio en contra de **BENJAMIN FARÍAS LAVÍN** como autor del delito de homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, en la víctima NN, perpetrado en la comuna de Villarrica, en enero / febrero de 1974.

A **fs. 1.129 a 1.133 (Tomo IV)**, el abogado Ricardo Lavín Salazar en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, interpuso **acusación particular** en contra de Benjamín Farías Lavín, solicitando condenar como autor del delito de Homicidio calificado en la persona NN, de acuerdo a lo tipificado y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancias primera y quinta del Código Penal de la época condenándolos en definitiva e imponiendo las penas que señala, más las sanciones accesorias legales con costas.

A **fs. 1.143 a 1.149 (Tomo IV)**, el abogado Christian Salgado Contreras en representación de Benjamín Rodemil Farías Lavín, en lo principal de su escrito contesta la acusación fiscal y al primer otrosí contesta la acusación particular.

A **fs. 1.154 (Tomo IV)**, con fecha 05 de agosto de 2022, **se recibió la causa a prueba.**

A **fs. 1.164 (Tomo IV)**, con fecha 23 de septiembre de 2022, se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.

A **fs. 1.165(Tomo IV)**, con fecha 23 de septiembre de 2022, se trajeron los autos para efectos del **artículo 499 del Código de Procedimiento Penal.**

A **fs. 1.166 (Tomo IV)**, se dictaron medidas para mejor resolver.

A **fs. 1.220 (Tomo IV)**, con fecha 22 de abril de 2023 se trajeron los autos para fallo.

II. RESUMEN EJECUTIVO:

- **ACCIÓN PENAL 1° al 34 °:**

1°) y 2°) En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso: Declaraciones (21) y Documentos (09); **3°)** Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; **4°) y 5°)** Calificación jurídica de los hechos; **6°) y 7°)** Concepto de Lesa Humanidad; **8°)** Declaración Indagatoria de Benjamín Farías

*Lavín ; 9°) y 10°) Análisis de la declaración del acusado, ponderación en relación a la prueba del proceso; 11°) Defensa del abogado en representación de Benjamín Farías Lavin; 12°); 13°)y 14°) **Consideraciones Previas al Análisis de la Defensa:** A. Obligación de investigar. B. Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por los Tribunales Alemanes. C. Estado de Derecho; matar a otro. 15°) Análisis de defensa específica del acusado Benjamín Farías Lavin; 16°) Acusación particular del abogado Ricardo Lavín Salazar; 17°) Análisis de la acusación particular; 18°), 19°), 20°), 21°), 22°), 23°) y 24°) Reflexiones sobre lesa humanidad; 25°) Convenio de Ginebra; **Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:** 26°) Atenuante de Responsabilidad Penal; 27°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual; 28°) Agravantes de Responsabilidad Penal; 29°), 30°) y 31°) Determinación de la pena; 32°), 33°) 34°) Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.*

III. ACTUARIOS DE TRAMITACIÓN Y DATO TÉCNICO:

- a. Fecha de inicio de la causa: 17 de octubre de 2016.-
- b. Actuario de Tramitación Sumario: Gonzalo Millalén.
- c. Actuario de Tramitación Plenario: Paulina Montealegre y Francisca Rabié Figueroa
- d. Tomos: 4
Tomo I de fs.1 a fs. 351;
Tomo II de fs. 352 a fs. 710;
Tomo III de fs. 711 a 1.096;
Tomo IV de fs. 1.097 y siguientes.
- e. Fojas: 125
- f. Considerandos: 34°

CONSIDERANDO:

IV. EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL

1°) Que a fs. 1.097 a fs. 1.127 (Tomo IV) con fecha 13 de enero de 2022, se dictó auto acusatorio en contra de **BENJAMIN RODEMIL FARÍAS LAVÍN**, como autor del delito de homicidio calificado en su carácter de lesa

humanidad, en la víctima NN, perpetrado en la comuna de Villarrica, en el mes de enero/febrero de 1974.-

2°) Que con el objeto de establecer en autos la existencia del ilícito penal señalado, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se encuentran en el auto acusatorio de fs. 1.097 a 1.127 como el auto de cabeza de proceso. Sin perjuicio, del análisis de la pruebas rendidas durante el plenario.

A. DECLARACIONES (21):

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

A.1 MANUEL SEGUNDO MORA TORRES (25 años a la época de los hechos investigados) quien declaró a fs. 3 a 5; (Tomo I), 6 a 7 (Tomo I), 7 a 8 (Tomo I), 293 a 294 (Tomo I), 506; (Tomo II) y de fs. 1088 a 1091; (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 30 de junio de 2015, rolante de fs. 3 a 5; (Tomo I) cuenta que para el año 1973, ostentaba el grado de sargento 2° y se encontraba cumpliendo servicios en el Regimiento Tucapel de Temuco, específicamente como instructor de la 1°compañía de cazadores. La compañía estaba a cargo del capitán Rodolfo Vargas Campos y los seguía en el mando el teniente Nolberto Uribe Moroni. Del resto de los clases de la compañía, nombra a los sargentos Santiesteban Domínguez, Aedo Matus, Anacleto Aguirre, Rafael Lizama Saldías, cabo Farías y otros que no recuerda en el momento. Para el día 11 de septiembre de 1973, una vez ocurrido el pronunciamiento militar, recuerda que tuvo que viajar a Santiago la madrugada del 12 de septiembre con la 1° compañía de cazadores. Recuerda que aterrizaron en el Aeropuerto de Cerrillos y se trasladaron a un campo militar, para luego a los días posteriores realizar allanamientos en las poblaciones Lo Hermida, La Bandera, La Mistral y La Legua. Posteriormente efectuaron servicios de guardia y custodia de detenidos en el Estadio Nacional, como también en Televisión Nacional, para luego a mediados de octubre regresar a Temuco. A su regreso al Regimiento Tucapel, le correspondió incorporarse a servicios de patrullajes de toque de queda y guardias en el cuartel, como también irse en campaña a la comuna de Currarehue, Reigónil y Puesto, entre los meses de enero, febrero y marzo, donde solo se hizo soberanía, no registrándose detenidos. Recuerda que en una oportunidad que finalizó uno de

sus servicios de guardia, no puede precisar la fecha, pero ocurrió en el mes de noviembre de 1973, el capitán Rodolfo Vargas Campos reunió a todos los instructores en su oficina, por lo que se encontraban Santiesteban Domínguez, Aedo Matus, Anacleto Aguirre, Rafael Lizama Saldías y el cabo Farías. El caso es que el capitán, dio la instrucción de interrogar hasta las últimas consecuencias a cuatro detenidos que se encontraban en un pabellón de la compañía andina. Recuerda que los detenidos eran cuatro hombres de aspecto campesinos, todos adultos, acostados y amarrados en la última cama de cuatro literas de los soldados conscriptos. Acto seguido, el capitán Vargas en conocimiento de que había finalizado su servicio de guardia, lo excluyó del grupo y lo envió a descansar a su domicilio. El caso es que al día siguiente, cerca de las 08:00 horas y antes de llegar al regimiento, se encuentra con el conductor de los servicios, no recuerda en el momento sus apellidos, pero al intercambiar algunas palabras con él, le señaló textualmente *“de la que te salvaste huevón, anoche ejecutaron a los cuatro detenidos en la isla cautín y que le había correspondido presenciar las muertes y recoger los cuerpos quedando restos aún en la parte trasera del camión”*. Además, le señaló que había presenciado la ejecución y que cada detenido había sido amarrado a una estaca y frente a ellos se habría posicionado el capitán Vargas y los clases Santiesteban, Aedo, Aguirre, Lizama y Farías, quienes con un fusil SIG, procedieron a ejecutarlos en modo ráfaga, quedando destrozados los cuerpos de estas personas, comentando además que uno de los detenidos había increpado al capitán, manifestándole *“mátame luego conchatumadre”*, ya que el capitán le temblaba el brazo y no disparaba. Otro hecho que narra, es que a mediados del año 1974, pasó a conformar la compañía contraguerrilla, la cual estaba a cargo del teniente Velásquez, quien era comando y llegó al regimiento en fecha posterior al 11 de septiembre de 1973. Este grupo la conformaban los clases Heraldo Espinoza Elgueta, Rafael Lizama Saldías, Farías y alrededor de treinta a cuarenta soldados conscriptos, seleccionados en diferentes compañías. El caso es que a fines de 1974, mientras se encontraba en campaña de instrucción en el lago Villarrica, llegó en un camión militar, el conductor, de quien no recuerda su nombre, con un detenido con su vista vendada. A este detenido lo recordaba ya que permaneció cerca de dos meses en custodia del servicio de guardia, en una dependencia anexa a la guardia denominada “prevención”. Las características de este eran de contextura delgada, tez morena, de 1.70 metros aproximadamente y con bastante conocimiento de izquierda y que al parecer ocupaba un alto cargo dentro de su ideología a la cual pertenecía, inclusive recuerda que nunca recibió visitas por parte de familiares, no teniendo claro si era de Temuco o de otra ciudad. Continuando con el relato, recuerda que el conductor entregó al detenido

al teniente Velásquez, situación que presencié junto a los otros clases, transmitiendo el conductor al oficial que al detenido había que eliminarlo. Acto seguido y en esa misma tarde, el teniente Velásquez, hizo un sorteo con papelitos doblados con uno de ellos con la consigna “sí” y “no, por lo que cada uno de los clases y el oficial debía sacar un papel y al que le tocaba “sí”, era quien debía ejecutar a este detenido, resultando ser el cabo Farías, el elegido por este sistema de sorteo, quien al saber que le tocaría ejecutar, manifestó que sería la persona N°24 en eliminar. Seguidamente y ya comenzando el atardecer, el teniente Velásquez ordenó a los soldados conscriptos retirarse de las orillas del Lago Villarrica hacia unos cuantos metros hacia atrás para que no observaran la ejecución, pero igual se percató que todos miraron y se dieron cuenta de la ejecución que iba a concretar el cabo Farías. Recuerda que el detenido fue colocado sentado y con su vista vendada a las orillas del lago, mirando hacia este, mientras que el teniente Velásquez, Espinoza, Lizama y el deponente se posicionaron detrás del detenido a un metro de distancia. Acto seguido, Farías, sacó su pistola stager, 9 mm y le colocó el cañón en la parte que une la cervical con el cuello, procediendo a los segundos a disparar el arma, provocándole la muerte del detenido inmediatamente. Luego, con una cuerda de nylon, se le amarro una piedra al cuerpo con la finalidad de que hiciera peso y quedara en la profundidad del lago, por lo que el teniente Velásquez y el cabo Farías, trasladaron el cuerpo en un bote hasta la mitad del lago, donde lo lanzaron para que se hundiera. Cuando regresaron al grupo, Farías comentó que el teniente Velásquez con un corvo lo habría abierto con la finalidad de retirar las vísceras y que le había cortado el pene, el cual se lo colocó en la boca al detenido. De acuerdo a la pregunta, debe manifestar que los hechos que ha relatado en los párrafos anteriores, son los episodios más fuertes que le tocó vivir durante su desempeño en el Regimiento Tucapel. Refiere que en lo personal nunca le correspondió detener ni ejecutar a ninguna persona. Se refiere a hechos de la causa de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui.-

En declaración judicial de fecha 06 de agosto de 2015, rolante de fs. 6 a 7; (Tomo I), ratifica su declaración extrajudicial de fs. 364 a 366. Recuerda a los clases sindicados en su declaración precedente. Espeta que hubo personas que vestían de civil, un grupo de no más de 12, detectives y carabineros, que es posible que hayan hecho esa detención. Al retirarse se enteró de personas que salían en las tardes; incluso en una oportunidad vio a esas personas al mando de un oficial conversando. Describe a un detective alto, gordo y que sobresalía del semicírculo. Posiblemente después del año 1975 haya seguido. Cree que era el único grupo. Especula que esas personas no estuvieron más de 15 días

detenidos. Desarrolla que en el año 1973 tenía la calidad de cabo primero y al regresar de Santiago fue ascendido a sargento 2°, como en el año 1974. Cuenta que las cuatro personas detenidas estaban en el pabellón, por eso piensa que la compañía andina andaba en campaña. Dice que Podlech era Abogado y a veces iba al Regimiento a relacionarse con los altos mandos. Pero tenía mala fama. Nunca lo trató, sin embargo los comentarios eran que era de fuerte presencia en el regimiento. En su vida en el regimiento tenía relaciones con los oficiales de la compañía respecto de instrucción. Manuel Fernández Carranza instauró como castigo pegar latigazos a quienes tuvieran malas conductas en el regimiento, con una fusta específicamente. Lo anterior lo vio, pues se hacía en presencia de todo el regimiento. Proclama que las personas que conducían eran de planta, no conscriptos y se desempeñaban en el taller de mantenimiento de mecánica de vehículos. No era más de cuatro esos conductores que cumplían ese rol. El conductor de quien hace referencia era espontaneo, otros eran muy reservados, casi no conversaban, pero este era un hombre corriente y alegre. Adopta que se lo contó cuando iba camino al regimiento, cerca de la ferretería olleta y ahí supo lo sucedido. En el caso de la persona que mataron en el lago Villarrica, era una persona que hablaba en la guardia, entretenía a las otras. Evidencia que lo veía cuando solicitaba permiso para retirarse. Estuvo su tiempo en la guardia. Lo describe como una persona delgada, medio de tez pálida, más bien destruido, no más de un metro setenta, ni muy bajo ni muy alto. La mayoría lo veía porque estaba en la guardia, en un cuartito chico. El trato era amigable. La orden debe haberla dado el Coronel Luis Ortiz Lorenzo o de la oficina de Podlech, aunque lo lógico que el coronel haya dado la orden de eliminarlo. Vio cuando lo subieron al bote el Teniente Velásquez y el cabo Farías.-

En declaración judicial de fecha 24 de septiembre de 2015, rolante de fs. 8 a 9; (Tomo I), se lee en lo pertinente declaración de fs. 726 a 730. Asevera que está bien y le parece bueno que Aedo haya declarado. Recuerda que cada uno de ellos había matado alguien, pero si él dice que pasó así, debe ser en esa forma. Porque el solo supo de oídas. Sin embargo sus declaraciones con las de Aedo concuerdan. Reitera que las cuatro personas atadas a las camas de la compañía Andina, pero pueden ser más, como dice Aedo, pues solo miro superficialmente y de pasada, divisando cuatro. Cuando en Capitán los reunió dijo algo así como que irían a interrogar a esos gallos hasta las últimas consecuencias. Ahora bien, al decir hasta las últimas condiciones, el deponente se retiró a su casa porque había estado de servicio y le correspondía descanso. Espeta que Aedo le decían el General por una gorra que tenía. A Farías lo vio ejecutar a la persona en Villarrica, además de presenciarlo Heraldo Espinoza, Lizama y Uribe.

Anexa que andaban haciendo instrucción con el Teniente Velásquez. El sorteo fue mediante papeles. De acuerdo al set fotografías, las cuales se agregan al proceso para todos los efectos legales, no obstante el deponente no reconoce a ninguna de las personas exhibidas.-

En declaración judicial de fecha 22 de abril de 2016, rolante de fs. 293 a 294; (Tomo I) expresa que la persona que fue ejecutada en Villarrica, cuando llegó al lugar en el que se encontraban dijo que no será para matarlo. A lo que el teniente **Velásquez** ostento que iban hacer una instrucción. Luego **Velásquez** les dijo que lo habían mandado del regimiento para darles el trabajo de matarlo. A la pregunta realizada, dice que descartaría una cara redonda, su fisonomía era más bien delgada, de no más de un metro setenta. Le consta que a los centinelas les hablaba de la guerra de Camboya, como una persona que tenía esperanza de que fueran a cambiar las cosas. Era sociable. El tribunal le exhibe fotografías de fs. 1024 y de fs. 1029 a 1030, el deponente dice que se inclinaría por reconocer a la persona de fs. 1024. La persona estaba más bien desnutrido. Se queda con el de fs. 1024. Recuerda que en una ocasión lo escuchó decir lo de Camboya y de unos lagartos, como de fuerzas especiales dentro de la guerrilla, puede ser o como que en Camboya estaban avanzando. Escuchó esto de pasada, nunca estableció una conversación con él, de haber sido así lo hubiese señalado, de todas maneras, no hubiese tenido ningún escrúpulo de decir la verdad de todo ello. Nunca supo como llegó esta persona al regimiento ni de dónde venía. Esto seguro lo manejaban los altos mandos. A la pregunta realizada, dice que sabía que el señor Podlech estaba a cargo de la fiscalía, pero siempre lo divisó de lejos. Pasaba directo a la comandancia. Recuerda que esta persona no hizo ningún gesto de dolor ni reclamó que lo fuesen a matar. Luego se acercó y vio por su frente a la altura de la nariz un hilo de sangre saliéndose. Colige que la persona no llegó con signos de torturas o malos tratos a Villarrica. Plenamente consciente. Se atrevería a decir que nunca lo torturaron.

En declaración judicial de fecha 2 de marzo de 2018, rolante de fs. 506; (Tomo II) el tribunal le exhibe retrato hablado de la presunta víctima de autos, rolante de fs. 503, a lo que el deponente narra que la cara menuda puede coincidir y el cabello negro, desnutrido eso sí, tal vez de cara no tan ancha. Díficil. Pero dice que no lo vio directamente a la cara. Nunca estableció diálogo con él. Lo de Villarrica lo vio entero. Era el mismo que había visto en el Regimiento. Cuenta que el que lo mató fue el cabo Farías. Venía casi saliendo del curso. Era el más nuevo y en edad también; como funcionario estaba recién. El de apellido Lavín. Era un muchacho bien apuesto y joven.

En diligencia de careo entre Manuel Segundo Mora Torres y Benjamín Rodemil Farías Lavín, de fecha 6 de diciembre de 2021, rolante de fs. 1088 a 1091; (Tomo III) el deponente alega que no conoce con quien se le carea. Posterior a esto ratifica la declaración rolante de fs. 3 a 8. Excepción de la declaración de fs. 8, dice que hay una cosa ahí, no era **Uribe** el teniente, sino que **Velásquez**, un comando. En primer lugar **Farías** era el menos antiguo porque era cabo segundo, cabo primero, de eso de las fechas que él habla no tiene conocimiento exacto. Se atreve a decir que lo que vio, en el momento sustancial que los convoca, que el haya sido, que haya andado por aquí o por allá, por lo que él dice no nombra las fechas, no se acuerda, pero él tiene razón en decir que era el cabo menos antiguo; le consta que Farías llegó, no hacía mucho tiempo que estaba en el ejército como cabo segundo y salió nominado para el Regimiento Tucapel, peor esas fechas no las maneja, lo que se está planteando es que este hecho lo vio y es fidedigno de Dios y si tienen duda ante él, que le pregunten a Santiesteban, Espinoza o Lizama que estaban ahí. Con respecto a que dicen que existían dos Farías, el deponente señala que no, que él está hablando de la persona con la cual se le carea, porque él llegó a su compañía. En cuanto a sus características físicas, le resulta difícil, pero le parecía un joven, que le caía muy bien, cree que tenía los ojos, la estatura, eso la fisonomía no la recuerda bien, pero era un muchacho agradable, que tenía sus ojos a lo mejor azules, no recuerda. Pero lo que está atestiguando aquí la parte sustantiva que lo convoca, como que se llama Manuel Mora es que está contando lo que sucedió allí, cuando el hombrecito dijo que no creía que lo llevaran para matarlo. El teniente Velásquez, le dijo que no, que ahí iban a realizar una instrucción. Se les dio la instrucción a los conscriptos para que se corrieran para atrás. Dice que Farías era el único con ese apellido que llegó a su compañía, no ubica a ninguno que hubiera tenido un alcance de nombres, se acuerda de Lavín, que para él era muy agradable, se alegra acordarse de esta persona, pero no sabe los rasgos físicos ni los tiene. Dice que lleva 80 años en el cuerpo y le es muy difícil memorizar esto.

A.2 ARNOLDO AEDO MATUS (33 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) Declara a fs. 87 a 90 (Tomo I) y de fs. 113 a 117; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 6 de agosto de 2015, rolante de fs. 87 a 90; (Tomo I) explana que para el año 1973, ostentaba el grado de sargento segundo y se encontraba cumpliendo servicios en el Regimiento Tucapel de Temuco, específicamente como instructor de la 1° compañía de cazadores. La compañía estaba a cargo del capitán Rodolfo Vargas Campos y los seguía en el mando el teniente Nolberto Uribe Moroni. Del resto de los clases de la compañía, estaban los sargentos Santiesteban Domínguez, Abdón Pérez Vera,

Anacleto Aguirre, Rubén Morales Quijada, cabo Hernán Farías Veliz y otros que no recuerda en el momento. Para el día 11 de septiembre de 1973, una vez ocurrido el pronunciamiento militar tuvo que viajar en horas de la tarde a Santiago en un avión Hércules junto a la 1° compañía de cazadores, a cargo del capitán Vargas, sin ser informados de la misión a desarrollar. Recuerda que aterrizaron en el Aeropuerto de Cerrillos y se trasladaron al estadio militar, para luego a los días posteriores realizar allanamientos en las poblaciones Lo Hermida, La Bandera y La Legua. Posteriormente, efectuaron servicios de guardia y custodia de detenidos en el Estadio Nacional, como también en Televisión Nacional y Radio Cooperativa, para luego a fines de octubre regresar a Temuco. Hace presente, que a los pocos días de permanecer en Santiago, tuvo que viajar en avión a Temuco, por orden del capitán Vargas, con la finalidad de acompañar a un soldado de apellido Bello, ya que su madre se encontraba enferma, por lo que al llegar al regimiento lo entregó en la guardia y se regresó inmediatamente a Santiago en tren. Posteriormente y a su regreso al Regimiento Tucapel, le correspondió incorporarse al servicio de guardia en el cuartel, como participar en una campaña a la comuna de Currarehue, Reigónil y Púesco, en los meses de verano del año 1974, donde solo se hizo soberanía y controles en la frontera, no registrándose nunca detenidos. Con respecto a detenciones, allanamientos o ejecuciones de personas en el Regimiento Tucapel, debe señalar que en una sola oportunidad se vio involucrado en este tipo de procedimientos, el cual pasa a relatar. Recuerda que en fecha posterior a su regreso de Santiago, que podrá corresponder a los días comprendidos a la primera quincena del mes de noviembre, mientras se encontraba en el regimiento fue notificado personalmente en el pabellón de la compañía cazadores por el capitán Rodolfo Vargas, para que estuviera a disposición a las 20:00 horas, en la sala de guardia del regimiento con el fusil SIG, más dos cargadores, con la finalidad de cumplir una misión especial, enterándose de ese mismo día que el teniente Uribe Moroni y los instructores de la compañía sargentos José Gajardo Gajardo, Santiesteban Domínguez, Anacleto Aguirre y un cabo de apellido Farías, quien había llegado hace poco trasladado de Santiago, también debían estar a esa hora en la sala de guardia. A las 20:00 horas, se reunieron todos los antes mencionados en la sala de guardia y se desplazaron a pie todo el grupo al mando del capitán Vargas con destino a la Isla Cautín, específicamente al polígono. Detalla hechos relativos a la causa 113.089 de este Tribunal. Urde que los detenidos políticos que llegaban al Regimiento Tucapel, no le correspondió observar dicha situación, ya que todo era manejado bajo reserva por la sección dos. Lo que sí tiene claro, es que había un grupo de interrogadores, conformado por detectives y del Ejército, pero ignora donde llevaban a cabo sus

labores. Se refiere a hechos relacionados con la víctima Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui.-

En declaración judicial de fecha 1 de octubre de 2015, rolante de fs. 113 a 117; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 87. Agrega que hubo una persona que aparecía y desaparecía cuyo nombre no conoció, por no tener contacto con él. La describe una persona aislada del personal de planta, era distinto al resto del personal. Le decían turco porque no le conocían su firma. Dice que nunca antes había declarado. Trabajó en la registratura del regimiento, recepcionaba todos los documentos que llegaba al cuartel. Se recepcionaba para la firma del comandante. Además de recibir la información secreta. Cuando llegaban los estafetas no se registraba nada. Cuando llegó habló con el ayudante que le diera dinero para comprar un libro de registro. En el libro registraba todo. Estuvo desde noviembre del año 1973 o poco después. El ayudante era otra persona. La documentación secreta era anotada con rojo y la ordinaria con azul. La secreta pasaba a la sección segunda. La azul la pasaba al comandante. Ahí ascendió a suboficial mayor. Espeta que trabajó con la oficial ayudante **María Concha**, al parecer teniente y otra Astrid Bruhin. Cree que tiene una bencinera en José Miguel Carrera. A la pregunta realizada, una vez producido el golpe estaba en control de carretera a la salida de Temuco, con su escuadra. No tenían conocimiento del golpe de estado. Fue una sorpresa. Estaban en la carretera, llegó una patrulla que les dijo que volvieran al regimiento porque había golpe de estado. El soldado Bello fue con ellos a Santiago, fueron con dotación completa, dos oficiales. Se refiere a hechos acaecidos en la causa rol 113.089. El tribunal le lee en lo pertinente las declaraciones de fs. 364 y siguientes y fs. 839 y siguientes, el deponente atestigua que respecto de lo que declaró Mora puede sea verdad, ya que él era una persona tranquila, los hechos deben ser así: respecto de la otra persona que hace mención, ahí se quemó solo, nunca anduvieron instructores de distintas compañías juntos, como señala esa persona; no estuvo allí y tampoco conformó parte de una compañía de contraguerrillas. Nunca trabajó al mando de ese oficial, nunca al mando de un teniente. Nunca trabajó en la zona de Villarrica, sino con el capitán Vargas, en Loncoche, Ciruelos, aquí pernoctaron, pero bajo el mando de capitán Vargas.

A.3 JOSÉ FERNANDO ROMERO SILVA (20 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 84 a 86; (Tomo I) y a fs. 124 a 126; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre de 2015, rolante de fs. 84 a 86; (Tomo I) aquilata que para el año 1973, cumplía con el servicio militar en el Regimiento Tucapel de Temuco, encontrándose encuadrado

en la 1° compañía de cazadores, al mando del sargento **Hernán Santiesteban Domínguez**. Del resto de los clases conmemora a **Garrido, Barros**, sargento **Anacleto Aguirre, Arnoldo Aedo, Abdón Pérez**, entre otros que por el tiempo transcurrido no recuerda. Para el día 11 de septiembre de 1973, una vez ocurrido el pronunciamiento militar, recuerda que su compañía se encontraba en el regimiento y en la madrugada del 12 de septiembre, la 1°compañía de cazadores, debió partir al aeropuerto y tomar un avión Hércules con destino a Santiago, ignorando a que misión se dirigían, ya que nadie daba información alguna. Recuerda que aterrizaron en el aeropuerto de Cerrillos y se trasladaron al Estadio Militar, para luego realizar allanamientos en las poblaciones La Legua, Lo Hermidas y La Bandera. Posteriormente, efectuaron servicios de guardia y custodia de detenidos en el Estadio Nacional, como también resguardar Radio Cooperativa y Televisión Nacional, labor que realizaron alrededor de un mes, para luego a fines de octubre regresar a Temuco. A su regreso al Regimiento Tucapel, le correspondió efectuar servicios de patrullajes de toque de queda, sin embargo, nunca se detuvo a persona alguna, como tampoco se le disparó a aquel que infringiera los horarios establecidos. Con referente a la pregunta, señala que nunca se vio involucrado en detenciones, ejecuciones, torturas o misiones como trasladar cuerpos en camiones militares a los puentes u otro lugar para ser lanzados al río o bien ser inhumados en algún terreno, como tampoco nunca le correspondió disparar o presenciar algún procedimiento donde se les diera muerte a personas por no obedecer las voces de alto. En el Regimiento Tucapel, nunca vio personas detenidas, solo recuerda que en una oportunidad observó a Ricardo Sanhueza, a quien apodaban “el cojo”, quien fue su profesor y además era sabido que militaba en el partido Comunista, ser llevado en calidad de detenido hasta las dependencias de Regimiento, sin embargo, nunca supo que pasó con él al interior del regimiento. Se refiere al homicidio de Exequiel Zigomar Contreras. Otro hecho que le gustaría señalar, es que cuando se produjo el denominado asalto al polvorín, se encontraba en la ciudad de Valdivia, sin embargo, se enteró con posterioridad, que unos comunistas habían tratado de asaltar dicho lugar, lo cual fue un montaje, para justificar las muertes de un grupo de personas que no podría especificar, que se encontraban detenidas en dicho lugar. Atina que una vez que en octubre de 1973, cuando retornaron de Santiago en el avión hércules, llegaron al Regimiento Tucapel los cabos segundo Benjamín Farías, conocido en la primera compañía de cazadores como “el loco” y Luis Oporto a quien le apodaban “el canguro”, ambos provenientes de la Escuela de Infantería. Finalmente, señala que finalizó su servicio militar en el 30 de septiembre de 1978. Es todo lo que manifiesta al respecto.

En declaración judicial de fecha 2 de noviembre de 2015, rolante de fs. 124 a 126; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 84. Recuerda a alguien que le decían “bala loca” o “pistola”. Era un instructor de la segunda sección de cazadores o de mortero. Tiene una cosa de vidrios en calle Zenteno, casi al llegar a Carabineros de Temuco, de la segunda comisaria. Cree que una vez sacó una pistola y le pegó un tiro a alguien. Siempre se conocían por sobrenombres, por lo que no sabe su real nombre. A la pregunta realizada, no supo lo de Omar Torres Antinao. Una vez Matus se iba a matar en el regimiento. Era raro Matus. Lo consideraba una bala escondida. Funda que había un solo Farías y que una vez que este se la dio de teniente ante una dama que estaba conquistando. La que un día fue a preguntar por él a la guardia como el teniente Farías. El deponente estaba de comandante de relevo con el comandante de guardia Labraña. Se baja la niña del auto y pregunta por el teniente Farías, y ellos les indicaron que era Cabo. La niña le mando un aletazo recriminándole que solo era un cabo y que lo tenían sacando la mierda de los caballos, como le habían dicho el deponente y su grupo. El tribunal le lee en lo pertinente la declaración de fs. 835, a lo que el deponente Se refiere a otros hechos. Recuerda que cuando Farías y Oporto llegaron a Temuco le contaron que ellos habían matado a Allende. Este hecho no lo supo. Es probable que haya pasado, así como se cuenta porque Velásquez y el loco Espinoza los hicieron comer perros en la Isla. Otro que manejaba era el Negro Morales. A la pregunta realizada, no sabe quién puede haber sido la persona que mataron en Villarrica.

A.4 JOSÉ ALEJANDRO OPORTO SEGUEL (26 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 145 a 147; (Tomo I) y a fs. 178 a 179; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 13 de diciembre de 2015, rolante de fs. 145 a 147; (Tomo I) evidencia que, para el año 1973, ostentaba el grado de cabo 2ºalumno y se encontraba en la Escuela de Infantería de San Bernardo, recordando que una vez ocurrido el pronunciamiento militar el día 11 de septiembre, las clases fueron suspendidas en la escuela y se comenzó a efectuar servicios de patrullajes de toque de queda. En su caso no le correspondió, ya que el día 15 de septiembre de 1973, producto del fallecimiento de su padre en la comuna de Angol, tuvo que viajar a su funeral y permaneció alrededor de un mes con permiso, regresando recién al parecer el 20 de octubre de ese año a Santiago, donde se reincorporó a las clases, las cuales ya se habían normalizado. Recuerda que las clases finalizaron a fines de octubre o inicios del mes de noviembre, instancia donde se despachó al alumnado a sus hogares, regresando en su caso a su domicilio en la comuna de Angol. En enero de 1974 se presentó en Santiago y

recibió su destinación al Regimiento Tucapel de la ciudad de Temuco, presentándose en marzo de ese año junto a los cabos **Benjamín Farías Lavín**, **Luis Gutiérrez González** apodado el “patita de carburo”, **Robles** apodado “sapo” y **Barrientos** apodado “burro”. Recuerda que **Benjamín Farías** y el deponente, fueron encuadrados como instructores en la 1ª compañía de cazadores, la cual estaba a cargo del capitán **Rodolfo Vargas Campos** y los seguía en el mando el teniente **Uribe**. Del resto de los clases que conformaban la compañía, estaban los sargentos **Santiesteban**, **Anacleto Aguirre**, **Rubén Morales**, **Arnoldo Aedo**, **Pino Palacios**, también había un soldado de la compañía que era cabo reserva de apellido Contreras. Las labores que le correspondió desarrollar a su llegada al Regimiento Tucapel, fueron las de servicio de guardia, patrullaje de toque de queda, régimen interno, guarda almacén, vestuario y equipo, como también conductor de los servicios, secretario y mayordomo del casino de suboficiales. Del mismo modo, le tocó participar en campañas a la comuna de Curarrehue, Reigónil y Añihuarraqui, en los meses de verano del año 1974, donde solo se hizo soberanía y controles en la frontera, no registrándose nunca detenidos. Durante su permanencia en el Regimiento, si observó personas detenidas en el comedor de los soldados conscriptos, y en el gimnasio, las cuales seguramente eran sometidas a interrogatorios, desconociendo en que dependencias se llevaban a cabo, pero si sabe que todos los detenidos eran interrogados. La sección 2 del Regimiento, a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, era la encargada del tratamiento y destino final de los detenidos. Esta sección estaba conformada por los suboficiales Orlando Moreno Vásquez, Schonner, los cabos Luis Barrenechea, Guillermo Castro Herrera, un detective de apellido Quiroz y otros que no recuerda en el momento. Debe hacer presente, que con el detective Quiroz, tuvo problemas en más de una oportunidad, ya que en ocasiones en que se encontraba de servicio de guardia tenía la costumbre de sacar soldados de la seguridad del Regimiento o del propio servicio, para ir a practicar allanamientos o detenciones, por lo que le negaba tal situación, ya que la seguridad del cuartel no se podía ver disminuida ante cualquier emergencia. Con relación a detenciones, allanamientos, ejecuciones, como también le haya correspondido formar parte de algún contingente para lanzar cuerpos al río, lagos o bien ser enterrados en algún terreno, manifiesta que en ningún caso tuvo que cumplir o presenciar algunas de las situaciones antes mencionadas. Espeta que había un organismo denominado SIRE, que funcionaba en una dependencia en el mercado de Temuco, desconociendo que tipo de labores se realizaban, recordando solo al conductor de Ejército de apellido Bahamonde. También hace presente, que formó parte de la compañía contraguerrilla, la que posteriormente fue denominada Comando 8. Esta

compañía estaba al mando del teniente Sergio Velásquez y la conformaban los cabos Bobadilla, Juan Labraña Luvecce, Benjamín Farías, Tomás Hidalgo, Heraldo Espinoza, suboficial Ulloa, sargento Jorge Venegas Fuentes y otros que no recuerda. además, estaba conformada por una sección de treinta soldados Mario Luengo, quien era su vecino, uno de apellido Caillet, uno de apellido Sepúlveda, quien era profesor o inspector general del Liceo Industrial de la calle Uruguay de Temuco, uno apodado “caharro”, quien vivía al lado del Puente Quepe. Con relación a la consulta realizada, señala que en el periodo que conformó la compañía contraguerrilla, vale decir, desde su creación en el año 1974 hasta el año 1976, nunca le correspondió desarrollar ejercicios o campañas en el Lago Villarrica, recordando que a los únicos lugares a los cuales salió con la compañía fueron Monteverde, sector La Colonia de Lautaro, Niágara de Padre Las Casa, Loncoche y la Isla Cautín. Con respecto a la ejecución de una persona llevada a cabo en el lago Villarrica por miembros de la compañía contraguerrilla, manifiesta que desconoce e ignora las circunstancias en que ocurrió este hecho, por cuanto y como indicó anteriormente, nunca le tocó hacer campaña o instrucción en el lugar antes mencionado. Del mismo modo, tampoco tuvo conocimiento por comentarios de la ejecución de alguien en el Lago Villarrica. Se refiere al homicidio de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui.

En declaración judicial de fecha 3 de febrero de 2016, rolante de fs. 178 a 179; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial de fs. 145. Sostiene que no perteneció de un modo orgánico a la compañía contraguerrilla, sino que participó en ejercicios con ellos, participando como apoyo logístico, no como instructor. Entrega al tribunal una fotocopia de los antecedentes personales que obran en el Ejército respecto de su persona. Colige que llegó en febrero del año 1974 al Regimiento Tucapel de Temuco. El tribunal le lee en lo pertinente la declaración de fs. 832 y siguientes anexando que esa es una presunción, nunca llegó antes. En esa época era alumno activo de la escuela de infantería en San Bernardo. El tribunal le lee en lo pertinente la declaración de fs. 835 y siguientes, asevera que no puede responder lo que dice esta persona, porque son sus dichos con respecto de Farías y su presencia en Temuco para noviembre de 1973. A la pregunta realizada, si conoció al mayor Aquiles Huerta Infante. Era muy buena persona ese caballero. Era oficial de reserva. Recuerda que no tenía ninguna compañía bajo su mando. Siempre lo veía haciendo servicio como oficial de ronda; no recuerda a alguien que trabajara estrechamente con él. Era de caballería, le gustaban los caballos. No supo que haya participado en la ejecución de un comunero mapuche para el sector de Chol Chol.

A.5 RICARDO SEGUNDO TAPIA MELO (20 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 156 a 157; (Tomo I) y a fs. 180; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 21 de enero de 2016, rolante de fs. 156 a 157; (Tomo I) expresa que para el año 1973, cumplía con su servicio militar en el Regimiento Tucapel de Temuco, encontrándose encuadrado en la 1°compañía de cazadores, 3°sección, 3°escuadra, compañía al mando del capitán Rodolfo Vargas Campos y seguidamente el teniente Uribe Moroni. De los clases a cargo de las secciones se encontraban los sargentos Hidalgo, Pérez, Anacleto Aguirre, Arnoldo Aedo, Garrido, Hernán Santiesteban, el suboficial **Correa** y otros que no recuerda. Para el día 11 de septiembre de 1973, una vez ocurrido el pronunciamiento militar, recuerda que se encontraba en la población “amanecer”, junto a su escuadra, es decir, alrededor de 12 soldados, efectuando labores de orden público, debido a que habían manifestaciones, siendo ordenado en horas de la noche regresar al regimiento, siendo informado de que toda la 1°compañía de cazadores viajaría a Santiago en la madrugada, por lo que partieron al aeropuerto y volaron a Santiago en un avión hércules, ignorando a que misión iban, ya que nadie daba información alguna. Recuerda que aterrizaron en el Aeropuerto Benítez y se trasladaron a Famae, para luego a los días posteriores realizar allanamientos en las poblaciones Lo Hermida, La Bandera y La Legua. Del mismo modo, efectuaron servicios de guardia y custodia de detenidos en el Estadio Nacional, como también la antena de la Radio Cooperativa y Televisión Nacional, para luego regresar a Temuco, no teniendo claro la fecha de su retorno, pero esto ocurrió a mediados del mes de noviembre o la primera semana de diciembre, enterándose por comentarios al interior de la unidad militar que habían asaltado al polvorín. A su retorno al Regimiento Tucapel, se percató que habían instructores y soldados provenientes de Santiago, recordando solo a un clase de apellido Oporto. Recuerda que les correspondió efectuar servicios de patrullajes de toque de queda y guardias en el cuartel, partiendo al poco tiempo después a la comuna de Currarehue, permaneciendo los meses de enero, febrero, marzo y abril en la cordillera, periodo que solo se hizo soberanía no registrándose detenidos. Durante el desarrollo de los servicios de patrullajes, nunca practicó o alguien de la tripulación, detuvo a personas por infringir el horario de toque de queda o de alguna situación en especial, debiendo agregar que tampoco le correspondió disparar o presenciar algún procedimiento donde se les diera muerte a personas por no obedecer las voces de alto. En el Regimiento Tucapel, si observó a personas detenidas las cuales eran mantenidas en el gimnasio, desconociendo que destinos se les dio a estas personas como también en qué lugar o

dependencias eran interrogados, debiendo hacer presente que nunca le correspondió custodiar detenidos en la unidad militar. Depone en relación al homicidio de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui.

En declaración judicial de fecha 3 de febrero de 2016, rolante de fs. 180; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial. Ante la pregunta realizada, dice que perdió la noción del tiempo porque los sometieron a un gran estrés cuando se fueron a Santiago. No les permitieron llevar relojes, estuvieron a todo sol, comiendo mal, las guardias eran extensas, no les permitían dormir bien, por lo que esa es la razón que cree que estuvieron como dos meses. Nunca había ido a Santiago y llegaron a una parte que no conocían. Las órdenes en Santiago era que no tenían que hablar con nadie. Ante la pregunta realizada, por el diario o comentarios se sabía que en tal o cual parte habían matado a una persona. Nunca estuvo de modo presencial en alguna de ellas. Se refiere a hechos ocurridos en causa rol 113.089.-

A.6 RUFINO QUEPUMIL BURGOS (20 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 142 a 144; (Tomo I) y a fs. 181 a 182; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 24 de octubre de 2015, rolante de fs. 142 a 144; (Tomo I) arguye que, el 10 de enero del año 1973, ingresó al Regimiento Tucapel de Temuco a efectuar el servicio militar obligatorio, el que duró hasta el 31 de diciembre de 1974, ocasión en la que finalizó oficialmente su servicio militar. Una vez comenzando dicho servicio, fue designado a la 1°compañía de cazadores, 3° escuadra, 3°sección, recordando que quien estaba a cargo del regimiento era el coronel Pablo Iturriaga Marchesi, los oficiales que recuerda que formaban parte del contingente eran el mayor Jofré, Leal, Capitán Fernández, capitán Vásquez Chahuán, el capitán Rodolfo Vargas Campos, quien era el comandante de compañía. Además, se acuerda del teniente Manuel Gran López y el teniente Nolberto Uribe Moroni. De los instructores de la compañía, se encontraban el suboficial mayor Rómulo Correa Yáñez, sargento Anacleto Aguirre, sargento Arnoldo Aedo Matus, Eduardo Pino Palaciones y el cabo Eduardo Garrido, el cabo José Abdón Pérez Muñoz, el sargento Hernán Santiesteban Domínguez. Con respecto a los cabos Benjamín Farías y Oporto, Cabo Robles, según se acuerda, estos habrían llegado con posterioridad a su llegada de haber cumplido servicios especiales en Santiago, pero no se acuerda exactamente la fecha en la que llegaron a cumplir funciones en el Regimiento Tucapel de Temuco, procedentes del Regimiento de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Para el año 1973, una vez ocurrido el pronunciamiento militar el día 11 de septiembre, fue parte de los soldados que fueron enviados a Santiago a

prestar servicios, llegando al aeropuerto Cerrillos en un avión hércules, posteriormente fueron enviados al Estadio Militar y luego cumplió funciones de custodia de las dependencias de canal 7 televisión y las antenas junto a la virgen del Cerro San Cristóbal. En ocasiones le tocó hacer allanamientos en las poblaciones Lo Hermida y La Bandera, dejando en claro que en esos servicios nunca vio fusilamientos o situaciones de esa envergadura, lo único que recuerda es que en uno de los allanamientos en la población Lo Hermida, presenció que un general puso a uno de los detenidos en las orugas del tanque y procedió a efectuar torturas con el sujeto, desconoce el nombre del dicho general. También hicieron custodia en el Estadio Nacional. Posteriormente, regresaron a Temuco en un vuelo de pasajeros de la compañía LAN Chile, no se acuerda si en el mes de octubre o noviembre del año 1973, ocasión en que le tocó reincorporarse a las funciones del regimiento, tales como guardias y controles de toque de queda, y posteriormente subió a la frontera al resguardo del paso Reigolí, al mando de un cabo de apellido Huenuman, no presenciando nunca situaciones de detenciones, torturas o fusilamientos de campesinos, dueños de predios o lugareños del sector. Con relación a la consulta realizada, debe manifestar que durante los patrullajes que le tocó hacer en Temuco, una vez que regresaron de Santiago, nunca vio fusilamientos, allanamientos, solo se abocaban al cuidado de las copas de agua, control de cumplimiento del toque de queda y el orden en la ciudad. Con respecto al “asalto al polvorín”, en esa fecha estaba cumpliendo servicios en el regimiento, sin embargo, fue hasta el otro día, que supo del hecho. Sin embargo, recuerda que al día siguiente, alguien le comentó que una camioneta del regimiento de marca Chevrolet, color verde, estaba ensangrentada, por lo que junto a unos compañeros de sección, se dirigieron a mirarla, comprobando que efectivamente dicho vehículo estaba todo lleno de sangre en su carrocería, como si hubiese sido utilizado en horas anteriores, camioneta que apodaban “el carnicero”, desconoce el porqué del apodo. Con relación a la pregunta realizada, debe indicar que nunca supo de la existencia de detectives en el Regimiento Tucapel, sin embargo, desconoce si efectivamente los hubo, por cuanto era difícil distinguir quienes eran funcionarios de civil del Ejército o personal de foráneo. Si se acuerda que el sector posterior al rancho, que era usado como gimnasio, era el lugar donde se procedía a mantener y torturar a los detenidos, aunque nunca presenció actos de ese tipo, sin embargo, era lo que se comentaba en el regimiento. Se refiere al homicidio de Exequiel Zigomar. Manifiesta que si bien, vio detenidos al interior del Regimiento Tucapel, no reconoció a ninguno de los que en algún momento vio en la sala del gimnasio mencionado en párrafos anteriores, utilizado para mantener a los detenidos. Es dable agregar que los militares de mayor rango, elegían a los

funcionarios de más confianza para encomendar las labores más delicadas o discretas, parámetros en los que el deponente no calificaba.

En declaración judicial de fecha 3 de febrero de 2016, rolante de fs. 181 a 182; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 142. Y aclara que, lo de esta víctima no tuvo conocimiento hasta que se lo mencionó el detective, cuando le habló de Matus a quien el deponente ubica por ser de la compañía, pero de otra sección, cree que de la primera de la misma compañía. A la pregunta realizada, no recuerda si estuvieron un mes o dos meses en Santiago, solo sabe que se fueron el día 12 de septiembre a Santiago. Ante la pregunta realizada, no recuerda la fecha exacta en que habrían llegado estos instructores nuevos a saber, Farías, Oporto y Robles, cree que fue después del golpe. Han pasado tantos años, recuerdas los nombres, al Oporto lo apodaban “cara con mote”. No recuerda fechas, pero sabe que llegaron. Se refiere a otros hechos.

A. 7 ARMANDO SEGUNDO VALLEJOS BARRA (20 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 164 a 166; (Tomo I) y a fs. 186 a 188; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 26 de enero de 2016, rolante de fs. 164 a 166; (Tomo I) arguye que, para el año 1973, cumplía con su servicio militar en el Regimiento Tucapel de Temuco, encontrándose encuadrado en la 1°compañía de cazadores, 3°sección, 1°escuadra, compañía al mando del capitán Rodolfo Vargas Campos y lo seguía jerárquicamente el subteniente Nolberto Uribe. De los clases a cargo de las secciones se encontraban Anacleto Aguirre, Pérez, Aedo, Santiesteban y otros que no recuerda en el momento. Para el día 11 de septiembre de 1973, una vez ocurrido el pronunciamiento militar, recuerda que se encontraba en el regimiento y la compañía de cazadores fue notificado para que viajara a Santiago en la madrugada, quedando en su caso excluido ya que una pequeña cantidad debía quedarse para los servicios de guardia. En su caso, quedó asignado solamente a los servicios de guardia y patrullajes de control de toque de queda, recordando que en más de una oportunidad se detuvo a personas por infringir el horario, los cuales eran llevados al regimiento, quedando estas personas en el gimnasio, desconociendo posteriormente que sucedía con ellos. En el Regimiento Tucapel, si observó a personas detenidas que se encontraban en el gimnasio, debiendo hacer presente que a un costado de los comedores de los soldados, en un gimnasio chico se llevaban a cabo interrogatorios bajo torturas, inclusive se veía cuando los colgaban de una rondana. Recuerda que le correspondió custodiar detenidos en el gimnasio, pero no conocía a ninguno de ellos. En ambos gimnasios había soldados de guardia que le podía corresponder a cualquier compañía y los

instructores y oficiales hacían las rondas a estos dos lugares. Del personal militar u otros encargados de los detenidos o que ingresaran a los gimnasios a llevar a cabo los interrogatorios, no conocía a ninguno, eran rostros nuevos que no había visto antes. Con respecto al “asalto al polvorín”, recuerda que se encontraba en Temuco, no puede precisar en qué lugar, pero se enteró de esta situación por comentarios a los días posteriores, no teniendo mayores antecedentes que aportar al respecto. Con referente a la pregunta realizada, debe manifestar que en el mes de noviembre de 1973, llegaron cabos nuevos de la Escuela de Infantería de San Bernardo al regimiento, recordando solamente a Oporto y Farías. Del mismo modo, le correspondió hacer campaña en los sectores cordilleranos de Currarehue, Reigonil, Cunco, Melipeuco y Lanco, no recuerda si fue en el mes de septiembre u octubre de 1973, registrándose solamente detenidos en el sector de Currarehue, a unos ocho kilómetros del pueblo hacia la cordillera. Recuerda que se detuvo a dos o tres personas en un aserradero, conforme a un listado que llevaba el más antiguo. El contingente que andaba estaba a cargo del capitán Varas y los clases Aguirre, Aedo, Santiesteban, Pérez y los soldados de su compañía de nombres Alejandro Melo, Héctor Jara Barra, Albornoz, Navarro y otros que no recuerda, pero eran casi toda la compañía. Los detenidos fueron trasladados en un jeep militar hasta el Regimiento Tucapel, desconociendo que sucedió con ellos posteriormente. Durante las campañas que duraron aproximadamente una semana, nunca ejecutó ni presencié la ejecución de alguna persona. Se refiere al homicidio de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui.-

En declaración judicial de fecha 4 de febrero de 2016, rolante de fs. 186 a 188; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 163 a 164. Ante la pregunta realizada, dice que eran civiles los que entrevistaban en el regimiento, andaban de civil. No conoció al capitán **Nelson Ubilla** ni lo ubicó dentro del regimiento. La guardia era cerca del gimnasio chico y algo se veía de lo que hacían dentro. Les amarraban los brazos y los colgaban a cierta altura y ahí los investigaban. Era duro para esas personas. Nunca ha sido una persona mala, campesino, criado en el campo. Tuvieron una crianza dura, su padre era estricto. Y le provocó impacto ver esas imágenes. Cree que se va a morir con el recuerdo de esas imágenes. No solo él como persona, sino también sus compañeros del regimiento con los que ha conversado. Tenía que estar vuelto hacia fuera, así que si los pillaban mirando podía ser castigada, por lo que era poco lo que podía ver, pero aun así vio lo que señala. Los que hacían esto no eran uniformados. A la pregunta realizada, no recuerda características físicas, algún nombre, algún apodo de estas personas que hacían esto. Solo recibían órdenes estrictas. Recuerda a los tenientes García, eran dos hermanos, eran como unos perros. Hasta el día de

hoy sufre de la espalda, ya que uno de ellos se subió a su espalda y saltaba por haberse ido en cuatro patas para delante en un ejercicio. A la pregunta realizada, dice que estuvo dentro del regimiento y no supo de las muertes que le señalan. Ellos tenían sus grupos secretos con los que salían. Es lo que dijo cuando lo entrevistaron. Si hubiese visto algo lo hubiese dicho, en ese tiempo nunca estuvo de acuerdo con lo que estaban haciendo. El 11, 12, 13 y 14 el gimnasio estaba lleno, cualquiera que se ponía "choro" lo llevaban para dentro. Los miristas usaban el pelo largo y los llevaban hacia dentro. Piensa que los que andaban más metidos eran los que tenían más estudios. Ellos tenían menos preparación, estaban en la guardia no más y salía a patrullar en los vehículos del ejército o si se apostaban en las carreteras, copec, agua potable, en todos esos lados. A la pregunta realizada, si conoció a un conscripto de apellido Matus, que era de su compañía. No recuerda si tenía algún apodo. No recuerda que se haya dado la información de lo sucedido con Contreras Plotsqui a todos reunidos en el regimiento y por parte del comandante. No lo recuerda. Ante la pregunta realizada, a ellos como personas los ordenaban cosas que debían haber realizado los de planta, y le ordenaban a cada uno. Como cuando la gente no se quería subir a los jeep, darles culatazos, pero los empujaba no más, sin golpearlos. Ante la pregunta realizada, **Anacleto Aguirre** y **Aedo** fueron las madres ahí. Una vez Aedo le pegó en el cuello con la palma de su mano porque no levantó un palo de fósforo, porque él se podía caer. Cree que estuvo como una semana sin poder mover el cuello. También sufrió la amputación de un dedo de su mano izquierda por un golpe que le dieron con un fusil en un ejercicio, nunca lo dieron de baja por eso. A la pregunta realizada, los boina negra eran comandos. Conoció a uno de nombre Garrido que era cabo. Lo echaron por salir a tomar con los conscriptos. Parece que lo echaron antes del golpe, porque no estuvo ahí cuando se produjo, según recuerda. Recuerda a algunos que acompañaban más a los clases, como Arturo Padilla, Edgardo Albornoz de Teodoro Schmidt de la compañía. A Arturo Padilla le sacaron el grado por haber abierto un restaurante en la estación de ferrocarriles y ponerse a tomar tragos fuertes. Recuerda que estuvo detenido y lo castigaron como animal con una fusta delante de toda la compañía. Después de esto le apodaron "bandido". A la pregunta realizada, no supo nada respecto de lo que se le pregunta de un joven de nombre José Adolfo Gamonal Suárez. A la pregunta realizada, por el lado de afuera de la guardia había un calabozo chiquito. Recuerda una persona civil cerca de esa sala, pero no recuerda haber visto a una persona por dos meses. A la pregunta realizada, los cabos Oporto y Farías los veían en el regimiento. Esto fue en 1973, de eso está claro, eso es lo que

recuerda. No eran instructores de ellos. De Hualpín había un chico que debe saber mucho de nombre Ricardo Gayoso, esto lo sabe porque tuvo conversas con él.

A.8 LUCIANO CÉSAR VERGARA RIVERA (20 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 161; (Tomo I) y a fs. 189; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 27 de enero de 2016, rolante de fs. 161 (Tomo I) explana que para el año 1973, cumplía con su servicio militar en el Regimiento Tucapel de Temuco, encontrándose encuadrado en la 1°Compañía de cazadores, 1°sección y escuadra, al mando del capitán Rodolfo Vargas Campos y lo seguía el teniente Pablo Gran López, Raimundo García Covarrubias, el subteniente Nolberto Uribe Moroni. De los clases a cargo de las secciones, se encontraba Marcelino Igor Salazar, Hernán Santiesteban, Arnoldo Aedo Matus y Anacleto Aguirre, Mora Torres y otros que no recuerda en este momento. Para el día 11 de septiembre de 1973 una vez ocurrido el pronunciamiento militar, recuerda que su compañía se encontraba en el regimiento y en la madrugada del 12 de septiembre, toda la 1°compañía de cazadores debió partir al aeropuerto y tomar un avión hércules con destino a Santiago, ignorando a que misión iban, ya que nadie daba información alguna. Recuerda que aterrizaron en el aeropuerto de Cerrillos y se trasladaron al estadio de campo de suboficiales, para luego a los días posteriores realizar allanamientos en las poblaciones Lo Hermida, La Bandera y La Legua. Posteriormente, efectuaron servicios de guardia y custodia de detenidos en el Estadio Nacional, como también en la antena de la Radio Cooperativa y Televisión Nacional, para luego a fines de octubre regresar a Temuco. A su regreso del Regimiento Tucapel, recuerda que le correspondió efectuar servicios de guardia en el cuartel y patrullajes toque de queda, servicio que nunca se registró alguna detención o ejecución de persona en la vía pública. En el regimiento Tucapel, si observó a personas detenidas por infringir el horario de toque de queda, las cuales al día siguiente quedaban en libertad previo pago de multa. Del mismo modo, le correspondió efectuar campaña en la zona cordillerana de Currarehue, patrullajes que nunca se registró detenciones o ejecuciones de personas. Recuerda también, que llegaron instructores nuevos de Santiago a la compañía, los cabos Oporto, Robles y Farías, éste último apodado “el loco”. Estos llegaron a los días posteriores a la llegada de su compañía de Santiago, es decir a fines de octubre o principios de noviembre de 1973. Inclusive en su condición de clase de servicio, el mismo lo recibió en la 1° de cazadores. Se refiere al homicidio Exequiel Zigomar Contreras Plostqui. Con relación a reservistas que se hayan incorporado el año 1973 al regimiento, recuerda al subteniente Marco Orellana Rojo, capitán Aquiles Huerta Infante, el teniente Sibert y otros que no recuerda en este momento. A fines de 1973, finalizó su servicio

militar en el Regimiento Tucapel, para luego continuar como civil, en diferentes oficios.

En declaración judicial de fecha 4 de febrero de 2016, rolante de fs. 189; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 161. Dice que le correspondió recibir como clase de servicio a tres cabos nuevos en el Regimiento Tucapel de Temuco en la fecha aproximada que señala en la declaración precitada, y lo recuerda porque el ayudante del regimiento llegó con ellos donde él estaba. Le indicó que era la primera compañía de cazadores. Le señaló que su capitán se llamaba Rodolfo Vargas Campos y que debían esperarlo porque no estaba y tampoco recuerda donde andaba. La compañía tampoco estaba. Estaba solo cuidando las dependencias, que es el rol del clase de servicio o cuartelero. Y ellos esperaron hasta que llegó el capitán Vargas, que cree haber llegado cerca de las 12:00, que era la hora en que debían llegar para que los soldados se lavaran previo a almorzar. Y estos fueron los cabos Oporto, Robles y Farías. A la pregunta realizada, el teniente Siebert tenía un taller en una calle cerca de Avenida Alemania donde se dedicaba al arreglo de radios, televisores blanco y negro. Era un gringuito que no era muy hábil en el mando. Era de edad en ese entonces. A la pregunta realizada, también trabajaba en el almacén de vestuario de equipo del batallón, como ayudante del sargento Anacleto Aguirre Rivero.

A.9 BENEDICTO OSSES CÓRDOVA (20 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 57 a 59; (Tomo I) y a fs. 239; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 23 de septiembre de 2015, rolante de fs. 57 a 59; (Tomo I) explicita que, para el año 1973, cumplía con su servicio militar en el Regimiento Tucapel de Temuco, encontrándose encuadrado en la 1°compañía de cazadores, 1°sección, al mando del sargento Hernán Santiesteban Domínguez. Como instructores de la sección recuerda a los cabos Armando Jaramillo y Pérez, del resto de los clases recuerda a Armando Vallejos y Padilla. Para el día 11 de septiembre de 1973, una vez ocurrido el pronunciamiento militar, recuerda que su compañía se encontraba en el regimiento y en la madrugada del 12 de septiembre, la 1°compañía de cazadores, debió partir al aeropuerto y tomar un avión hércules con destino a Santiago, ignorando a que misión iban, ya que nadie daba información alguna. Recuerda que aterrizaron en el aeropuerto de Cerrillos y se trasladaron al estadio militar, para luego realizar allanamientos en las poblaciones La Legua, Lo Hermida y La Bandera, posteriormente, efectuaron servicios de guardia y custodia de detenidos, en el estadio nacional, como también resguardar Radio Cooperativa y Televisión Nacional, labor que realizaron alrededor de un mes, para luego a fines de octubre

regresar a Temuco, siendo relevados por la segunda compañía de cazadores. A su regreso del Regimiento Tucapel, le correspondió efectuar servicios de patrullajes de toque de queda y guardias en la unidad militar, servicios que según recuerda, nunca culminaron con personas detenidas, así como tampoco nunca culminaron con la muerte de alguna persona. Con referente a la pregunta realizada, señala que nunca se vio involucrado en detenciones, ejecuciones, torturas o misiones como trasladar cuerpos en camiones militares a los puentes u otro lugar para ser lanzados al río o bien ser inhumados en algún terreno, como tampoco nunca le correspondió disparar o presenciar algún procedimiento donde se les diera muerte a personas por no obedecer las voces de alto. En el Regimiento Tucapel, observó alrededor de doce personas detenidas, de las que se decía que eran doctores, las cuales eran mantenidas en una dependencia ubicada a un costado del rancho, pero como soldado conscripto tenían restricción a transitar por dicha dependencia. Soslaya que en el mes de enero de 1974, y alrededor de ocho días, estuvo en campaña en Curarrehue, cumpliendo labores de patrullaje y soberanía. Se refiere a hechos relacionados con Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui. Hace referencia al denominado asalto al polvorín. Aquilata que llegaron personas al regimiento como reservistas, recordando al cabo Benjamín Farías, proveniente de Santiago, quien además fue instructor de la compañía de cazadores, el cual era conocido como el loco. Finalmente, señala que finalizó su servicio militar en el mes de diciembre de 1974.

En declaración judicial de fecha 4 de abril de 2016, rolante de fs. 239; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial prestada rolante de fs. 57 a 59. Y aclara primeramente que no era clase en regimiento sino que soldado conscripto; Armando Vallejos y Padilla eran soldados conscriptos; el viaje a Santiago fue el día 12 de septiembre de 1973, en la tarde, no recuerda la hora, pero ya estaba oscureciendo. Dice que no recuerda haber participado en patrullajes de control de toque de queda. A veces le tocaba acompañar al conductor a la distribución de los conscriptos que eran dejados en los puntos fijos, pero regresaba con el conductor del regimiento. Respecto del montaje de lo ocurrido en el polvorín, esto lo supo después. Recuerda que el loco Farías llegó después. No estaba cuando llegaron al servicio militar. No sabe si llegó antes de septiembre o después de septiembre del año 1973. Ensaya que no le correspondió integrar la compañía contraguerrilla. Dice que nunca vio a nadie desconocido de los que hacían servicio ahí no más, en una sala de la guardia, que era una sala de espera para relevos.

A.10 HUGO OMAR RAMOS PÉREZ (19 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 52 a 53; (Tomo I) y a fs. 240; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 24 de septiembre de 2015, rolante de fs. 52 a 53; (Tomo I) explica que en enero del año 1972, ingresó al Regimiento Tucapel de Temuco a efectuar el servicio militar obligatorio, quedando encuadrado en la 1°compañía de cazadores, 2°escuadra, 3°sección, recordando que quien estaba a cargo del regimiento era el coronel Pablo Iturriaga Marchesi, y de la compañía estaba a cargo el capitán Rodolfo Vargas Campos. De los instructores de la compañía, se encontraban los sargentos Arnoldo Aedo, Santiesteban, Anacleto Aguirre, Abdón Pérez Muñoz, Benjamín Farías y Oporto, ambos integraron al tiempo después a la compañía, desconoce de donde provenían, los cabos Lizama y Mora. Para el año 1973, una vez ocurrido el pronunciamiento militar el día 11 de septiembre, los hicieron levantarse alrededor de las tres de la madrugada desconociendo el motivo, se dispuso de forma inmediata, patrullajes y puntos fijos en los lugares estratégicos de la ciudad, sacando a toda la compañía a la calle muy temprano a controlar vehículos y sin información de ningún tipo. A los días siguientes, se siguió la misma rutina alternando las funciones entre guardias y patrullajes. Atina que fue él único de los soldados que no viajó a Santiago en los vuelos efectuados con posterioridad al pronunciamiento militar en aviones hércules, debido a que en esos momentos no había botas de su talla para poder cumplir funciones en la capital, quedándose en el regimiento, desempeñándose en funciones de guardias, patrullajes y labores propias del servicio. Además se quedó en Temuco el cabo de reserva Luis Castillo, quien una vez terminado el servicio militar, entró a Carabineros, y por lo que entiende hasta jubiló en esa institución policial, años después. Posteriormente, en noviembre y diciembre del año 1974, los enviaron a sectores rurales de la frontera a hacer patrullajes, específicamente al sector de Currarehue, con el fin de impedir el movimiento ilegal de personas en los límites fronterizos, inclusive pasaron el año nuevo en la cordillera. Indica que en ocasiones por órdenes del mando del regimiento, a gran parte de la compañía les tocó ir a hacer servicio de guardia en el complejo Maquehue de la Fuerza Aérea, en varias oportunidades, y en una de esas ocasiones vio en el interior del complejo, un detenido que era alto y delgado, de cabello oscuro por lo que recuerda, sin embargo, debe reconocer que lo divisó con rapidez, por lo que no se acuerda bien de mayores detalles. Con relación a la consulta realizada, debe manifestar que durante los patrullajes de control de toque de queda que le correspondió efectuar en Temuco, nunca se detuvo a persona alguna, salvo panaderos que por su trabajo se veían infringiendo el toque de queda, sin embargo ya eran conocidos, se les controlaba la identidad y eran dejados libres, lo mismo pasaba con algunas personas que eran sorprendidos bajo los efectos del alcohol, sin embargo, nunca

vio que se le haya disparado a aquel que infringiera los horarios establecidos. Al interior del regimiento si vio personas detenidas por temas políticos, entre los que recuerda a vecinos, del que se acuerda es el señor que estaba a cargo de la sede social y del único teléfono que había en la población Amanecer de Temuco, no se acuerda el nombre, a quien hasta hace poco divisó en la calle. Como también vio detenidos por infringir el toque de queda, sin saber que pasaba con ellos por no tener autorización para acercarse a estos. Con respecto a la pregunta realizada, debe indicar que si se acuerda que al interior del regimiento había un grupo de detectives dedicados a los interrogatorios, como también si existían dependencias para tales fines, de los que desconoce sus nombres, solo que era alto y grande. Con respecto a la consulta realizada, debe manifestar que en fecha posterior al 11 de septiembre de 1973, se integraron oficiales de reserva al Regimiento Tucapel, recordando entre ellos a uno de apellido Jara, otro de apellido Monsalve, Nolberto Uribe Moroni, Aquiles Huerta, Manuel Maldonado, un tal Tomás Hidalgo. Con respecto a los hechos que se investigan y que guardan relación con el homicidio de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, solo lo conoció a través de la prensa e ignora las circunstancias que rodearon su muerte.

En declaración judicial de fecha 4 de abril de 2016, rolante de fs. 240; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 52 a 53. Y ante la pregunta realizada, las salas en la guardia estaban juntas, era chico el espacio. Los arrestos de conscriptos y su detención en la sala de la prevención eran comunes. Algunos llegaban con copete, con la caña y ahí los arrestaban, por comportamiento malo, a los mismos soldados. Si conoció a Mora, era un instructor, no fue tan duro como ellos. Ante la pregunta realizada, no vio a una persona que haya estado por dos meses en la sala llamada prevención. Ante la pregunta realizada, dice que hizo puntos fijos en Barros Arana, para cuidar las casas de los sargentos en la población militar; también frente a la Ufro, donde vivían militares en unas casas chicas, cree que O'Higgins se llama esa población, que queda al lado de la población Lavandero. También a Maquehue. También en la población Amanecer, los mandaban de a dos. Ante la pregunta realizada, calcula que del año 1973 llevaban unos siete a ocho meses cuando llegaron los cabos que indica en su declaración policial.

A.11 VICENTE LINCOÑIR NAVARRO (20 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 68 a 69; (Tomo I) y a fs. 245; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 12 de septiembre de 2015, rolante de fs. 68 a 69; (Tomo I) narra que, para el año 1973 cumplía con el servicio militar en el Regimiento Tucapel de Temuco, encontrándose encuadrado

en la 1°compañía de cazadores, 3°sección, al mando del capitán Rodolfo Vargas Campos. Como comandante de sección se encontraban los sargentos Hernán Santiesteban y del resto de los clases recuerda a los cabos Pérez, Pino, Garrido y Anacleto Aguirre. Para el día 11 de septiembre de 1973, una vez ocurrido el pronunciamiento militar, recuerda que su compañía se encontraba en el regimiento y en la madrugada del 12 de septiembre, la 1°compañía de cazadores, debió partir al aeropuerto y tomar un avión hércules con destino a Santiago, ignorando a que misión se dirigían, ya que nadie daba información alguna. Recuerda que aterrizaron en el aeropuerto de Cerrillos y se trasladaron al Estadio Militar, para luego realizar allanamientos en las poblaciones La Legua, Lo Hermida y La Bandera. Posteriormente, efectuaron servicios de guardia y custodia de detenidos en el Estadio Nacional, como también resguardar Radio Cooperativa y Televisión Nacional, labor que realizaron alrededor de un mes, para luego a fines de octubre regresar a Temuco. A su regreso al Regimiento Tucapel, le correspondió efectuar servicios de patrullajes de toque de queda y guardias en la unidad militar, servicios que en ocasiones culminaban con más de una persona detenida, en su gran mayoría bajo la influencia del alcohol y por realizar faltas de respeto hacia los militares. El procedimiento con estas personas consistían en llevarlas hasta las dependencias del regimiento, lugar en el que permanecían la noche, para ser liberados al día siguiente, debe dejar en claro que estas detenciones nunca culminaron con la muerte de alguna persona, según recuerda. Con referente a la pregunta realizada, debe señalar que nunca se vio involucrado en detenciones, ejecuciones, torturas o misiones como trasladar cuerpos en camiones militares a los puentes u otro lugar para ser lanzados al río o bien ser inhumados en algún terreno, como tampoco nunca le correspondió disparar o presenciar algún procedimiento donde se les diera muerte a personas por no obedecer las voces de alto. En el Regimiento Tucapel, observó personas detenidas las cuales eran mantenidas en una dependencia ubicada a un costado del rancho, pero como soldado conscripto tenían restricción a transitar por dicha dependencia. Por otra parte, debe mencionar que en los meses de enero, febrero y marzo de 1974, estuvo en campaña en Currarehue, cumpliendo labores de patrullajes y soberanía. Se refiere a los hechos que guardan relación con el homicidio de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui. Hace referencia al “asalto al polvorín”. Arguye que hubo personas que llegaron al regimiento como reservistas, recordando al cabo Benjamín Farías, proveniente de Santiago, quien además fue instructor de la compañía de cazadores.

En declaración judicial de fecha 6 de abril de 2016, rolante de fs. 245; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial de fs. 68 a 69. Espeta que

conoció bien a quienes iba tal como lo señaló en su declaración policial, ya que **Vargas** era el capitán de la compañía, a Uribe Moroni también lo ubicaba y Santiesteban era de la compañía, era quien entregaba las armas de los soldados. Iban más personas que no reconoció.

A.12 JOSÉ FERNANDO VEGA HUENCHUMILLA (19 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 70 a 72; (Tomo I) y a fs. 248; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 26 de septiembre de 2015, rolante de fs. 70 a 72; (Tomo I) desarrolla que el 15 de enero del año 1973, entró al Regimiento Tucapel de Temuco a efectuar el servicio militar obligatorio, saliendo con un permiso especial el 1 de marzo del año 1975, quedando en esa ocasión a la espera de ser llamado nuevamente, lo que no sucedió nunca, en esa oportunidad fue designado a la 1°compañía de cazadores, 2°escuadra, 1°a sección, recordando que quien estaba a cargo del regimiento era el coronel Pablo Iturriaga Marchesi, los oficiales que recuerda formaban parte del contingente era el capitán Fernández, Vásquez Chahuán, Rodolfo Vargas Campos. Además, recuerda al teniente Manuel Grant López y Nolberto Uribe Moroni. De los instructores de la compañía se encontraban el suboficial mayor Rómulo Correa Yañez, sargento 1° Vicente Reyes, sargento Rubén Rubilar, el cabo 2° José Segundo Pérez, al sargento Arnoldo Aedo Matus, el cabo Eduardo Pino Palacios y el cabo Eduardo Garrido, sargento Anacleto Aguirre, el cabo José Abdón Pérez Muñoz, el sargento Hernán Santiesteban Domínguez. Con respecto a los cabos Benjamín Farías y Oporto, el cabo robles, hace presente que cuando regresaron de Santiago, los primeros días de octubre del año 1973, estos instructores, ya se encontraban formando parte del contingente de la 1°compañía de cazadores del Regimiento Tucapel, provenientes de la escuela de infantería de Santiago. Para el año 1973, una vez ocurrido el pronunciamiento militar el día 11 de septiembre, fue parte de los soldados que fueron enviados a Santiago a prestar servicio llegando al aeropuerto Cerrillos en un avión hércules, posteriormente fueron enviados al estadio militar y luego cumplió funciones en custodia de las dependencias de canal 7 televisión y las antenas junto a la Virgen del Cerro San Cristóbal. En ocasiones le tocó hacer allanamientos en las poblaciones La Legua, La Pincoya y La Bandera, dejando en claro que en esos servicios nunca vio fusilamientos o situaciones de esa envergadura. También hicieron custodia en el Estadio Nacional. Posteriormente regresaron a Temuco en un vuelo de pasajeros de la compañía LAN Chile, los primeros días del mes de octubre del año 1973, ocasión en la que le tocó subir a campaña en el sector de Reigonil, en Currarehue, a cargo del cabo Oporto, cumpliendo funciones de control de frontera y soberanía

nacional, ocasión en la que no presencié detenciones ni fusilamientos, ni menos fue parte de estos. Proclama que durante los patrullajes que le tocó hacer en Temuco, una vez que regresaron a Santiago, nunca vio fusilamientos, allanamientos, solo se avocaron al cuidado de las copas de agua, control del cumplimiento del toque de queda y el orden de la ciudad. Se refiere a lo ocurrido en el denominado asalto del polvorín. Se refiere a hechos ocurridos con otras víctimas.-

En declaración judicial de fecha 6 de abril de 2016, rolante de fs. 248; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 70 a 72.

A.13 HERALDO VALENTÍN ESPINOZA ELGUETA (32 años a la fecha, de los hechos) quien declaró a fs. 91 a 94; (Tomo I) y a fs. 264 a 265; (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 12 de septiembre de 2015, rolante de fs. 91 a 94; (Tomo I) recalca que para el año 1973, ostentaba el grado de sargento 2° y se encontraba cumpliendo servicios en el Regimiento Tucapel de Temuco, específicamente como instructor de la 1°compañía de la unidad especial. No recuerda quien era el oficial a cargo de la compañía, pero los seguía en el mando el teniente René Meza Larena y Manuel Espinoza Ponce. Del resto de los clases de la compañía, estaban los sargentos Rafael Lizama, Osvaldo Brito, Anacleto Aguirre, el Loco Salgado, Cabo Farías y otros que no recuerda en la actualidad. Cuenta que con anterioridad al 11 de septiembre del año 1973, recibían la instrucción que dirigían al sector de Nehuentué, muy cerca de Puerto Saavedra, lugar al que llegaron en un helicóptero de la Fuerza Aérea. Este operativo iba a cargo de los tenientes Manuel Espinoza, Manuel Vásquez Chahuán y otro oficial de menor grado que no recuerda su nombre. De los clases, iban los cabos Anacleto Aguirre, Rafael Lizama, Juan Carlos Figueroa Claus, Osvaldo Brito Brito, Nelson Schaff y el Loco Salgado. De los soldados participó una sección de la compañía andina. Explaya que camino al lugar les informaron vía radial, que esta era una situación de combate real, porque existían grupos de guerrilla asentados y preparados para atacarlos, motivo por el cual el teniente Manuel Espinoza, les dijo que si les disparaban, debían responder de la misma manera. Al llegar al terreno que correspondía a un fundo, se percataron que no había tal fuerza de ataque, sin embargo, procedieron a detener a cerca de 20 comuneros, quienes fueron golpeados e interrogados en el lugar, para luego en tres o cuatro camiones ser llevados hasta las dependencias del Regimiento Tucapel, lugar en el que el teniente Espinoza, llevó detenidos hasta el gimnasio, sin embargo, no podrá precisar cuánto tiempo permanecieron al interior del regimiento, desconociendo si quedaron en libertad o fueron eliminados. Los conductores de dichos camiones eran los clases, Bustamante, Dagoberto

Rebolledo y el cojo Martínez. Urde que comenzó a efectuar patrullajes de toque de queda y en una oportunidad detuvo al cocinero del restaurant Rapa Nui, el cual fue sorprendido fuera del horario, pero a esta persona lo fueron a dejar a su casa. No efectuó otras detenciones, como tampoco disparó ni presencié que alguien de su patrulla lo hiciera. En ocasiones se desempeñó como comandante de guardia en el regimiento, viendo llegar a personas detenidas por temas políticos, los cuales eran mantenidos en el patio y gimnasio, amarrados y algunos de ellos con sus vistas vendadas. Los detenidos eran interrogados, en el gimnasio, en una dependencia de la comandancia. Los que practicaban las sesiones de interrogatorios eran el capitán Nelson Ubilla, el teniente Manuel Espinoza y otros que no recuerda en la actualidad. De los clases que participaban eran el sargento Moreno, Mario Arias, Raúl Schonherr. A estos funcionarios no los vio en estas labores, pero se sabía en todo el regimiento que ellos eran los partícipes directos en los interrogatorios, ya que pertenecían al aérea de inteligencia militar. Se refiere a la detención de Gastón Lobos Barrientos. Hace referencia al asalto al polvorín. A su regreso al Regimiento le correspondió incorporarse a servicios de patrullajes de toque de queda y guardias en el cuartel, donde observó detenidos en la guardia y en el gimnasio. Dentro de las labores de su retorno no le correspondió participar en ninguna campaña militar. Expresa que en el Regimiento Tucapel existió una unidad especial o compañía contraguerrilla, de la cual formó parte, encontrándose al mando del teniente Velásquez, quien era comando. Soflame que el grupo presente en la muerte del joven en el Lago Villarrica, ocurrido en enero o febrero de 1974, no recuerda fecha exacta, estuvo conformado por el capitán **Velásquez** y otros oficiales comandos de grado de teniente y subteniente cuyos nombres no recuerda. Entre los clases presentes en este suceso estuvieron presente Rafael Lizama Saldías, Benjamín Farías, Loco Salgado, Juan Figueroa Claus, Anacleto Aguirre, Aedo Matus, el deponente y otros que no recuerda, además de un contingente del batallón de instrucción de unos 40 soldados presentes en el hecho. Ensaya que el conductor entregó el detenido al teniente Velásquez, situación que presencié junto a otros clases, y en esa misma tarde, el teniente Velásquez, hizo un sorteo con naipes españoles y a quien saliera la carta con la numeración mayor sería quien debía ejecutar a este joven, correspondiéndole a Lizama Saldías. A pesar de ello, el cabo Farías se ofreció de voluntario y lo mató. Esta ejecución ocurrió a orillas del lago, a unos 30 metros aproximadamente, lugar donde posicionaron al detenido de rodilla frente al lago, se encontraba a unos 15 metros junto al resto de los oficiales e instructores, quienes escucharon un disparo. Junto al joven posicionado de rodillas mirando el lago, se quedaron el capitán Velásquez, un oficial más que no recuerda y el cabo

Farías, este último ejecutante del disparo que mató a esta persona de un impacto balístico de pistola automática directo en la nuca. Luego de oír el disparo, se retiraron a sus carpas que estaban a unos 50 metros del lago. Solo los que menciono que estaban junto al joven antes de matarlo fueron los que se quedaron manipulando el cuerpo. Nadie de los que estaban alejados del lugar del hecho se acercó para retirar al fallecido, si no, como menciona, solo los que estuvieron junto a Farías. Para finalizar este relato, durante la noche de ese día, el capitán Velásquez, Farías y uno de los oficiales subieron el cuerpo a un bote particular que se encontraba en su campamento, adentrándose en el lago para lanzarlo a sus aguas. Al otro día acudió, a causa de su curiosidad, al lugar donde lo ejecutaron, donde observó la arena las huellas del cuerpo y manchas de sangre, pero en dichos momentos el cabo Farías de manera prepotente y sin respetar su rango, se le acerca y le dice que, que estaba haciendo en el lugar, que no debía estar allí, entretanto él manipulaba su arma y apuntaba al cielo; conducta ordinaria que acostumbraba a realizar, operando y ostentando su pistola en todo momento. Durante su carrera militar y desempeño en el Regimiento Tucapel, nunca le correspondió ejecutar, exhumar, inhumar o cometer acciones contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas. Se refiere a la víctima Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui. Finalmente, su carrera militar terminó de forma abrupta, pues en abril de 1974, sufrió un accidente en acto de servicio que le produjo la pérdida acústica progresiva, lo cual originó su temprano retiro de la institución en julio de 1976 por baja médica al ser calificado en su caso como inutilidad física segunda clase.

En declaración judicial de fecha 7 de abril de 2016, rolante de fs. 264 a 265; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 91 a 94. Y quiere entregar copias de lo que le sucedió en el Ejército en el año 1974. A continuación, el Tribunal tiene por acompañados los documentos. Señala que antes del golpe de estado, como un mes o dos meses antes, fue citado a una reunión de tropa con el comandante del regimiento, en la que les informó que quienes fueron citados, alrededor de 20 a 25 personas de planta, los tenían como con tendencia izquierdista. En su caso le dijeron que toda su familia era del partido socialista, y que su madre en Pitrufquén había arrendado una casa para el partido socialista, lo cual era verdad. Un comandante le preguntó cuáles eran sus tendencias políticas, a lo que respondió que era militar y que pertenecía al Ejército, al que debía respeto, con los principios que se le enseñó en la Escuela de Infantería de San Bernardo. Él le dijo que era lo que quería escuchar. En relación a Farías era un cabo nuevo, bajito, no era moreno, de piel más bien blanca, no era muy alto, delgado. Cree que era un oficial encubierto. Ellos lo

calificaban a él como “chupetero”, o colgado de los oficiales. En ese tiempo todos andaban con pistolas. El deponente andaba con un revolver 38. Todo el mundo andaba armado en ese tiempo, Farías apareció después del 11 de septiembre, como en octubre de 1973, de la escuela de infantería. Ante la pregunta realizada, cuando **Farías** le disparó al joven en Villarrica lo hizo con una pistola automática. No lo hizo con revolver, de eso está seguro. No sabe cuál era el nombre de la pistola. Andaba con sueño en esa escena. Ante la pregunta realizada, Emilio Cariaga era comando, usaba boina negra, no recuerda a otro más. Describe que la persona tenía como 25 a 30 años, de buena complexión física, le daba café en las noches, lo que era una contravención a las órdenes que tenían, se notaba bien instruido, conversaba con él, nunca le preguntó por qué estaba ahí. Estaba incomunicado en una pieza como la que está prestando declaración. Pensativo, presintiendo tal vez en lo que le podía pasar. Tenía un colchón, una cama en el suelo. No era rubio, ni era moreno tampoco. Puede haber medido como un metro setenta, no era tan alto. Siempre estaba con un papelito como enrollándolo en sus manos. Encerrado empezó a crecerle barba y bigotes, no era muy tupido de barba. Tenía el pelo largo porque le había crecido en la detención por la cual estaba. No supo de algún apodo de él ni tampoco su nombre. Su rostro era delgado, no de cara muy larga. Se acuerda claramente del hombre, se notaba compungido por el hecho de estar preso. No era gordo ni flaco, contextura deportiva. No era tan viejo el hombre. La persona estaba incomunicada. Era una persona instruida, no era un huasito de campo. Ellos en ese entonces estaban en un fundo, pero no sabe cuál. La persona debe estar en el fondo del lago Villarrica. El tribunal le exhibe distintas fotografías agregadas al proceso, a lo que el deponente manifiesta inclinarse por reconocer a la persona cuya fotografía rola a fs. 1024, sin una certeza absoluta. Figueroa Claus es otro que debería saber, porque estaba ahí. Dice que le suena el nombre del Milico Morales.

A.14 ORLANDO MORENO VÁSQUEZ (33 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). En declaración judicial de fecha 22 de abril de 2016, rolante de fs. 290; (Tomo I) detalla que le parece raro que una persona haya estado por tanto tiempo detenida en la guardia, no era lo habitual. Lo usual era que estuviera un día y luego fuera a la cárcel o lo que dictara la fiscalía. Ante la pregunta realizada, no recuerda haber visto a alguna persona detenida por tanto tiempo como se le señala. Para fines de 1973 y principios del año 1974 estaba en la segunda comandancia. Era dactilógrafo. Tenía la especialidad de seguridad militar, exclusivamente para seguridad del interior del cuartel. La pieza de la prevención siempre permanecía cerrada, por lo que quienes pudieran haber visto a esta persona puede haber sido el personal de guardia y no otras personas. El

tribunal le exhibe fotografías rolante de fs. 1024, 1029 y 1030, a lo que el deponente señala que han pasado tantos años que va perdiendo la memoria, por lo que no reconoce si acaso estas personas estuvieron en calidad de detenidos en el Regimiento Tucapel.

A.15 JUAN CARLOS FIGUEROA CLAUS (23 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). En declaración judicial de fecha 25 de abril de 2016, rolante de fs. 296 a 297; (Tomo I) el tribunal lee en lo pertinente las declaraciones rolante de fs. 364 y 839, a lo que el deponente señala que niega el hecho de haber estado en Villarrica en el hecho descrito en las declaraciones. Para esa fecha estaba en la Escuela de Suboficiales en San Bernardo, lo que se puede corroborar que es así. Dice que conoció a todas las personas que se le indican en las lecturas, ya que eran colegas. Pertenecían a otra compañía. El deponente pertenecía a la compañía Andina. Especula que el joven ejecutado pudiera ser el hijo de un suboficial de Carabineros del cual ha declarado anteriormente. El hijo de este suboficial estuvo por hartó tiempo en la pieza de servicio, donde se guardaban los útiles de aseo, en su compañía. El hijo del suboficial estaba mal producto de las torturas. Adopta que nunca estuvo en la compañía contraguerrillas ni tampoco Velásquez fue su comandante de compañía. El tribunal le exhibe las fotografías de fs. 1024, 1029 y 1030, a lo que el deponente señala que no reconoce las personas de las fotos que se le exhiben en el acto. Dice que fue comandante de guardia en más de una ocasión y la orden expresa que tenían, era de no tener en la sala de guardia a una persona detenida por más de tres días, como máximo. Por eso le parece absurdo que la persona por la que se le consulta, haya estado por dos meses en esa sala. La línea de mando era la siguiente en aquella época, Iturriaga Marchessi, Luis Jofré Soto, Nelson Ubilla Toledo y Jaime García Covarrubias.

A.16 RICARDO GUILLERMO GAYOSO MOLINA (21 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 371 a 373; (Tomo II) y a fs. 429 a 431; (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 14 de marzo de 2016, rolante de fs. 371 a 373; (Tomo II) basa que para el año 1973 cumplía con su servicio militar en el Regimiento Tucapel de Temuco, encontrándose encuadrado en la 2°compañía de cazadores, 1°sección, Escuadra, al mando del teniente Vásquez Chahuán y lo seguía en al mando el teniente Manuel Espinoza Ponce. De los clases a cargo de la sección, se encontraban Englert Borquez, Muñoz Venegas, Paiva, Rubilar, Beltrán, Astete, Labraña, Moreno Vásquez y otros que no recuerda en la actualidad. Para el día 11 de septiembre de 1973, una vez ocurrido el pronunciamiento militar, recuerda que su compañía comenzó a efectuar

patrullajes de toque de queda, control de carretera y puntos fijos en diferentes partes de la ciudad, recordando que se produjo varias detenciones a raíz del toque de queda, los cuales eran llevados a la guardia del regimiento y otros casos que se enteró por comentarios, era que los detenidos del teniente Espinoza, eran llevados a una cancha de tiro, ubicada en el sector Monteverde. Con respecto a lo anterior, debe manifestar que el teniente Espinoza, conformó un grupo de soldados como la "Patrulla Chacal". Uno de ellos era Sergio Vallejos, quien era mano derecha del oficial y asumió un liderazgo en este grupo, inclusive era el 2° Jefe. Del resto, recuerda a Castillo, Villablanca, Isler, Antitur, Concha Belmar, quien fue azotado por culpa del teniente Espinoza, debido a que habían detenido a un familiar del comandante del regimiento; Humberto Cárdenas, Concha Muñoz, Dittus, uno de apodado el Cólico; Schneider, Campos Ceballos, Canales, Virginio Cruces y un reservista de apellido Ortega, quien era pecoso y de contextura gruesa. El instructor Englert Borquez, también un soldado de apellido Valdebenito quien era su mano derecha, saliendo siempre ambos a patrullar y en más de una ocasión se enteró que practicaban detenciones por temas políticos. En el regimiento, observó personas detenidas, las cuales eran mantenidas en la guardia, siendo posteriormente llevadas a los interrogatorios en el gimnasio. En su caso, nunca presenció dichos actos, pero si en el cerro Ñielol, específicamente en una pampa donde se instalaban los circos. Este lugar era ocupado por personal del Regimiento de Valdivia y boinas negras de Santiago. En este lugar mantenían a los detenidos amarrados con alambre y le colocaban la corriente, al parecer con un magneto. De las identidades del personal militar no conoció a ninguno. Con respecto al personal militar encargado de los detenidos políticos en el regimiento, debe señalar que lo desconoce. Entre el 13 o 14 de septiembre de 1973; le correspondió viajar al complejo maderero Panguipulli, específicamente a Liquiñe, junto a un contingente de las diferentes compañías del regimiento, a cargo del coronel Urbina, del Regimiento Valdivia, con la finalidad de capturar al comandante Pepe, el cual fue detenido el 19 de septiembre junto a su esposa, un hijo y una persona invalida con muletas. No presenció la detención, pero le correspondió junto a **Virginio Cruces**, trasladarlo en helicóptero de la base aérea Maquehue al regimiento de Valdivia, para luego regresar ese mismo día a Temuco. Posteriormente, recuerda que viajó con la 2° compañía de cazadores, a efectuar allanamientos al fundo "budi", ubicado en Teodoro Schmidt y al Asentamiento Carrizal, ubicado en la comuna de Toltén. Recuerda que se movilizaron en helicópteros de la Fuerza Aérea y camiones de propiedad de Claudio Picasso, quien era reservista de la Fach. En este operativo, se detuvo a varias personas, por temas políticos y subversivos, los cuales fueron interrogados

y torturados en los lugares, pero ninguno fue ejecutado, quedando todos posteriormente en libertad. Al mando de este operativo iba el teniente Gran López, Manuel Vásquez Chahuán, Espinoza Ponce y los clases Astete, Englert, Muñoz, Venegas, Gajardo y Labraña. Con respecto al episodio conocido como el Asalto al Polvorín, hecho ocurrido el día 10 de noviembre de 1973, según se le informa en este acto, debe manifestar que no estuvo, enterándose por comentarios de lo sucedido, siendo la única información que maneja al respecto. Por otra parte, le correspondió efectuar campañas a la zona de Currarehue, al mando de los tenientes Vásquez Chahuán, Espinoza Ponce y los mismos clases señalados en los párrafos anteriores. Recuerda que se hizo base en un colegio del pueblo y le correspondió efectuar clase de servicio, es decir, tenía que controlar 30 soldados en sus salidas y su retorno. En su caso nunca hizo patrullajes, como tampoco vio personas detenidas en la escuela, pero si se enteró que las hubo, desconociendo mayores antecedentes. Ignora de igual forma si personal militar llevo a cabo ejecuciones en la zona. Explica que durante las ocasiones que le correspondió efectuar servicios de guardia en el Regimiento Tucapel a un detenido que se encontraba en la sala de prevención y que llevaba bastante tiempo. Este muchacho, era delgado, de 1.70 de estatura, el cual se encontraba en un estado como dopado. Al parecer esta persona de quien ignora su identidad, fue detenido por efectivos de la 1°compañía de cazadores. Adosa que el enfermero **Fonseca**, conversó en varias oportunidades con él. Hace presente que el contingente de la 1° y 2°compañía de cazadores, fueron los que tuvieron mayor participación en allanamientos y detenciones, de personas en operativos, los cuales debían trasladarse al regimiento, debiendo hacer presente que por orden de la comandancia, no debían ni preguntar los nombres de estas personas. Atestigua que nunca se vio involucrado en ejecuciones de personas como tampoco en inhumaciones o bien en operativos donde se procediera a lanzar cuerpos a los ríos ni lagos. Se refiere a la víctima Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui. El 1 de enero de 1974, finalizó su servicio militar en el Regimiento Tucapel, para luego continuar su vida como civil y trabajador en varios oficios hasta la fecha.

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2016, rolante de fs. 429 a 431; (Tomo II) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 371 a 373. Ante la pregunta realizada, dice que fue cabo segundo, cabo primero y lo ascendieron a sargento de reserva. Era destacado, pero no lo dominó Espinoza Ponce como lo hizo con Vallejos porque su familia era metida y le dio a entender que no lo iban a dejar solo. A la pregunta realizada, efectivamente Vallejos era la mano derecha de Espinoza. Si no estaba Espinoza, Vallejos daba las órdenes, Vallejos llegó a ser sargento de reserva. Espinoza era rayado, si hasta a las

pololas les colocaba granadas ese loco. No entiende y hasta todavía no lo hace de como los coroneles no se daban cuenta de lo que hacía si hasta ellos se daban cuenta. Rambo no es ninguna cosa al lado de Espinoza. En lo operativos estaba siempre soldados de la tercera y cuarta sección de la segunda compañía de cazadores, de la cual Espinoza llegó a ser comandante. En estas secciones estaban los que tenían tercero y cuarto medio, los más preparados. Ante la pregunta realizada, nunca anduvo participando en cosas con ellos. No participó en ninguna ejecución, torturas. Lo que hacía era cambio de guardia, vigilancia de las torres de agua de Padre Las Casas, lo de la purificación del agua en Temuco. Siempre este tipo de labores. Nunca vendió las cosas que le sustraían a los civiles. De quien escuchó que se “pelabas” las cosas de los civiles y las vendía era Vallejos. Nunca lo vio, pero era lo que se comentaba en las escuadras de los soldados. A la pregunta realizada, Scheneider era un soldado como colgado. A la pregunta realizada, el Cólico iba a todas las paradas, nunca decía que no. A veces pedían voluntarios y él presentaba. Vásquez Chahuán era el comandante de la compañía y era el superior de Espinoza, por lo tanto, debería saber todo. Hubo ocasiones en que no obedecía las órdenes de Espinoza Ponce porque tenía el apoyo de su familia y era más preparado. Para el año 1973 y a raíz de lo sucedido tuvo ataques epilépticos. A Espinoza le enseñó a manejar, porque tenía un camión, y por esa razón tenía algo de confianza para decirle que lo que se hacía estaba mal, que todos eran personas. El deponente tenía en ese entonces solo 19 años. Su familia de Temuco Vargas Gayoso también iba al regimiento a preguntar por su persona, es decir, nunca lo dejaron solo, por eso es por lo que Espinoza sabía que tenía respaldo y por eso cree que tampoco lo pudo dominar como ya dijo anteriormente. A la pregunta realizada, cuando se capturó al comandante Pepe lo llevaron directamente a Valdivia, no fueron a Temuco. Iban dos pilotos, más dos ayudantes, ellos dos con Virginio Cruces, más el comandante Pepe, una guagua, la señora y el cojo, uno con muleta. No recuerda que hayan ido a Maquehue, se fue directo a Valdivia. El comandante Pepe se notaba que en sus manos o las muñecas estaba delicado, se acuerda que cuando lo tomaba se quejaba. No se dio cuenta si era cáñamo, alambre o esposas, aunque estas parece que no se conocía. Dice que no estuvo en la captura del Pepe, no la vio, ellos estaban lejos, porque el círculo que se hizo fue grande, por lo que no vio si lo castigaron, pero se comentaba entre los soldados que él, desafió al cabo Astete, quien participó en su detención. Después se grabó una película en la que no quiso participar. Aquí participaron soldados que no estuvieron en la captura del Pepe. El loco **Espinoza** participó en la película. Cruces parece que vio la captura. Otro que recuerda que andaba era Antitur, este después se fue con la Dina, donde parece

que jubiló. A la pregunta realizada, Labraña era comandante de la cuarta escuadra de la segunda de cazadores. El tribunal le exhibe fotografías rolante de fs. 225, 230 y 231, a lo que el deponente señala que no es la persona que recuerda. Recuerda que la persona era bien deportiva, usaba al parecer una chaqueta verde oscura típica de los que eran adeptos al socialismo o comunismo, pantalones anchos abajo tipo pata de elefante, los que se usaban en esos años; esta persona se paseaba por la compañía suya que era la segunda de cazadores; este joven a veces se perdía por un día entero y después volvía, pero no sabe con quién salía; era de contextura delgada, de pelo liso, con partidura al lado, su rostro era alargado, la chaqueta era con dos bolsillos a la altura de pecho, ajustada en la zona de la cintura, no era viejo, era joven de unos 30 a 35 años. El tribunal le exhibe set de fotografías que se encuentran en el sistema computaciones de DD. HH, no reconociendo entre ellas a la víctima el deponente.

A.17 JOSÉ ROSALINO SEGUNDO CIFUENTES QUINTANA (24 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 376 a 379; (Tomo II) y fs. 432 a 433; (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 15 de marzo de 2016, rolante de fs. 376 a 379; (Tomo II) suma que para el 11 de septiembre de 1973, se encontraba cumpliendo servicios en el Regimiento Tucapel de Temuco, como soldado 1°, encontrándose encuadrado en la compañía de mortero, específicamente como guarda almacén de vestuario y equipo del batallón, desempeñándose en estas labores con el encargado de esta sección el sargento Gala Paiva Vásquez, actualmente fallecido. No recuerda quien estaba a cargo de la compañía, pero de los clases recuerda a Barrenechea, Héctor Muñoz Garrido, Schaff, Raúl Arias y otros. Para el día 11 de septiembre de 1973, a eso de las 02:30 horas, se enteró al interior del Regimiento que se iba a producir un pronunciamiento militar, por lo que el mando dispuso que patrullas militares comiencen a efectuar patrullajes en la ciudad. En su caso, participó mayoritariamente como jefe en los patrullajes nocturnos, recordando que tuvo desplazamientos en el centro de la ciudad, en los puentes Cautín y Viejo, paso nivel de Padre Las Casas, no practicando nunca detenciones de personas como tampoco haya sido testigo que algún integrante de la patrulla diera muerte a personas en la vía pública. En el regimiento, observó personas detenidas, las cuales eran mantenidas principalmente en la guardia, observando siempre que los sargentos Moreno y Schonner, eran los encargados de trasladar a los detenidos a otras dependencias del regimiento para ser interrogados, pero nunca supo o se dio cuenta que dependencias estaban destinadas para estos fines. Del mismo modo, manifiesta que al regimiento llegaron los detectives Quiroz, uno de apellido

mapuche, al parecer Lienlaf y el conductor de vehículos de apellido Luco, quienes colaboraron en temas relativos a los detenidos, vale decir, detenciones, allanamientos e interrogatorios en conjunto con Moreno y Schonner. Hace presente que el capitán Ubilla y el teniente Espinoza, eran los oficiales a cargo de los detenidos de carácter políticos. Con respecto al episodio conocido como el asalto al polvorín, hecho ocurrido el día 10 de noviembre de 1973, según se le informa, debe manifestar que para esa oportunidad se encontraba en campaña en el Sector de Coipue, enterándose por comentarios de un conductor, de quien no recuerda identidad, quien llegó al día siguiente del hecho a dejar provisiones, comentándoles lo sucedido. Esta campaña estaba al mando del teniente Valladares y de los clases se encontraban José Oporto Seguel, quien venía de la Escuela de Infantería de San Bernardo, el sargento Gajardo y otros que no recuerda en el momento. Llevaban cerca de ocho días en campaña, principalmente en práctica de tiro en un terreno facilitado por un latifundista de quien no recuerda identidad. Debe hacer presente que antes que ocurriera el caso el asalto al polvorín, al regimiento habían llegado instructores nuevos provenientes de la Escuela de Infantería de San Bernardo, los cuales fueron distribuidos a las diferentes compañías, llegando a la mortero el cabo José Oporto Seguel. Del resto no recuerda en la actualidad. Quiere manifestar un acontecimiento que le tocó vivir antes de efectuar esta campaña y que pasa a relatar a continuación, ya que encontrándose de patrullaje en la ciudad con el conductor Wuido Martínez, fue llamado a eso de las 1:30 horas, del regimiento para que hiciera entrega de unos colchones a los soldados, por lo que se dirigió a la unidad militar e hizo entrega de dicha especie, para luego dirigirse a calle Prat con O'Higgins, con la finalidad de que el conductor lo pasara a buscar a ese punto. El caso es que Martínez lo pasa a recoger en el jeep $\frac{3}{4}$ y se percata inmediatamente que en el pick up venían cuatro cuerpos inertes con impactos de bala, por lo que el conductor le señala que había que pasar a dejarlos a la morgue. Tuvo que irse parado en el parachoque del vehículo y viendo en todo momento los cuerpos de estas personas que no se encontraban cubiertas. Al observar, se percata que uno de ellos lo conocía, pero no sabía su nombre, pero era casado con una enfermera que trabajaba en el hospital, ambos vivían en Las Quilas y su padre era mecánico quien tenía un taller en calle Phillips. Acto seguido, llegaron al hospital y tuvo que hacer el trámite para la entrega de los cuerpos, conversando en primera instancia con los guardias para que abrieran la morgue y luego de esto los entregara. Con respecto a las circunstancias como perdieron la vida estas personas, debe señalar que conforme a lo manifestado por Martínez, fueron ejecutados en la Isla Cautín y que había recibido la orden de recoger los cuatro cuerpos y trasladarlos a la morgue, pero no

dio mayores antecedentes de los partícipes de la ejecución como tampoco de quien le dio la orden de trasladar los cuerpos. Por otra parte, le correspondió efectuar campaña en la zona de Currarehue, al mando de los tenientes Vásquez Chahuán, Espinoza Ponce y Meza, además de los Aedo, Gajardo, Moraga y Labraña. Recuerda que se instalaron en un galpón antes de llegar al pueblo a la mano izquierda. En su caso le correspondió efectuar patrullajes a la zona de Reigolil, Puentes Basas, Maite, Quiñenehuin, pero siempre pernoctaban en la base. Los patrullajes se hacían en vehículo y a pie, no practicando nunca detenciones de personas en esta zona, como tampoco observó personas detenidas en el lugar donde pernoctaban. Debe hacer presente que si se enteró por rumores que se habían detenido y ejecutado personas durante el periodo que permaneció en la zona, pero nunca supo las circunstancias y las identidades de los efectivos militares partícipes en los hechos, debiendo agregar que los rumores siempre estuvieron ligados al teniente **Espinoza** y al grupo de soldados de su confianza, entre ellos estaba un soldado, cuya hermana se casó con este oficial. De las identidades de los soldados no los recuerda, ya que pertenecían a otra compañía. En Currarehue estuvo cerca de 15 días, para luego regresar al regimiento. Con respecto a la consulta realizada, debe manifestar que no recuerda durante las ocasiones que le correspondió efectuar servicios de guardia en el Regimiento Tucapel, a un detenido que se encontraba en la sala de prevención y que llevaba bastante tiempo. Con referente a la pregunta, debe señalar que también desarrolló labores como enfermero, tanto en la unidad militar como en las campañas, debiendo hacer presente que existía la orden de inyectar a los detenidos para que se mantuvieran dopados o bien para eliminarlos. En su caso nunca le correspondió cumplir una orden de esta naturaleza, ya que eran los más antiguos encargados de estos procedimientos, siendo ellos Fonseca, Castro y Soto Fernández. Con respecto a la consulta realizada, debe indicar que nunca se vio involucrado en ejecuciones de personas, como tampoco en inhumaciones o bien en operativos donde se procediera a lanzar cuerpos a los ríos ni lagos. Se refiere a la víctima Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui. Posteriormente, su carrera militar la desarrolló completamente en el Regimiento Tucapel, primero hasta el año 1980, fecha en que pasa destinado a la Fiscalía Militar de Temuco, acogiéndose a retiro voluntario el año 2002, con el grado de suboficial mayor. Debe hacer presente que cuando llegó a desempeñarse como actuario el año 1980, a la Fiscalía Militar, se encontraba como fiscal don Alfonso Podlech Michaud, quien para el año 1973, ocupaba el mismo cargo y era el encargado junto a los oficiales de llevar a cabo los consejos de guerra de los detenidos.

En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 2016, rolante de fs. 432 a 433; (Tomo II) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 376 a 379; (Tomo II). Nunca vio la forma como eran interrogadas las personas, solo los veía pasar cuando estaba de guardia o cuando hacia la pega que tenía que hacer nada más. Recuerda que hubo gente que llegó de afuera, inclusive jubilada que querían cooperar, por lo que tenía poco tiempo. Se acuerda que pasaron tres días en los que ni siquiera pudo afeitarse. Tenía que dormir en el mismo almacén. Los detectives llegaban todos los días con gente. Ante la pregunta realizada, la persona que reconoció dentro de los cuatro que vio en la carrocería de la camioneta estaba casado con una señora que trabajaba en el hospital, la cual cree que actualmente vive en la calle Los Tenos de la población Las Quilas, frente a los Traperos de Emaus, en la bajada. Después cree que se casó con un señor de nombre Pedro Neira, que actualmente también está fallecido. La persona que reconoció era morena de pelo liso. A la pregunta realizada, todos vestían pantalones largos. Esto lo vio en la noche. Más o menos formales todos. Solo vio que las personas estaban muertas y no podría decir de qué edades eran los tres restantes, ya que solo se preocupó de la persona que conocía. Ante la pregunta realizada, quien los recibió en la guardia del hospital era alto, de pelo cano, quien le recibió los cuerpos en la morgue igualmente. Ante la pregunta realizada, no recuerda la fecha exacta de este hecho que narra. Por rumores supo del soldado que se habría casado con la hermana de Espinoza Ponce. No supo su nombre, era de otra compañía. Era algo rubio, estatura normal como 1,60 a 1,65 metros. Era medio “puntete”, ya que estaba pololeando con la hermana de un oficial. A la pregunta realizada, efectivamente conocía del procedimiento de inyectar a las personas, pero nunca participó ni vio esto. Lo hacían los más antiguos. No sabría decir que era lo que les inyectaba. Delibera que a la gente en la sala de prevención, solo las veía pasar. No preguntaba cosas que no correspondían, tampoco se podía hablar más de la cuenta, porque pensaban que eran del otro lado. Hubo colegas a los que separaron de sus funciones porque no estaban de acuerdo con el sistema. No recuerda a Ambrosio Badilla Vassey ni supo de lo que le aconteció. El tribunal le exhibe set de fotografías de las víctimas en la región con las que se cuenta con el sistema computacional, no reconociendo a ninguna de ellas el deponente.

A.18 JOSÉ JOEL MATUS SALAZAR (20 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 442; (Tomo II) y a fs. 455 a 461; (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 23 de noviembre de 2016 a fs. 442; (Tomo II) colige que había un detenido en el Regimiento Tucapel, que

permaneció más de un mes detenido en la sala de prevención ubicada a un costado del recinto de guardia. No recuerda su nombre, pero siempre lo veía ahí, inclusive era muy servicial y lo mandaban a dejar recados a la enfermería, al casino o a la panadería, como también atendía el teléfono de la guardia y barría el patio. Debe agregar, que el soldado de su compañía Eduardo Zúñiga, siempre lo veía conversando con él cuando le correspondía realizar guardia o en otras circunstancias, enterándose por comentarios que se lo habían llevado a Lautaro, siendo eso lo último que supo de este detenido, ya que nunca más lo volvió a ver. Del mismo modo, debe manifestar que el cabo **Castro** quien se desempeñaba como enfermero, tuvo bastante contacto con este detenido, ya que en varias oportunidades lo vio conversando con el detenido en una banca metálica ubicada en las afueras de la enfermería.

En declaración judicial de fecha 21 de febrero de 2017, rolante de fs. 455 a 461; (Tomo II) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 442. Y ratifica la declaración prestada en la causa del polvorín de fecha 30 de septiembre de 2016. Precisa que el nombre de su sobrino es Matías Matus. Es operador de máquinas en puerto, debe tener como 30 años y tiene su domicilio en concepción. Ante la pregunta realizada, al otro día o días posteriores se enteró de que no estaban los detenidos abajo. De esto se preocupó cuando andaba buscando las vainillas. Andaba Huerta Infante. No estaba el soldado de guardia, no había nadie. Lo que supo es que había personas que habían intentado huir, el deponente lo asocia a las personas que estaban en la caseta. Recuerda que al día siguiente estaba el guardia que era de la primera de cazadores de la caseta. Vio que iba hacia abajo al teniente Arellano, que parece que era de Valdivia, en dirección a la Isla. Zenen Cisterna Burgos trabajó con Arellano. Cisterna era cuñado del deponente y se encuentra vivo. Sufrió mucho, debió haber visto muchas cosas en el regimiento, vive en el pasaje Miraflores N°22 de Villarrica. Colige que cuando llegaron los clases de Santiago, a saber Oporto y Farías Lavín, el mismo deponente les entregó las llaves de los departamentos de solteros. Recuerda que uno de ellos estuvo en septiembre de 1973 en el regimiento. Se refiere a otros hechos. Respecto de la víctima NN ejecutada en Villarrica. Esta persona estaba como junior. Zúñiga conversaba hartos con él, era de 1.70 metros, de unos 25 años hacia abajo; era una persona que le gustaba leer; tomaba el diario, los leía todos; pelo castaño, largo, no usaba anillos, le decían el norteño, se notaba educado, nadie llegó a preguntar por él; con los nuevos detenidos que llegaba de cualquier parte, se hacía un circular que informaba a todo el país para informar; supo que lo habían encontrado en una sede de un partido político y por eso lo detuvieron; nunca lo vio torturado en mal estado; estuvo meses; a Salgado le preguntó, este lo

hacía lustrar las botas; la forma de su rostro era alargada; estaba bien vestido cuando llegó; no usaba bigotes; Alvarado también lo ocupó en la oficina para hacer aseo. A la pregunta realizada, los libros están quemados. Se refiere a otros hechos.-

A.19 DANIEL GONZÁLEZ ORTIZ (20 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 493 a 495; (Tomo II) y a fs. 496 a 498; (Tomo II)

En declaración extrajudicial de fecha 12 de abril de 2015, rolante de fs. 493 a 495; (Tomo II) expone que ingresó a efectuar el servicio militar obligatorio en el mes de abril del año 1973, al Regimiento de Infantería N°8 Tucapel de Temuco, quedando encuadrado en la 4ta. Sección de la 2da Compañía de cazadores, la que estaba a cargo del teniente Manuel Espinoza Ponce, como comandante de la compañía recuerda al teniente Vásquez Chahuán. De sus compañeros de sección, recuerda a los soldados Manuel Canales, Francisco Hueche, José Curiqueo y los de apellido Isler y Vallejos. Según recuerda, el teniente **Espinoza** frecuentemente realizaba patrullajes especiales, como lo mencionaban los conscriptos de su confianza, junto al teniente **Valdebenito**, los clase Labraña, Astete y Bobadilla, los soldados Manuel Canales y los soldados de apellido Curiqueo, Isler, Solar, Villablanca y Vallejos, siendo éste último el preferido del teniente, por su actitud proactiva. Quienes en todo momento mantenían una actitud de hermetismo respecto a las labores que efectuaban. Durante su estadía en el regimiento vio personas detenidas al interior de éste, haciéndose cargo de estos el “chacal Espinoza” junto a su patrulla denominada Patrulla Chacal. Mantenían a los detenidos al interior de una dependencia que anteriormente era utilizada como casino, ubicada al lado norte del rancho correspondiéndole custodiar ese sector, no teniendo contacto directo con ellos. Descarga que entre octubre y noviembre del año 1973, toda la compañía concurrió a la ciudad de Currarehue, a cargo del teniente Manuel Vásquez Chahuán y el teniente Espinoza. Al día siguiente de su llegada le correspondió trasladarse al sector de Puesco, donde permaneció alrededor de 26 días, para luego ser llevados hasta un inmueble de vialidad ubicado al lado del lago Quillehue a efectuar el resguardo del paso fronterizo y patrullajes, junto a un soldado de nombre Carlos Huichaleo, además de conscriptos oriundos de Santiago, no recordando a que unidad pertenecían. Siempre tuvo la duda que dentro de estos conscriptos había personal de planta infiltrado, debido a su comportamiento, edad y forma de vestir, presume que con el objeto de identificar que conscriptos eran opositores al gobierno. Durante su estadía en Currarehue, por comentarios supo que el teniente Espinoza, realizaba misiones específicas en la zona junto al grupo

de conscriptos Vallejos, Curiqueo, Villablanca, Isler y Canales. Delibera que mientras cumplía funciones de resguardo en el sector Lago Quillelhue recuerda haber visto al teniente Espinoza junto a su grupo, cazando ciervos en el valle del Volcán Lanín que distaba a unos metros del lugar donde acampaban. Asegura que nunca vio a Espinoza llegar con detenidos a esa zona, ni tampoco se enteró que haya efectuado alguna ejecución en dicho lugar pero tampoco descarta que dicha situación haya sucedido por el carácter y el poco control que tenía de sus acciones, ya que lo catalogaban como “loco”. También señala que había un Alférez de apellido Canesa, hijo de un general del mismo apellido que durante el periodo que estuvieron allá quedó en el campamento base de Currarehue. Se refiere a otros hechos. Hace presente, que en una oportunidad, el teniente Espinoza lo interrogó respecto de la filiación política de sus familiares, cosa que negó ya que efectivamente estos no tenían ningún tipo de participación política, sin embargo, al poco tiempo, vio detenido en el regimiento a Octavio Zúñiga Carmine, militante del partido socialista, a quien conocía porque había trabajado para él, en malas condiciones físicas, inclusive tenía el pelo rapado, y solamente se limitó a comentarle que lo habían golpeado. Posteriormente este caballero quedó en libertad por las gestiones que realizó el general Urbina, pues era familiar de la esposa de Zúñiga. Se refiere al asalto al polvorín. Sobre las fotografías que le exhiben, no recuerda haber visto a estas personas detenidas al interior del Regimiento Tucapel.

En declaración judicial de fecha 24 de junio de 2015, rolante de fs. 496 a 498; (Tomo II) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 493 a 495. Y musita que, no solamente estuvo en Currarehue, sino que en más de una ocasión su rol fue de patrullaje de punto fijo en el sector. En una ocasión en Añihuarraque, en esa ocasión andaban con un grupo de conscriptos de Santiago, pero si recuerda que andaba con Carlos Huichaleo, actualmente fallecido. Esto fue entre abril y mayo de 1974. Otra actividad estuvo en Maitén, había un colegio en ese lugar. Andaba un instructor de apellido Hidalgo. Igual estuvieron de punto fijo en el colegio. A la pregunta realizada, el deponente soflama que supo de las ejecuciones de estas personas, pero nunca supo quienes fueron por el hermetismo que había en ese tiempo. Siempre alguien comentaba. No conoció nombres específicos, pero el comentario corrió. En ese entonces estaban totalmente controlados, a tal extremo que hasta el año 1974 no los dejaban ni hablar con los familiares. Los oficiales les decían que se encontraban en guerra, que había que resguardar la unidad y la nación. Con respecto del asalto al polvorín en la orden del día que se le lee a las 14:00 horas se enteraron, es decir, les dieron a conocer el caso, les dijeron que era sin comentarios. La orden la leyó

el suboficial mayor René Beltrán que le parece que se encuentra fallecido. Hay un caso de un conscripto que hizo el servicio militar junto con el deponente del que no sabe si existen antecedentes investigativos. El caso es el siguiente. Él era de apellido Isla, estudiante de tercero o cuarto de arquitectura de la Universidad de Chile, que se presentó como todo ciudadano a su servicio militar. Era alto, de tez blanca, como de un metro ochenta de estatura. Como el comandante de la compañía Vásquez Chahuán supo que era estudiante de arquitectura le encargó que hiciera unos planos de emplazamiento de todas las unidades del regimiento. Isla así lo hizo, y al tiempo después dejó de verlo y el comentario que se hizo fue que era un supuesto extremista, que estaba infiltrado en la unidad. A veces le ayudaba al suboficial mayor Beltrán a hacer las órdenes del día. Nunca más lo vio ni supo que pasó con él. Supo de su madre que hizo gestiones para ubicarlo. Vivían en el sector de Prieto Norte en aquella época, pero no sabe la dirección exacta. Isla le contó de la petición que le había hecho Vásquez Chahuán, por eso está enterado de ello. Explana que vio cuando el tipo estaba dibujando los planos con la regla. Fue en el sector sur de la compañía andina, que en ese tiempo estaba comandada por el teniente Valdebenito. Ahí estaban las oficinas de la segunda compañía y de la compañía andina. Agrega que, posterior a septiembre de 1973, en el sector del polvorín, del cual hace un diagrama en el acto, y que lo vio cuando se hizo. Se construyó una fosa de unos dos metros de hondo por unos 10 de ancho. Esta fue hecha por las máquinas de vialidad de la época. No le consta quien manejó las máquinas, si gente de vialidad o personal militar, pero fueron estas máquinas. Esta fosa posteriormente fue tapada y no sabe que pudo contener, eso no le consta. La ubicación exacta la recuerda, porque eran campos de instrucción de todos los días. También otra persona le comentó hace poco lo siguiente respecto de donde está emplazado el casino de oficiales, más precisamente en el patio del frontis del casino de oficiales, y es que se habría hecho una fosa donde se habrían enterrado cuerpos humanos, la fecha exacta no la tiene clara, pero fue posterior al 11 de septiembre de 1973.

A.20 OLGA MARÍA VÁSQUEZ MUÑOZ (43 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). En declaración judicial de fecha 13 de febrero de 2020, rolante de fs. 694 a 695; (Tomo II) cuenta que su hermano era profesor, titulado de la Universidad Católica de Santiago y hacía clases en una Escuela en Polonia, en el Liceo de Niñas y en el Comercial de San Fernando. Fue militante del Partido Socialista, miembro de la Cut y regidor de la misma ciudad. A la pregunta realizada, señala que cuando su hermano Luis Vásquez Muñoz, desapareció el día 20 de noviembre de 1973, tenía 34 años de edad, era delgado, media aproximadamente 1.65 metros, tez blanca, pelo castaño, un poco ondulado,

ojos cafés claros. Debido a su profesión, vestía formal, no así los fines de semana, pero siempre muy ordenados. Era un joven muy deportista, le gustaba mucho el fútbol, estudioso, inquieto por conocer, de carácter afable, una persona cariñosa, especialmente con los niños, le gustaba enseñar. Socializaba mucho con las personas, es por eso por lo que llegó a ser todo lo que fue, inclusive Regidor. Al exhibirle la fotografía del retrato hablado de fojas 28, no reconoce a su hermano Luis Justino, no se parece en nada. Sin embargo, al mostrarle la fotografía de fojas 13 (fs. 225 de autos), lo reconoce como su hermano sin lugar a duda, con certeza absoluta.

A.21 EDUARDO GASTÓN ZÚÑIGA DÍAZ (20 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 443; (Tomo II), a fs. 462 a 465; (Tomo II) y a fs. 469; (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 23 de noviembre de 2016, rolante de fs. 443; (Tomo II) expone es completamente falso que él haya conversado con el joven detenido, desconociendo absolutamente esta situación, por cuanto le correspondía hacer guardia una vez al mes, pero nunca vio a un detenido en la guardia por bastante tiempo, como también ignora identidad de algún detenido que haya permanecido en las condiciones antes señaladas.

En declaración judicial de fecha 17 de marzo de 2017, rolante de fs. 462 a 465; (Tomo II) ratifica su declaración extrajudicial rolante de fs. 443; (Tomo II) de la presente causa. se refiere a otros hechos. El tribunal lee en lo pertinente la declaración rolante de fs. 459. Refiere que hubo una persona a la que le decían el telefonista. Nadie la visitó; todos rotaban en la guardia; el oficial de ronda a veces coincidía con el de la compañía y a veces no; el oficial de ronda piensa que podía dar las novedades al comandante; todos le decían el telefonista. No supo que le pasó; era un detenido; debe haber tenido unos 20 a 25 años; el hombre dormía en la misma guardia en un calabozo; puede ser que en el libro de guardia esté su nombre. El tribunal le exhibe la fotografía rolante de fs. 225 y 230, a lo que el deponente señala no ser la persona que se investiga en la presente causa. Lo vio cuando llegaba en las horas de descanso; estuvo dos años y cinco meses en el regimiento. El ayudante del comandante era Jaime García Covarrubias. El tribunal le lee la declaración rolante de fs. 442 de la causa 39.226, a lo que el deponente señala que es absolutamente falso lo que se lee. A él le tocaba guardia cada dos meses. Se refiere a otros hechos.-

En declaración judicial de fecha 21 de abril de 2017, rolante de fs. 469; (Tomo II) el tribunal le exhibe fotografías rolante de fs. 41 a 44 de la causa rol 114.035, ante lo cual el deponente señala que no reconoce como el “telefonista” a la persona que se le exhibe en los documentos. El tribunal procede

a exhibirle set fotográfico en soporte digital de las víctimas de DD. HH, ante lo cual el deponente señala que ninguno le parece conocido, ni se asemeja a lo que recuerda como “el telefonista”, además, son fotos en blanco y negro. El tribunal le exhibe fotografías rolante de fs. 18 y 19 de la causa rol N°5-2015 de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, ante lo cual no reconoce a la persona que se le exhibe. Barbulla que no anduvo con Salgado Goyeneche en Pucón, porque era de otra sección. Siempre cada escuadra tenía su comandante y salían con su propia sección. No supo de unos jóvenes que hayan sido apresados por la compañía andina de Pucón. Estuvo con la compañía andina en Santiago.

B. DOCUMENTOS (9)

B.1 A fs. 1; (Tomo I) contiene orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, con el objeto de que se proceda a ubicar e interrogar pormenorizadamente a todos los testigos respecto de los hechos materia de este proceso, sin perjuicio de recabar cualquier otro antecedente para la investigación.

B.2 A fs. 225; (Tomo I) contiene fotografía remitida por el señor Ministro Vásquez de la Corte de Apelaciones de Rancagua.-

B.3 A fs. 490; (Tomo II) contiene Oficio N°24887, de fecha 31 de octubre de 2017 de la Superintendencia de Pensiones, referente a Sergio Velásquez Águila.-

B.4 A fs. 501 a 503; (Tomo II) contiene informe pericial de retrato descriptivo del Laboratorio de Criminalística Regional Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile, en lo pertinente señala que: *“Recopilados los antecedentes, se concluyó en el rostro representado en la lámina adjunta, correspondiendo a la persona que habría estado detenida y luego habría sido asesinada en las orillas del lago Villarrica, según lo descrito por el testigo”*.

B.5 Contiene ordenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada Investigadora de Delitos contra Los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

a) **fs. 9 a 109; (Tomo I)**, contiene declaraciones de ex soldados conscriptos y testigos.-

b) **fs. 128 a 153; (Tomo I)**, contiene declaraciones de ex funcionarios militares.-

c) **fs. 312 a 397; (Tomo II)**, contiene declaraciones de ex funcionarios militares, entre ellas de Sergio Velásquez Águila.

d) **fs. 401 a 425; (Tomo II)**, contiene declaraciones de ex funcionarios militares.

e) **fs. 439 a 443; (Tomo II)**, contiene declaraciones de ex funcionarios militares.

f) **fs. 517 a 520; (Tomo II)**, contiene declaración testigo.-

g) **fs. 683 a 692 (Tomo II)**, contiene declaraciones de testigos.-

B.6 A fs. 714 a 745; (Tomo III) contiene formula de requerimiento de elevación a juicio, tramitado en la República Argentina, por Martín López Perrando, Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo criminal de instrucción N°12, en causa N°47.941 que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de instrucción N°43, secretaría N°109, respecto de **Leandro Federico Schvap**.

B.7 A fs. 747 a 847 (Tomo III) contiene copias simples de causa N°4379 del Tribunal Oral en lo Criminal N°8 de la Capital Federal tramitado en la República Argentina, en lo pertinente señala que:” *Condenar al imputado Federico Leando Schuap, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y el pago de las costas, por considerarlo autor del delito de homicidio simple.*”

B.8. A fs. 849 a 868 (Tomo III) contiene copias simples de la sentencia de Casación de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, tramitado en la República Argentina, que en lo pertinente señala: “*Se rechaza el recurso de casación interpuesto por la defensa y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida*”.

B.9 De fs. 135 a 545 (Tomo II), contiene en lo pertinente copia simple de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 26 de septiembre de 2006, causa caratulada “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”

3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente acreditado que:

A.- Que inmediatamente ocurrido el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas y de orden tomaron el control de la ciudad de Temuco, erigiéndose como Intendente el Coronel Comandante del Regimiento “La Concepción”, de Lautaro, Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez (**fallecido, según consta a fs. 593 Tomo II**) y como Gobernador de Temuco, el Coronel Pablo Iturriaga Marchesse (**fallecido, según consta a fs. 594, Tomo II**), Comandante del Regimiento de Infantería n.º 8 “Tucapel” de esta ciudad, quién además quedó como Jefe de la Guarnición de Temuco.

B.- Que la mencionada unidad militar se conformaba de distintas compañías, las que estaban compuestas por oficiales, clases y soldados conscriptos que formaban parte del Regimiento de Infantería N° 8 “Tucapel” de Temuco. Estas compañías, a su vez, formaban patrullas de efectivos militares que eran apostadas en distintos lugares de la ciudad para los efectos de control de toque de queda y custodia de lugares calificados como estratégicos por el mando militar.

C.- Que asimismo, estas compañías eran enviadas, en ocasiones, a distintos lugares de la región con el fin de realizar patrullajes y campañas militares. Es así que la compañía contraguerrillas, al mando del Teniente Velásquez, quién era comando y que llegó en fecha posterior al 11 de septiembre de 1973 a Temuco, y que, además, la conformaban los clases Heraldo Espinoza Elgueta, fs. 91-94 (Tomo I), fs. 264 a fs. 265 (Tomo I), Manuel Segundo Mora Torres (fs. 3 a fs. 8 (Tomo I), de fs. 293 a fs. 294 (Tomo I), de fs. 506 (Tomo II), Rafael Lizama Saldías y el cabo Benjamín Rodemil Farías Lavín (fs. 120 a fs. 122 (Tomo I), recién llegado de la Escuela de Formación, entre otros, y una dotación de entre 30 a 40 soldados conscriptos, seleccionados de diferentes compañías, fue enviada a instrucción militar a la ciudad de Villarrica en los primeros meses del año 1974.

D.- Que contemporáneamente, hubo en el Regimiento de Infantería N° 8 “Tucapel” de Temuco, un detenido que permaneció por alrededor de dos meses en custodia del servicio de guardia del regimiento, en una dependencia anexa denominada “prevención”. Las características físicas de esta persona eran: contextura delgada, tez morena, 1.70 m., de estatura aproximadamente; además, de las conversaciones que testigos sostuvieron con ella, se observaba bastante conocimiento de la ideología de izquierda, muy instruido, y que, al parecer, ocupaba un alto cargo dentro de la militancia que ostentaba; su rostro era delgado, no de cara muy larga, no era ni gordo ni flaco, de una contextura deportiva; su edad estimada era entre los 25 y 35 años, según testimonios de Manuel Segundo Mora Torres, de fs. 3 a fs. 8 (Tomo I), de fs. 293 a fs. 294 (Tomo I), de fs. 506 (Tomo II), Heraldo Valentín Espinoza Elgueta, de fs. 92 a fs. 94 (Tomo I) y de fs. 264 a fs. 265 (Tomo I), de Eduardo Gastón Zúñiga Díaz, de fs. 462 a fs. 465 (Tomo II), de fs. 469 (Tomo II), de Ricardo Guillermo Gayoso Molina, de fs. 429 a fs. 431 (Tomo II).

E.- Que siguiendo con lo anterior, lo pudieron ver varios soldados, entre los que se encuentran Manuel Segundo Mora Torres, según declaraciones de fs. 3 a fs. 8 (Tomo I), de fs. 293 a fs. 294 (Tomo I), de fs. 506 (Tomo II) y Heraldo Valentín Espinoza Elgueta, según declaración de fs. 92 a fs. 94 (Tomo I) y

de fs. 264 a fs. 265 (Tomo I), señalan que nunca recibió visitas, no teniendo claro si era de Temuco o de otra ciudad; se le apodó en el regimiento como el “telefonista” o el “nortino”. Igualmente fue visto por Ricardo Guillermo Gayoso Molina, según declaración de fs. 429 a fs. 431 (Tomo II) y por Eduardo Gastón Zúñiga Díaz, según declaraciones de fs. 462 a fs. 465 (Tomo II), de fs. 469 (Tomo II).

F.- Que mientras se encontraba la compañía contraguerrillas de instrucción en Villarrica, a orillas del Lago del mismo nombre, un día de los meses de enero o febrero del año 1974, llegó un camión militar con un detenido con su vista vendada, siendo reconocido por Manuel Segundo Mora Torres, según declaraciones de fs. 3 a fs. 8 (Tomo I), de fs. 293 a fs. 294 (Tomo I), de fs. 506 (Tomo II), y por Heraldo Valentín Espinoza Elgueta, declaración de fs. 264 a fs. 265 (Tomo I), como aquella persona que había estado en la sala denominada “prevención” en el Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel de Temuco.

G.- Que el detenido fue entregado al teniente Velásquez por parte del chofer del camión, dándole a entender que aquél debía ser eliminado. Acto seguido, el teniente Velásquez procede a realizar un sorteo con papeles doblados, uno con la palabra SI y los demás con la palabra NO, tomando los clases y el oficial un papel, y quién tomara el papel con la palabra SI debía ser quien ejecutara al detenido, resultando elegido el clase Lizama Saldía para la ejecución, ante lo cual se negó, ofreciéndose para tal encargo el cabo recién llegado de la Escuela de Formación Benjamín Rodemil Farías Lavín quién señaló que sería el N° 24 en su lista de ejecuciones, según declaraciones de Manuel Segundo Mora Torres de fs. 3 a fs. 8 (Tomo I), de fs. 293 a fs. 294 (Tomo I), de fs. 506 (Tomo II) y Heraldo Valentín Espinoza Elgueta, de fs. 92 a fs. 94 (Tomo I) y de fs. 264 a fs. 265 (Tomo I).

H.- Que luego, comenzando el atardecer, el teniente Velásquez ordenó a los soldados conscriptos retirarse de las orillas del Lago Villarrica unos cuantos metros hacia atrás para que no observaran la ejecución, pero igualmente todos se percataron de que ésta la iba a concretar el cabo recién llegado Benjamín Rodemil Farías Lavín, según declaraciones de Manuel Segundo Mora Torres de fs. 3 a fs. 8 (Tomo I), de fs. 293 a fs. 294 (Tomo I), de fs. 506 (Tomo II) y Heraldo Valentín Espinoza Elgueta, de fs. 92 a fs. 94 (Tomo I) y de fs. 264 a fs. 265 (Tomo I).

I.- Que el detenido fue puesto sentado y con su vista vendada a las orillas del Lago Villarrica, mirando hacia el lago, mientras que el Teniente

Velásquez, Espinoza, Lizama y Mora se posicionaron detrás del detenido a un metro de distancia. Posteriormente, el cabo recién llegado Benjamín Rodemil Farías Lavín sacó su pistola Stagger 9 mm y puso el cañón en la parte que une la cervical con el cuello, procediendo a disparar el arma, provocándole la muerte inmediatamente. Luego, se le amarró una cuerda al cuerpo con la finalidad de que hiciera peso y quedara en la profundidad del lago, por lo que el teniente Velásquez y el cabo Benjamín Rodemil Farías Lavín trasladaron el cuerpo en un bote hasta una parte profunda del lago, donde lo lanzaron para que se hundiera. A su regreso, el cabo Benjamín Rodemil Farías Lavín comentó que el teniente Velásquez, con un corvo, abrió el vientre de la víctima, y, asimismo, le había cortado el pene y se lo colocó en la boca, y de esta forma lo arrojaron a las profundidades del lago Villarrica, según declaraciones de Manuel Segundo Mora Torres de fs. 3 a fs. 8 (Tomo I), de fs. 293 a fs. 294 (Tomo I), de fs. 506 (Tomo II) y Heraldó Valentín Espinoza Elgueta, de fs. 92 a fs. 94 (Tomo I) y de fs. 264 a fs. 265 (Tomo I).

4°) Calificación. Que los hechos antes reseñados en esta etapa procesal, constituyen el delito de homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, en la víctima N.N., previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 circunstancias 1° y 5° del Código Penal, vigente a la época de los hechos.

5°) Calificación. Que el ilícito antes reseñado, es además delito de lesa humanidad. Así se ha pronunciado este Tribunal, la Iltrma. Corte de Apelaciones de Temuco y la Excmá. Corte Suprema en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

1) Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014.

2) Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014.

3) Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014.

4) Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 6 de noviembre de 2015.

5) Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016.

6) Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015.

7) Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufrquén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016.

8) Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016.

9) Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016.

10) Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 17 de agosto de 2016.

11) Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitrufrquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016.

12) Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016.

13) Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016.

14) Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016.

15) Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016.

16) Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017.

17) Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017.

18) Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017.

19) Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017.

20) Causa rol 10.851, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde, sentencia de 15 de junio de 2020.

21) Causa rol 10.854, del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, seguida por el homicidio calificado en las personas de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017.

22) Causa rol 45.359 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de Domingo Huenul Huaiquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.

23) Causa rol 54.035 del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, apremios ilegítimos en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzun, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzún, sentencia de 23 de diciembre de 2017.

24) Causa rol 63.535, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos en las personas de Manuel Marcelino Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018.

25) Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaiquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

26) Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia del 09 de abril de 2021.

27) Causa rol 113.997, del Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia del 02 de junio de 2021.

28) Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el Secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia del 16 de junio de 2021.

29) Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020.

30) Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020.

31) Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018.

32) Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

33) Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

34) Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

35) Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidio calificado y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

36) Causa rol 29.879, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2017.

37) Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

38) Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, Secuestro Calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 22 de septiembre de 2021.

39) Causa rol 44.305 del Juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por el homicidio calificado en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de febrero de 2021.

40) Causa rol 113.075 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de apremios ilegítimos en las personas de Kristel Leonie Waleska Dossow Teillier, Juan Carlos Durán Fuentes, Sergio Enrique Cabello Romo, Julián Arnaldo Valdés Recabarren, Manuel René Moreno Torres, Raúl Orlando Calfulén Quintriqueo, Rodrigo Antonio Cárdenas Neira, Víctor Hugo

Cárdenas Díaz, Alexis Orlando Contreras Díaz, Víctor Manuel Jofré Valenzuela, Cristina Jeannette Miranda Osorio, Alejandro Fredy Almonacid Sandoval y Flor María Muñoz Meriches, sentencia de 30 de octubre de 2009.

41) Causa rol 1-2013 del Juzgado de Letras de Pucón, seguida por los delitos de Detención ilegal de Alberto Colpihueque Navarrete, Eleuterio Colpihueque, sentencia de 24 de mayo de 2019.

42) Causa rol 18.782 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por los delitos de secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado de Julio San Martín San Martín, sentencia de 28 de julio de 2022.

43) Causa rol 45.364 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Secuestro Calificado de Benedicto Poo Álvarez, sentencia de 11 de junio de 2021.

44) Causa rol 113.999 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de aplicación de tormentos con resultado de muerte de Nolberto Enrique Teodoro Seiffert Dossow, sentencia de 03 de octubre de 2019.

45) Causa rol 15.687-1 del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Puerto Aysén, seguida por los delitos de Secuestro Calificado, Apremios Ilegítimos y Homicidio Calificado de Sergio Osvaldo Alvarado Vargas, sentencia de 03 de noviembre de 2015.

46) Causa rol 5-2013-V de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el delito de aplicación de tormentos en la persona de Harry Cohen Vera, sentencia de 30 de septiembre de 2019.

Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

6°) Concepto de Lesa Humanidad. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las

exigencias de la conciencia pública" (**Óscar López Goldaracena**. *Derecho Internacional y crímenes contra la humanidad*. 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34).

B. Que en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia y Reparación. **Ricardo Lorenzetti**, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal, "Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad" **Eugenio Raúl Zaffaroni**, pág. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

7º) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva

del hecho de que la medida de un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En términos más simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio es que antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. (**Michel Taruffo** (2018): “La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, n° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).-

C. DECLARACIONES INDAGATORIAS

8°) Que prestando declaración indagatoria BENJAMIN RODEMIL FARÍAS LAVÍN (22 años a la fecha de ocurrencia de los hechos) quien declaró a fs. 100 a 101; (Tomo I), 120 a 122; (Tomo I), 1088 a 1091; (Tomo III) 127; (Tomo I) y a fs. 476 a 477; (Tomo II).

En declaración extrajudicial del 3 de septiembre de 2015, rolante de fs. 100 a 101 (Tomo I) precisa que para el año 1973, ostentaba el grado de cabo 2° alumno y se encontraba cumpliendo servicios en la Escuela de Infantería de San Bernardo, siendo destinado al Regimiento Tucapel de la ciudad de Temuco, la primera semana de febrero del año 1974. A su llegada al Regimiento Tucapel, fue encasillado en la 1°compañía de cazadores, al mando del capitán Rodolfo Vargas Campos y los seguía en el mando el sargento Santiesteban y dentro de los instructores solo recuerda a Labraña. Su labor en esta compañía era de guarda almacén de inventario y ayudante de material de guerra, no correspondiéndole en ningún caso efectuar patrullajes de toque de queda, como tampoco puntos fijos en lugares públicos de importancia en la ciudad. Lo que si le correspondió efectuar, fue comandante de relevo de guardia y clase de servicio de compañía. Durante su desempeño en el Regimiento Tucapel, y en las oportunidades que le correspondió desarrollar servicios de guardia, nunca vio personas detenidas por temas políticos, pero si por infringir el toque de queda, las cuales eran mantenidas en unas dependencias ubicada al costado de la guardia y al día siguiente estas personas eran dejadas en libertad. Con referente a la consulta realizada, recalca que nunca le correspondió participar en detenciones, allanamientos, interrogatorios ni mucho menos en ejecuciones o cualquier otro tipo de actos que atenten contra la vida de las personas, debiendo hacer presente, que no es de su conocimiento que otros funcionarios hayan participado en hechos de esta naturaleza. A mediados de junio o julio del año 1974, le correspondió integrar la compañía antiguerrilla, la cual estaba al mando del capitán Velásquez y estaba conformada por alrededor de cuatro o cinco clases de diferentes compañías, recordando a los cabos Hidalgo y Labraña, además de cuarenta a cincuenta soldados. La misión de la compañía contraguerrilla era instruir a los soldados en el ámbito del combate, la cual impartían instrucciones en las cercanías de Temuco y en el sector cordillerano, como lo fue en Melipeuco, Cunco, Lago Villarrica, en este lugar se hacía desembarco de bote, Curarrehue y otros lugares como Freire, Labranza, etc. Blasona que no es efectivo que haya participado de una ejecución en el año 1973 de varias personas en el polígono de la Isla Cautín del Regimiento Tucapel de Temuco. Anexa que como lo estipulo en párrafos anteriores, llegó trasladado al Regimiento Tucapel en febrero del año 1974, proveniente de la Escuela de Infantería de San Bernardo, por lo que para la fecha de los hechos, no

se encontraba en dicha unidad militar. Otro episodio con el cual se le vincula dice relación con la ejecución de una persona que efectuó a mediados del año 1974, en el lago Villarrica, aquilata que es completamente falso, ya que como lo manifestó en párrafos anteriores en su declaración, nunca participó ni presenció ejecuciones de personas. No obstante, es efectivo que en dicho periodo se llevó a cabo instrucciones en el lago Villarrica, pero nunca se le dio muerte a una persona. Con respecto a los hechos que se investigan y que guardan relación con el homicidio de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, recalca que no conoció a la víctima, pero recuerda que un soldado de la compañía andina, boina verde, se le habrá escapado un tiro en el lugar de los hechos. Esta información fue entregada en una formación de todo el regimiento por el comandante Iturriaga. Es todo lo que puede manifestar al respecto.

En declaración judicial de fecha 29 de octubre de 2015, rolante de fs. 120 a 122; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 100 a 101; (Tomo I). Agrega que nunca hizo ninguna especialidad en el ejército porque sufrió de vértigo. Su función era netamente administrativa. Es la razón por la que no llegó a ser suboficial mayor. Cuando llegó a Temuco tenía seis meses de antigüedad en el ejército de planta. Antes fue alumno. A la pregunta realizada, proclama que para el tiempo en que ocurrió el delito que se investiga, llevaba como un mes en el Regimiento Tucapel, y se les informó que alguien se le había escapado un tiro. Fue lo único que les informaron. Fue una formación de cuatro a cinco minutos. La información se las dio el comandante del regimiento **Iturriaga**. Por lo tanto, todos se enteraron, pero la instrucción fue que todo moría en el instante y que no se tenía que hacer ningún comentario más. Espeta que no supieron el nombre de la víctima; solo dijeron que era un civil, y que se le había escapado un tiro a un soldado. Ni siquiera información si estaba al mando de una patrulla, si acaso había un suboficial, no dijeron nada. Puede decir que el regimiento entero supo de esta situación. El tribunal le lee la declaración rolante de fs. 835 y siguientes, en lo pertinente, a lo cual el acusado señala que lo que se realizó ahí estaba malo, pero no estaba en ese tiempo en el lugar de los hechos. El tribunal le lee la declaración rolante de fs. 364 en lo pertinente, a lo que el acusado señala que es falso, dice que era alumno y no se encontraba en el lugar. Era alumno de la Escuela de Infantería. El tribunal le lee la declaración de rolante de fs. 832, en lo pertinente, a lo que el deponente señala que con Oporto llegaron el año 1974 a Temuco. No es efectivo lo que señala que el acusado habría llegado en octubre de 1973. Dice que era alumno de la Escuela de Infantería. El 15 de diciembre de 1973 egresó de la Escuela de Infantería y estuvieron más de un mes esperando la destinación. El tribunal lee la declaración rolante de fs. 864, en lo

pertinente, a lo que declarante concluye que es totalmente falso. Ellos no usaban pistola. Estaba en el sector de rancho arrestado por el teniente Espinoza por un supuesto no cumplimiento de orden, que consistía en hacer desembarco en bote. Expone que sufre de vértigo y no lo hizo. Esto le costó muy caro. Funda que se la pasó prácticamente haciendo servicios, no podía ir a su casa en Curicó y constantemente era perseguido por Espinoza, quien lo amenazaba con un consejo de guerra, por no haber obedecido su orden. El tribunal le lee la declaración rolante de fs. 839 y siguientes, a lo que el acusado explicita que es falso, ellos no utilizaban pistola. Estaba arrestado por parte de Espinoza, quien lo mando a hacer un café, preguntándole si es que sabía hacerlo. Habla que no supo hasta dos o tres días después de que algo había pasado. Alguien comentó que había existido una ejecución en el lago Villarrica, el acusado estaba de instrucción en ese entonces ahí. Nunca se supo quién lo hizo ni nada por el estilo. Especula que la instrucción en el lago duró como un día y su noche; al día siguiente regresaron al regimiento. El hecho de que el deponente se enterara de la ejecución fue una vez que llegaron de vuelta de la instrucción en el lago Villarrica, como dos o tres días después. Este fue un comentario que se hizo entre los soldados. Entre los clase no se comentó nada, solo se enteró en la actualidad con las interrogaciones de detectives.

En diligencia de careo entre José Fernando Romero Silva y Benjamín Farías Lavín, de fecha 2 de noviembre de 2015, rolante de fs. 127; (Tomo I) no conoce a la persona con la cual se le carea, nunca lo ha visto. Y mantiene sus dichos en el sentido de haber llegado a Temuco en febrero de 1974, conforme a su documentación oficial. Inquire que era cabo segundo, no teniente y jamás se hizo pasar por teniente, menos en el año 1973, si no estaba ahí.

En diligencia de careo entre Benjamín Rodemil Farías Lavín y Heraldo Valentín Espinoza, de fecha 15 de junio de 2017, rolante de fs. 476 a 477 (Tomo II) no reconoce a la persona sentada a su izquierda. Explica que nunca le faltó el respeto a un superior, fue una persona pasiva, así lo demuestra su hoja de vida. Existe al parecer otro Farías. Basa que nunca ejecutó a esa persona; en ese tiempo los clases no podían conversar con la oficialidad, se debía cumplir un reglamento de disciplina que indicaba que se debía guardar tres pasos de distancia para hablar con un oficial y nunca tuvo la confianza para hablar de esa forma con un oficial, menos cuando recién venía saliendo de la escuela.

En diligencia de careo entre Manuel Segundo Mora Torres y Benjamín Rodemil Farías Lavín, de fecha 6 de diciembre de 2021, rolante de fs. 1088 a 1091 (Tomo III) no reconoce a la persona con la cual se le carea, luego, se procede a leer la declaración de fs. 120 a 122, a lo que el deponente

dice que hay una confusión en esa declaración, porque ahí están nombrando algo que sucedió cuando este no se encontraba ahí. Le preguntó el detective. Esa era una instrucción que se hizo no en el lago Villarrica donde estaba él; fue a dejar unos elementos cuando se encontraba en Pucón a cargo de un teniente **Espinoza**, pero acota que fue en los tiempos de invierno. Los comentarios que se hicieron ahí en el regimiento, pero precisa que había llegado el primero de marzo de 1974. El tribunal le pregunta si insiste en que no estuvo en Villarrica y si es que no tiene nada que ver con la muerte de esta persona, a lo que éste responde que es correcto, relata que el tribunal tiene en poder todos los documentos otorgados por el Estado Mayor General del Ejército con su llegada al Regimiento Tucapel, habla que llegó los últimos días de febrero y el día primero de marzo comenzó a trabajar en la primera compañía al mando del capitán Vargas, donde permaneció toda su estadía que fue muy corta en el regimiento, fue poco menos de un año, y siempre estuvo en la primera compañía a cargo del capitán Vargas. Musita que como el señor Mora dice que le preguntó a Espinoza, el acusado con Espinoza ya fue careado el año 2016 y éste dice que el acusado nunca estuvo ahí, porque la persona que estuvo en el lago era una persona delgada, alta, de ojos claros, que era muy amigo de los oficiales, y un clase como el acusado, cualquier suboficial, jamás se pondría a conversar o ser amigo de un oficial, está prohibido por reglamento y conversaba mucho con los oficiales esa persona que actuó esa noche, supuestamente también era de apellido Farías. Eso es lo que dice la declaración del señor Espinoza Elgueta, declaración que hizo en el año 2016 delante del señor Millalén. Con relación a la pregunta del tribunal si Farías mantiene sus dichos, el acusado comenta que por supuesto, como dice, llegó en esa fecha que indica, a primero de marzo del 74 y el mismo señor Aedo que hizo la declaración que había un tal Farías Veliz, Hernán Farías Véliz que estaba ahí en el regimiento anteriormente, entonces inclusive lo corroboró el detective Guajardo, también dicen que él no se había dado cuenta de que había dos Farías en una parte del expediente, se refiere al expediente del polvorín. Dice a su Ssa., que tiene en su poder los documentos que acreditan su hoja de vida con la fecha que él comenzó, y con la declaración que hace el Estado Mayor del Ejército cuando llegó al Regimiento Tucapel. Y esta persona que estuvo en Villarrica, como vuelve a decir, era otra persona delgada, alta. A diferencia de su persona que es bajo, mide un metro sesenta y seis, y su contextura siempre ha sido la misma y no tiene los ojos claros, sino que cafés, y esa otra persona supuesta era un oficial, no sabe quién sería, tenía los ojos claros. Los clases no portaban armas de pistola, estaba prohibido por reglamento.

9°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **Benjamín Rodemil Farías Lavín** quien fue sometido a proceso a **fs. 868 y siguientes (Tomo III)**, con fecha 30 de septiembre de 2020. **Acusado** según el auto acusatorio de **fs. 1.097 a 1.127(Tomo IV)**, del 13 de enero de 2022, como autor del delito de **Homicidio Calificado** en su carácter de lesa humanidad, en la víctima NN, perpetrado en la comuna de Villarrica, **entre enero y/o febrero de 1974**; que si bien el acusado agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. Según el mérito del proceso, las pruebas rendidas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados, puntualizando lo siguiente:

a. Declaraciones.

a.1 MANUEL SEGUNDO MORA TORRES. En declaración extrajudicial de fecha 30 de junio de 2015, rolante de fs. 3 a 5; (Tomo I) cuenta que para el año 1973, ostentaba el grado de sargento 2° y se encontraba cumpliendo servicios en el Regimiento Tucapel de Temuco, específicamente como instructor de la 1°compañía de cazadores. En lo pertinente soslaya que a mediados del año 1974, pasó a conformar la compañía contraguerrilla, la cual estaba a cargo del teniente Velásquez, quien era comando y llegó al regimiento en fecha posterior al 11 de septiembre de 1973. Este grupo la conformaban los clases **Heraldo Espinoza Elgueta, Rafael Lizama Saldías, Farías** y alrededor de treinta a cuarenta soldados conscriptos, seleccionados en diferentes compañías. El caso es que a fines de 1974, mientras se encontraba en campaña de instrucción en el lago Villarrica, llegó en un camión militar, el conductor, de quien no recuerda su nombre, con un detenido con su vista vendada. A este detenido lo recordaba ya que permaneció cerca de dos meses en custodia del servicio de guardia, en una dependencia anexa a la guardia denominada “prevención”. Las características de este eran de contextura delgada, tez morena, de 1.70 metros aproximadamente y con bastante conocimiento de izquierda y que al parecer ocupaba un alto cargo dentro de su ideología a la cual pertenecía, inclusive recuerda que nunca recibió visitas por parte de familiares, no teniendo claro si era de Temuco o de otra ciudad. Continuando con el relato, recuerda que el conductor entregó al detenido al teniente Velásquez, situación que presenció junto a los otros clases, transmitiendo el conductor al oficial que al detenido había que eliminarlo. Acto seguido y en esa misma tarde, el teniente Velásquez, hizo un sorteo con papелitos doblados con uno de ellos con la consigna “sí” y “no, por lo que cada uno de los

clases y el oficial debía sacar un papel y al que le tocaba “sí”, era quien debía ejecutar a este detenido, resultando ser el cabo Farías, el elegido por este sistema de sorteo, quien al saber que le tocaría ejecutar, manifestó que sería la persona N°24 en eliminar. Seguidamente y ya comenzando el atardecer, el teniente Velásquez ordenó a los soldados conscriptos retirarse de las orillas del Lago Villarrica hacia unos cuantos metros hacia atrás para que no observaran la ejecución, pero igual se percató que todos miraron y se dieron cuenta de la ejecución que iba a concretar el cabo Farías. Recuerda que el detenido fue colocado sentado y con su vista vendada a las orillas del lago, mirando hacia este, mientras que el teniente Velásquez, Espinoza, Lizama y el deponente se posicionaron detrás del detenido a un metro de distancia. Acto seguido, Farías, sacó su pistola stager, 9 mm y le colocó el cañón en la parte que une la cervical con el cuello, procediendo a los segundos a disparar el arma, provocándole la muerte del detenido inmediatamente. Luego, con una cuerda de nylon, se le amarro una piedra al cuerpo con la finalidad de que hiciera peso y quedara en la profundidad del lago, por lo que el teniente Velásquez y el cabo Farías, trasladaron el cuerpo en un bote hasta la mitad del lago, donde lo lanzaron para que se hundiera. Cuando regresaron al grupo, Farías comentó que el teniente Velásquez con un corvo lo habría abierto con la finalidad de retirar las vísceras y que le había cortado el pene, el cual se lo colocó en la boca al detenido. Declaración ratificada judicialmente, sin perjuicio que a fs. 293 a 294 se refiere en términos similares a estos hechos. Y en diligencia de careo de fs. 1.088 y siguientes se mantiene en sus dichos.-

a.2 ARNOLDO AEDO MATUS. En declaración judicial de fecha 1 de octubre de 2015, rolante de fs. 113 a 117; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 87. El tribunal le lee en lo pertinente las declaraciones de fs. 364 y siguientes y fs. 839 y siguientes, el deponente atestigua que respecto de lo que declaró Mora puede sea verdad, ya que él era una persona tranquila, los hechos deben ser así: respecto de la otra persona que hace mención, ahí se quemó solo, nunca anduvieron instructores de distintas compañías juntos, como señala esa persona; no estuvo allí y tampoco conformó parte de una compañía de contraguerrillas. Nunca trabajó al mando de ese oficial, nunca al mando de un teniente. Nunca trabajó en la zona de Villarrica, sino con el capitán Vargas, en Loncoche, Ciruelos, aquí pernoctaron, pero bajo el mando de capitán Vargas.

a.3 JOSÉ FERNANDO ROMERO SILVA. En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre de 2015, rolante de fs. 84 a 86; (Tomo I), ratificada a fs. 124 a 126; (Tomo I), en lo pertinente aquilata que para el año 1973, cumplía con el servicio militar en el Regimiento Tucapel de Temuco. Para el

día 11 de septiembre de 1973, una vez ocurrido el pronunciamiento militar, recuerda que su compañía se encontraba en el regimiento y en la madrugada del 12 de septiembre, la 1ª compañía de cazadores, debió partir al aeropuerto y tomar un avión Hércules con destino a Santiago, ignorando a que misión se dirigían, ya que nadie daba información alguna. Recuerda que aterrizaron en el aeropuerto de Cerrillos y se trasladaron al Estadio Militar, para luego realizar allanamientos en las poblaciones La Legua, Lo Hermidas y La Bandera. Posteriormente, efectuaron servicios de guardia y custodia de detenidos en el Estadio Nacional, como también resguardar Radio Cooperativa y Televisión Nacional, labor que realizaron alrededor de un mes, para luego a fines de octubre regresar a Temuco. A su regreso al Regimiento Tucapel, le correspondió efectuar servicios de patrullajes de toque de queda, sin embargo, nunca se detuvo a persona alguna, como tampoco se le disparó a aquel que infringiera los horarios establecidos. Atina que una vez que en octubre de 1973, cuando retornaron de Santiago en el avión hércules, llegaron al Regimiento Tucapel los cabos segundo Benjamín Farías, conocido en la primera compañía de cazadores como “el loco” y Luis Oporto a quien le apodaban “el canguro”, ambos provenientes de la Escuela de Infantería.

a.4 JOSÉ ALEJANDRO OPORTO SEGUEL. En declaración judicial de fecha 3 de febrero de 2016, rolante de fs. 178 a 179; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial de fs. 145. En lo pertinente, sostiene que no perteneció de un modo orgánico a la compañía contraguerrilla, sino que participó en ejercicios con ellos, participando como apoyo logístico, no como instructor. Entrega al tribunal una fotocopia de los antecedentes personales que obran en el Ejército respecto de su persona. Colige que llegó en febrero del año 1974 al Regimiento Tucapel de Temuco. El tribunal le lee en lo pertinente la declaración de fs. 832 y siguientes anexando que esa es una presunción, nunca llegó antes. En esa época era alumno activo de la escuela de infantería en San Bernardo. El tribunal le lee en lo pertinente la declaración de fs. 835 y siguientes, asevera que no puede responder lo que dice esta persona, porque son sus dichos con respecto de Farías y su presencia en Temuco para noviembre de 1973.

a.5 RICARDO SEGUNDO TAPIA MELO. En declaración extrajudicial de fecha 21 de enero de 2016, rolante de fs. 156 a 157; (Tomo I) ratificada judicialmente a fs. 180; (Tomo I), en lo pertinente atina que para el día 11 de septiembre de 1973, una vez ocurrido el pronunciamiento militar, recuerda que se encontraba en la población “amanecer”, junto a su escuadra, es decir, alrededor de 12 soldados, efectuando labores de orden público, debido a que habían manifestaciones, siendo ordenado en horas de la noche regresar al regimiento, siendo informado de que toda la 1ª compañía de cazadores viajaría a

Santiago en la madrugada, por lo que partieron al aeropuerto y volaron a Santiago en un avión hércules, ignorando a que misión iban, ya que nadie daba información alguna. Recuerda que aterrizaron en el Aeropuerto Benítez y se trasladaron a Famae, para luego a los días posteriores realizar allanamientos en las poblaciones Lo Hermida, La Bandera y La Legua. Del mismo modo, efectuaron servicios de guardia y custodia de detenidos en el Estadio Nacional, como también la antena de la Radio Cooperativa y Televisión Nacional, para luego regresar a Temuco, no teniendo claro la fecha de su retorno, pero esto ocurrió a mediados del mes de noviembre o la primera semana de diciembre, enterándose por comentarios al interior de la unidad militar que habían asaltado al polvorín. A su retorno al Regimiento Tucapel, se percató que habían instructores y soldados provenientes de Santiago, recordando solo un clase de apellido Oporto.

a.6 RUFINO QUEPUMIL BURGOS.

En declaración extrajudicial de fecha 24 de octubre de 2015, rolante de fs. 142 a 144; (Tomo I) en lo pertinente sostiene que respecto a los cabos **Benjamín Farías y Oporto, Cabo Robles**, según se acuerda, estos habrían llegado con posterioridad a su llegada de haber cumplido servicios especiales en Santiago, pero no se acuerda exactamente la fecha en la que llegaron a cumplir funciones en el Regimiento Tucapel de Temuco, procedentes del Regimiento de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Posteriormente, regresaron a Temuco en un vuelo de pasajeros de la compañía LAN Chile, no se acuerda si en el mes de octubre o noviembre del año 1973,

En declaración judicial de fecha 3 de febrero de 2016, rolante de fs. 181 a 182; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 142. Y aclara que, lo de esta víctima no tuvo conocimiento hasta que se lo mencionó el detective, cuando le habló de Matus a quien el deponente ubica por ser de la compañía, pero de otra sección, cree que de la primera de la misma compañía. A la pregunta realizada, no recuerda sí estuvieron un mes o dos meses en Santiago, solo sabe que se fueron el día 12 de septiembre a Santiago. Ante la pregunta realizada, no recuerda la fecha exacta en que habrían llegado estos instructores nuevos a saber, Farías, Oporto y Robles, cree que fue después del golpe. Han pasado tantos años, recuerdas los nombres, al Oporto lo apodaban “cara con mote”. No recuerda fechas, pero sabe que llegaron. Se refiere a otros hechos.

a. 7 ARMANDO SEGUNDO VALLEJOS BARRA. **En declaración extrajudicial de fecha 26 de enero de 2016, rolante de fs. 164 a 166; (Tomo I)** en lo pertinente sostiene que en el mes de noviembre de 1973, llegaron cabos nuevos de la Escuela de Infantería de San Bernardo al regimiento, recordando

solamente a Oporto y Farías. Declaración judicialmente ratificada a fs. 186 a 188 (Tomo I).-

a.8 LUCIANO CÉSAR VERGARA RIVERA. En declaración extrajudicial de fecha 27 de enero de 2016, rolante de fs. 161 (Tomo I) en lo pertinente depone que llegaron instructores nuevos de Santiago a la compañía, los cabos Oporto, Robles y Farías, éste último apodado “el loco”. Estos llegaron a los días posteriores a la llegada de su compañía de Santiago, es decir a fines de octubre o principios de noviembre de 1973. Inclusive en su condición de clase de servicio, el mismo lo recibió en la 1° de cazadores. A fines de 1973, finalizó su servicio militar en el Regimiento Tucapel, para luego continuar como civil, en diferentes oficios. Declaración ratificada judicialmente a fs. 189 (Tomo I).-

a.9 JOSÉ FERNANDO VEGA HUENCHUMILLA. En declaración extrajudicial de fecha 26 de septiembre de 2015, rolante de fs. 70 a 72; (Tomo I), ratificada judicialmente a fs. 248; (Tomo I), soflama en lo pertinente que respecto a los cabos **Benjamín Farías y Oporto**, el cabo **Robles**, cuando regresaron de Santiago, los primeros días de octubre del año 1973, estos instructores, ya se encontraban formando parte del contingente de la 1°compañía de cazadores del Regimiento Tucapel, provenientes de la escuela de infantería de Santiago. Luego espeta, que al regreso del deponente a Temuco en un vuelo de pasajeros de la compañía LAN Chile, los primeros días del mes de octubre del año 1973, le tocó subir a campaña en el sector de Reigonil, en Curarrehue, a cargo del cabo **Oporto**, cumpliendo funciones de control de frontera y soberanía nacional, ocasión en la que no presencié detenciones ni fusilamientos, ni menos fue parte de estos.

a.10 HERALDO VALENTÍN ESPINOZA ELGUETA. En declaración judicial de fecha 7 de abril de 2016, rolante de fs. 264 a 265; (Tomo I) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 91 a 94. Ante la pregunta realizada, Farías era un cabo nuevo, bajito, no era moreno, de piel más bien blanca, no era muy alto, delgado. Cree que era un oficial encubierto. Ellos lo calificaban a él como “chupetero”, o colgado de los oficiales. En ese tiempo todos andaban con pistolas. El deponente andaba con un revolver 38. Todo el mundo andaba armado en ese tiempo, **Farías** apareció después del 11 de septiembre, como en octubre de 1973, de la escuela de infantería. Delibera, cuando **Farías** le disparó al joven en Villarrica lo hizo con una pistola automática. No lo hizo con revolver, de eso está seguro. No sabe cuál era el nombre de la pistola. Andaba con sueño en esa escena. Ante la pregunta realizada, **Emilio Cariaga** era comando, usaba boina negra, no recuerda a otro más. Describe que la persona tenía como 25 a 30 años, de buena complexión física, le daba café en las noches, lo que era una

contravención a las órdenes que tenían, se notaba bien instruido, conversaba con él, nunca le preguntó por qué estaba ahí. Estaba incomunicado en una pieza como la que está prestando declaración. Pensativo, presintiendo tal vez en lo que le podía pasar. Tenía un colchón, una cama en el suelo. No era rubio, ni era moreno tampoco. Puede haber medido como un metro setenta, no era tan alto. Siempre estaba con un papelito como enrollándolo en sus manos. Encerrado empezó a crecerle barba y bigotes, no era muy tupido de barba. Tenía el pelo largo porque le había crecido en la detención por la cual estaba. No supo de algún apodo de él ni tampoco su nombre. Su rostro era delgado, no de cara muy larga. Se acuerda claramente del hombre, se notaba compungido por el hecho de estar preso. No era gordo ni flaco, contextura deportiva. No era tan viejo el hombre. La persona estaba incomunicada. Era una persona instruida, no era un huasito de campo. Ellos en ese entonces estaban en un fundo, pero no sabe cuál. La persona debe estar en el fondo del lago Villarrica. El tribunal le exhibe distintas fotografías agregadas al proceso, a lo que el deponente manifiesta inclinarse por reconocer a la persona cuya fotografía rola a fs. 1024, sin una certeza absoluta.

a.11 JOSÉ JOEL MATUS SALAZAR. En declaración judicial de fecha 21 de febrero de 2017, rolante de fs. 455 a 461; (Tomo II) ratifica la declaración extrajudicial rolante de fs. 442. Y ratifica la declaración prestada en la causa del polvorín de fecha 30 de septiembre de 2016. Colige que cuando llegaron los clases de Santiago, a saber Oporto y Farías Lavín, el mismo deponente les entregó las llaves de los departamentos de solteros. Recuerda que uno de ellos estuvo en septiembre de 1973 en el regimiento. Se refiere a otros hechos. Respecto de la víctima NN ejecutada en Villarrica. Esta persona estaba como junior. Zúñiga conversaba hartos con él, era de 1.70 metros, de unos 25 años hacia abajo; era una persona que le gustaba leer; tomaba el diario, los leía todos; pelo castaño, largo, no usaba anillos, le decían el norteño, se notaba educado, nadie llegó a preguntar por él; con los nuevos detenidos que llegaba de cualquier parte, se hacía un circular que informaba a todo el país para informar; supo que lo habían encontrado en una sede de un partido político y por eso lo detuvieron; nunca lo vio torturado en mal estado; estuvo meses; a Salgado le preguntó, este lo hacía lustrar las botas; la forma de su rostro era alargada; estaba bien vestido cuando llegó; no usaba bigotes; Alvarado también lo ocupó en la oficina para hacer aseo. A la pregunta realizada, los libros están quemados. Se refiere a otros hechos.-

a. 13. EDUARDO GASTÓN ZÚÑIGA DÍAZ. En declaración judicial de fecha 17 de marzo de 2017, rolante de fs. 462 a 465; (Tomo II), refiere que hubo una persona a la que le decían el telefonista. Nadie la visitó; todos rotaban

en la guardia; el oficial de ronda a veces coincidía con el de la compañía y a veces no; el oficial de ronda piensa que podía dar las novedades al comandante; todos le decían el telefonista. No supo que le pasó; era un detenido; debe haber tenido unos 20 a 25 años; el hombre dormía en la misma guardia en un calabozo; puede ser que en el libro de guardia esté su nombre.-

b. Documentos.

b.1 A fs. 501 a 503; (Tomo II) contiene informe pericial de retrato descriptivo del Laboratorio de Criminalística Regional Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile, en lo pertinente señala que: *“Recopilados los antecedentes, se concluyó en el rostro representado en la lámina adjunta, correspondiendo a la persona que habría estado detenida y luego habría sido asesinada en las orillas del lago Villarrica, según lo descrito por el testigo”*.

10°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos. Ponderados, consistentes en testigos, documentos y pericias antes señaladas como además se indica en el auto acusatorio de **1.097 a 1.127 (Tomo IV)**, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción:

a) Que ha existido el delito de **homicidio Calificado** en la víctima N.N., previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancias 1° y 5° del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de **lesa humanidad**.

b) Que en ese ilícito le ha correspondido la participación en calidad de autor en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado **Benjamín Farías Lavín**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

D. EN CUANTO A LA DEFENSA.

RESPECTO AL ACUSADO BENJAMIN FARÍAS LAVIN:

11°) Que a **1.143 a 1.149 (Tomo IV)**, el abogado Christian Salgado, en representación de **Benjamín Farías Lavín**, en lo principal de su escrito contesta acusación fiscal y acusaciones particulares, solicitando se le absuelva por no haber tenido participación alguna en los hechos investigados en estos autos; en subsidio, acoger la minorante muy calificada del artículo 103 del Código Penal y

las contempladas en los numerales 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal, aplicar la pena reducida en 2 ó 3 grados y conceder alguna medida alternativa de cumplimiento de condena, establecida en la Ley N° 18.216.

Para un mejor entendimiento del escrito presentado por ésta defensa, se estructura su presentación de la siguiente manera:

A. Contestación acusación fiscal y acusaciones particulares:

a) No se ha acreditado la efectividad del delito de homicidio calificado.-

b) No se ha acreditado la participación culpable del acusado.-

B. En subsidio, se le aplique la pena mínima legal.

A. CONTESTACIÓN ACUSACIÓN FISCAL Y ACUSACIONES PARTICULARES.

a) No se ha acreditado la participación culpable, alega que la víctima no se encuentra identificada y no existen antecedentes probatorios suficientes, como los supuestos restos del occiso ni la ubicación exacta del lugar de los hechos. Agrega que no está comprobada la existencia física y biológica de la presunta víctima, no configurándose el elemento básico para el homicidio, como es que la persona viva. Blasona que pensar de otra forma, podría vulnerar los artículos 120 y 121 del Código de Procedimiento Penal.-

b) No se ha acreditado la participación culpable del acusado, fundamenta que su representado no estaba presente en el lugar porque los hechos ocurrieron en enero o febrero de 1974. Sin embargo el encausado ingresó a ejercer funciones en el Regimiento de Infantería N°8 Tucapel el 01 de marzo de 1974 según da cuenta el informe de estado mayor del Ejército de Chile acompañado en la causa rol 113.089. Asevera que la acusación se basa en declaraciones de dos testigos las cuales son contradictorias entre sí, por cuanto no hay armonía en la fecha de los hechos y la dinámica de los mismos; parciales y poco creíbles toda vez que en causa diversa declararon en contra de su representado, no obstante fue sobreído por no haber tenido participación y por último la defensa aquilata que ninguno de los testigos reconoció a don Benjamín Farías en sus respectivos careos.

B. EN SUBSIDIO, SE LE APLIQUE LA PENA MÍNIMA LEGAL, en relación al acusador particular solicita sea rechazada por improcedente la agravante N°8 del artículo 12 del Código Penal, razonar en forma contraria sería vulnerar el principio non bis in ídem y el artículo 63 del mismo cuerpo normativo. Atina debe aplicarse en la sentencia una pena no superior a los 5 años de presidio o reclusión por favorecerle la atenuante muy calificada del artículo 103 del Código Penal, esto es, media prescripción o prescripción gradual, por haber transcurrido más de la mitad

del tiempo de prescripción y por favorecerle además, las atenuantes de los números 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior a la época de los hechos y la colaboración sustancial que ha prestado siempre su representado para el esclarecimiento de los hechos, siendo procedente concederle alguna medida alternativa de cumplimiento de condena, establecida en la Ley N° 18.216.

E. ANÁLISIS DE LA DEFENSA.

12°) CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS DE LA DEFENSA ESPECÍFICA:

Que previo al análisis de las defensas específicas es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallarán:

A. Obligación de investigar:

Cabe hacer presente que para la ponderación y aquilatación de los medios de pruebas del proceso en materia de violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

a. Los estándares normativos e interpretativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la **Obligación de investigar**.

b. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124,

señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

c. Que esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

d. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la Convención Americana- ya citada- en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

e. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los DDHH (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

f. Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. Párrafos 176 y 177, afirma en el **176** que (...)el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Por su lado en el **177** acota que (...) la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. Párrafo **225**, añade que del artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos.

Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo **41** asevera que esta Corte considera que son inadmisibles las

disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su párrafo **42** anexa que (...) La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria (...).

Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo **184** expresa que (...) el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado.

Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003. En el párrafo **115** explícita que (...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.

Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo **277** expresa que (...) asimismo, en el cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso.

Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004. Párrafo **159** acota que (...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando

existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana.

Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo 83 añade que (...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo 145 anexa que (...) está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.

Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus párrafos 137, 233 y 299. Afirma en el 137 (...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso. 233 (...) Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados partes en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales; 299 (...) Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales,

fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán.

Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo 143 afínica que en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que 117 (...) Además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. 129 (...) una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables. 130 (...) Por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para

juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido.

Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa **111** (...) Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. **114** (...) Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo **387**. (...) Explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.

Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que, **155** (...) La

Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. **156** (...) el eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. **171** (...) este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo.

Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007. Párrafo **106** indica que (...) Una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: **a)** identificar a la víctima; **b)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; **c)** identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; **d)** determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y **e)** en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio.

Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. Párrafo **131** manifiesta que (...) el Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo

anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos.

Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en **104**, (...) que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos. **112** (...) la obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional. **115** (...) Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas.

Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo **142** narra que (...) la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar

derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos.

Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo 77 acota que (...) en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.

Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. Párrafo 283 añade (...) que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *Ius Cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los

hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su párrafo **298** apunta que (...) la obligación general de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación *ex officio*, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. Párrafo **135** apoya que (...) este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la

suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación.

Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que (...) en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que (...) la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales.

Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011. Párrafo 194 asevera que (...) la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el

efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

g. Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un estándar en relación a la **Obligación de Investigar** en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en Eduardo Ferrer Mac-Gregor- (Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal. Revista IIDH v. 59 pp.45-48). Autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

- i. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.
- ii. Si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.
- iii. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus

familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.

- iv. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.
- v. La Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.
- vi. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.
- vii. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.
- viii. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.
- ix. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.
- x. El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.
- i. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener

las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación

- ii. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.
- iii. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.
- iv. La Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

h. Que tal como se ha señalado latamente en los párrafos precedentes, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto

al momento de investigar, como al momento de valorar la prueba del proceso. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba y ver los patrones de conducta de los Agentes del Estado. Tal como, lo que se ha realizado en esta sentencia y que la defensa nada expresa. Así del estudio de sus argumentos sucede que no hay un cotejo y ponderación adecuado de todos los testigos, documentos y peritajes, sino que se refieren a eventos parciales de su propio interés. Ocurre que esta defensa debe situarse en la sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que significa la violación de los Derechos Humanos y el delito de lesa humanidad.

B. Jurisprudencia Internacional Sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) Pronunciada por los Tribunales Alemanes.

a. Que en todo caso a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno- pues también los hechos investigados son graves violaciones a los derechos humanos, en este caso delitos de lesa humanidad y haremos los ajustes precisos y detallados al caso chileno, esto es, Centros de Detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisarías, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, Cárceles, Calabozos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época) es muy significativo lo razonado en derecho comparado en los **casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk** (condenado el 12 de mayo 2011) **y Oskar Gröning** (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad , respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes. A continuación se realiza un síntesis en lo pertinente de los artículos de Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín sobre el caso Demjanjuk y de Claus Roxin sobre el caso Oskar Gröning.

b. Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín. Revista Penal México. N°9 septiembre 2015- febrero 2016, pp.181-193. Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal Estatal) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos,

a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidio calificado, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como **cómplice** de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo a la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración, se consideró el hecho de que **el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos deportados**. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado dedicado a la seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzados, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. **Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas**. Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los

judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

c. Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos– tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y –siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos– en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que, en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

d. Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Gomerski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que **“todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo.** De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”.

e. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la **sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof**, que se llevó adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12

acusados. Ante la **alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico**, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que [...] se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: “Conforme a lo constatado [...] ya por su pertenencia al comando especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, **los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas**. La naturaleza de las tareas que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

f. El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que **toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo**. La declaración principal podía resumirse diciendo que **allí no había actividades neutrales**. Es decir esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, **según la jurisprudencia la situación dependerá del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana**. Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El caso llevó la atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

g. Que el segundo artículo versa sobre la **sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz**. Sentencia del BGH y comentario de Claus Roxin (Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. CEDPAL, Editores Kai Ambos John Zuluaga, volumen 2, 2018, pp. 189-209). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso de revisión solicitado por el acusado (Oskar Gröning) en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

h. Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en **calidad de cómplice** de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94 años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: **a)** Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de las SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado, conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en

intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

i. Que el profesor **Roxin** expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos, no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del Art. 27 inciso 1 del Código Penal, por un lado –mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro -como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944 ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

j. Que desde esa perspectiva cavila el autor, que **el acusado tuvo participación en esta facilitación de los hechos**. Era parte del aparato de

personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

k. Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

m. Que por ello Claus Roxin considera que la decisión anterior relatada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella deja definitivamente en claro que **los miembros del equipo de un campo de concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato**, si ellos sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

n. Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20.2.1969** (veinte de febrero de mil novecientos sesenta y nueve), a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de

sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se señala lo siguiente: “Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió... En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

ñ. Que precisa Roxin que **no existen causales de exculpación**. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedida por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. **Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho.** Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

o. Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

- i. **Al 11 de septiembre de 1973 en Chile no había Estado de Derecho.** Se había quebrado el orden institucional pues las Fuerzas Armadas y de Orden dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.
- ii. Es decir se retrocedió de inmediato 200 años, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias. Situación que en la historia

abundan. Ahora bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del hombre y del Ciudadano de 1789 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los artículos 2 y 16 de la citada declaración. Artículo 2, la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; artículo 16, Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.

- iii. En este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), no hubo separación de poderes (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el congreso; el Poder Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad tenía un doble resguardo de los derechos fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia el cuidado hacia los derechos y libertades de las personas le exigía un estándar mayor; en segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las persona se debía tener una necesidad, proporcionalidad y mayor fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho.
- iv. **En este caso entonces las personas detenidas y llevadas al centro o lugar de detención estaban en una alta indefensión**, como puede observarse en las causas citadas por este Ministro en la ponderación de la prueba y en el análisis de las declaraciones indagatorias.

p. En este caso, el **homicidio calificado** desde el inicio (como indica el mérito del proceso y el Auto Acusatorio de **fs. 1.097 a 1127 (Tomo IV)**), comenzó con una detención irregular e ilícita, para luego terminar con el homicidio de **la víctima N.N.** Las múltiples pruebas, directa e indirecta generales y específicas que se ha detallado y ponderado precedentemente dan cuenta de lo razonado, lo que demuestra que el acusado Benjamín Farías Lavín actuó en estos hechos descritos en el auto acusatorio de fs. 1.097 y siguientes (Tomo IV). Luego se dan todos los elementos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad para formularle al acusado el reproche penal que se ha señalado. Ello sin perjuicio del análisis de la defensa.

C. Estado De Derecho:

a. Estado Autoritario: Un Estado autoritario, es aquel donde **el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas**. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella. (Roberto Ruiz Díaz Labrano: El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia, p. 3. Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc). La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso arbitrario del poder. En una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario. (Oscar Vilhena Vieira (2007): La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. p.33). En esa línea el concepto de Estado de Derecho **es una respuesta al Estado absolutista**, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno. (Dante Jaime Haro Reyes: Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia. www.juridicas.unam.mx. p. 123). Puede sostenerse entonces, que **su búsqueda va dirigida a limitar y restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos**. Es decir, permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política. (Pablo Marshall Barberán (2010): El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, pp. 185-204).

b. Origen: El Estado de Derecho nace como como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos (Luis Villar Borda (2007): Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Revista de Derecho del Estado N° 20, p. 74). En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la

sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento (Haro, p. 118).

c. Fundamento: El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón. Así, **su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo:** en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder (Marshall, pp. 187-188).

d. Concepto: El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre (Haro, p. 124). Del mismo modo, como expresa Guastini en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad (Haro, p.123). Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos (Haro, p. 126).

e. Elementos: Marshall siguiendo Böckenförde, expresa que las características originales del Estado de Derecho es la siguiente: **a)** el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; **b)** los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y **c)** la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad,

igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones (**Marshall**, p.191). En esa línea Benda considera que el Estado de Derecho **involucra: a)** seguridad jurídica y justicia; **b)** que la Constitución sea la norma suprema; **c)** la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; **d)** vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; **e)** división de poderes; **f)** protección de los derechos fundamentales; **g)** tutela judicial; **h)** protección de la confianza jurídica. (**Marshall**, p.191). Sobre lo anterior **Villar Borda** (p. 74-81) realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho- principios racionales dirá Böckenförde-. En realidad, en Estado de Derecho hay una acumulación de ideas de **muchas fuentes y distintas épocas**, así: **a)** sometimiento del poder al derecho; **b)** el gobierno de la razón; **c)** El gobierno de la leyes y no de los hombres; **d)** La Obligación del gobernante de proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional.

f. Chile y el Estado de Derecho: Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestras libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. **La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder.** La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad.** Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República democrática (**Renato Cristi y**

Pablo Ruiz- Tagle (2006): La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano. Ediciones LOM. pp. 114- 130). Además de la lectura de la Constitución de 1925 esta consagra, además, **el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo**. Así es verificable en sus artículos 1 a 4 que consagra el gobierno republicano y democrático (1) la soberanía reside en la nación (2). Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya conferido por la leyes (4). Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

Por su lado la Constitución de 1980 (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma incipiente nos anuncia en su artículo 4 que Chile es una República democrática. En su artículo 5 que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. **Marshall** (pp.199-202) expresa de los artículos 5 a 7 de la carta fundamental se desprenden algunos principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la Constitución Política: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. (i) El enunciado del artículo 5 inciso 2º como consagración del principio de distribución. La afirmación de que **el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales** es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía constitucional (art. 6 inc. 1º), legalidad en sentido amplio (arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º), garantía del orden institucional (art. 6 inc. 1º), fuerza normativa de la Constitución (art. 6 inc. 2º); responsabilidad (art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º), distribución de competencias-separación de poderes- (art. 7 inc. 1º y 2º), legalidad en sentido estricto (art. 7º inc. 1º).

Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar. (Marshall, pp. 191-192).

En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera **uno de los pilares principales de un régimen democrático** Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso. (Vilhena, p.30).

13°) Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se ha expresado con anterioridad hay que tener presente que las autoridades que tomaron el Poder tras el 11 de septiembre de 1973 tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. En especial, porque si desde ya hay un quiebre constitucional significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que, está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. En este caso entonces las personas detenidas y llevadas a un centro o lugar de detención estaban en una alta indefensión. El homicidio calificado (como indica el mérito del proceso) de **la víctima NN**, fue al margen de todo derecho. En consecuencia, tanto el mando superior como los subordinados respectivos y grupos especiales para detener a personas por motivos políticos, se encuentran en condiciones como se ha cavilado, de realizarles un **reproche penal** como se ha hecho en esta sentencia. Ello sin perjuicio del estudio de la defensa.

14°) En cuanto a la noción de matar a otro.

a. La palabra **homicidio** deriva de la expresión latina homicidium, que a la vez se compone de dos elementos: homo y caedere. Homo que significa hombre y caedere que significa matar. En esta forma, homicidio significa **muerte de un hombre causada por otro hombre**. Es decir privar de la vida a un ser humano por cualquier medio. En cuanto al **sujeto pasivo –reiteramos-** que sólo **puede ser sujeto pasivo** en el homicidio, una **persona física**, de manera que la muerte causada a un animal constituye el delito de daños en propiedad ajena, pero no homicidio; tampoco la persona jurídica o moral puede serlo.

b. Que por otro lado, a partir, entre otros los artículos; 108, 110, 112, 116, 121, 124 , 125 del Código de Procedimiento Penal es posible establecer el hecho ilícito y los presuntos responsables en **este caso por ahora**, toda vez que de inicio(según estándares normativos sobre **obligación de investigar**) no es aceptable que por la **indeterminación del nombre de la víctima** no se permita determinar el hecho el ilícito y los presuntos responsable, pues de seguir esa teoría se contribuye a la impunidad. Borrar los antecedentes no es óbice para la investigación (Revista de derecho N° 10, diciembre de 2003 Doctrina procesal

penal). En todo caso un ejemplo sencillo nos aclara la situación. Tres personas en un restaurant ver a un hombre que mata a otro hombre a través del disparo de un proyectil con un arma de fuego. La víctima no es posible identificarla pues es un extranjero que ingresó al país en forma irregular y estuvo siempre en forma clandestina sin documentos. Nadie puede decir que allí no hubo homicidio. Pues hay testigos que vieron de primera mano cómo un hombre mató a otro hombre.

c. Que en esa misma ilación (**presunto NN**) a modo de simple referencia existen varios antecedentes judiciales públicos: **a)** 2 de Noviembre de 2015, en Antofagasta (Fiscal a cargo David Cortés) se detuvo a una persona como autor de un homicidio en una riña respecto de un hombre a esa fecha no identificado; **b)** el 10 de mayo de 2016 en Avellaneda, Argentina se condenó a una persona por homicidio respecto de un joven de rasgos orientales que, a tres años del crimen, **aún no pudo ser identificado** y su cadáver permanece en la morgue judicial (sentencia de causa n° 4370 (c/n° 47941/2013 del sistema lex-100) del Tribunal Oral en lo Criminal n° 8 de la Capital Federal; sentencia de casación de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional- sala 3 CCC 47941/2013/TO1/CNC1, Reg. N° 671/2018 de la Capital Federal, del Poder Judicial de la Nación, República Argentina, de fs. 747 a fs. 867 (**Tomo III**).

d.- Que resumiendo entonces la figura del homicidio (y por supuesto del homicidio calificado, artículos 390 y siguientes del Código Penal) este describe que (artículo 391): “ El que mate a otro...” Es decir como expone Garrido Montt al Derecho Penal, no le interesa la muerte en general, sino aquella provocada por el hombre, interrumpiendo la vida de otro (El homicidio y sus figuras penales, Santiago, ediciones Encina limitada 1976, pág 40). O bien como expone Carrara: “La muerte de un hombre causada por otro hombre”(misma obra citada, pág., 13).No **exige** el Código Penal- ni el tipo- que **se sepa los nombres y apellidos** de la víctima; sino que logremos determinar con claridad **que la víctima era otro hombre**. Luego es posible por ahora someter a proceso a una persona como presunto responsable de una persona no identificada(origen, nombre y apellidos) pero si vista (por varios soldados) tenida en custodia(detenida) por agentes del Estado y caracterizada- como se indica más adelante. Lo **esencial** es que se mate a otro(a un ser humano).-

e.- Que se reitera que se deben tener presente los elementos del estándar normativo en derechos humanos sobre la **obligación de investigar** respecto de graves violaciones a derechos humanos, en este caso posible delito de lesa humanidad. Este trabajo, es a criterio de este Tribunal, la correcta valoración del

mérito del proceso y del derecho en este tipo de causas y que debe darse a este tipo de procesos, en esta etapa procesal.

F. ANÁLISIS DE LA DEFENSA ESPECÍFICA.

15º) Que haciéndonos cargo de la defensa de **1.143 a fs. 1.149 (Tomo IV)** del abogado **Christian Salgado Contreras**, por el acusado **Benjamín Rodemil Farías Lavín**, el Tribunal estará a lo antes razonado respecto a la declaraciones indagatorias del acusado y todos los fundamentos pertinente que atingen a esta defensa en el análisis que se hizo, precisando que:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: Que la defensa en su escrito no interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento.-

B. Sobre las tachas de testigos y objeciones de documentos: Que de la misma manera, la defensa pudiendo haberlo hecho no presentó ninguna tacha a los testigos, en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. De igual forma, no objetó ningún documento en particular.

El tribunal puntualiza lo siguiente:

A. A diferencia de lo que expone la defensa y como ya se expresó tanto en el auto de procesamiento de fs. 868 a 903 (Tomo III) en el auto acusatorio de fs. 1.097 a 1.127 (Tomo IV) y en las consideraciones generales citadas precedentemente, el tipo penal del artículo 391 del Código Penal, lo que describe es: “el que mate a otro” . Es decir, dicha descripción típica no exige ninguno de los elementos que propone la defensa, nombre, apellido, altura, domicilio, etc. de la víctima. El punto es que la defensa confunde las materias, la norma que aluden el artículo 120 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, es para el caso que se hubiera encontrado el cadáver o restos de el. En esta investigación y sentencia no es ese caso. Luego no es efectivo en conformidad a los artículos 120 y siguientes del código precitado que no pueda determinarse por otros medios legales la comisión de un homicidio, basta un simple ejemplo, si aún restaurante llenó de gente, llega una persona con un arma de fuego y ejecuta a un hombre o mujer, luego lo retira y lo hace desaparecer. Para horas después ser detenido el autor. ¿Puede ser condenado como homicida la persona que mató a otro en el restaurante?, la respuesta es afirmativa, porque existen otros medios de pruebas legales como testigos del restaurante, que acreditan que tal persona, ejecuto a otro en ese lugar. El hecho que no se encuentre el cuerpo, no es una condición

del tipo penal de homicidio, y no es una condición requerida por el Código de Procedimiento Penal. De seguir la teoría de la defensa, muchos autores homicidas tomarían como estrategia, hacer desaparecer el cuerpo, no obstante que pueden ser vistos, ya sea por testigos o cámaras de seguridad. No existe ningún mandato legal (y no podría existir) que prohíba o impida a los Tribunales determinar la comisión de los delitos de homicidios, por otros medios probatorios dispuestos por la ley. En consecuencia no se puede acoger esta petición de la defensa.

B. Sobre la participación culpable del acusado, el Tribunal estará a la extensa ponderación y relación de las pruebas antes aquilatadas que obran en contra del acusado Benjamín Farías Lavín. En efecto no son solo pruebas indirectas, sino que la permanencia y estancia del encartado en el Regimiento Tucapel es acreditada por los testigos Manuel Mora de fs. 3 a 5 (Tomo I) en lo pertinente depone *“Acto seguido, Farías, sacó su pistola stager, 9 mm y le colocó el cañón en la parte que une la cervical con el cuello, procediendo a los segundos a disparar el arma, provocándole la muerte del detenido inmediatamente. Luego, con una cuerda de nylon, se le amarro una piedra al cuerpo con la finalidad de que hiciera peso y quedara en la profundidad del lago, por lo que el teniente Velásquez y el cabo Farías, trasladaron el cuerpo en un bote hasta la mitad del lago, donde lo lanzaron para que se hundiera. Cuando regresaron al grupo, Farías comentó que el teniente Velásquez con un corvo lo habría abierto con la finalidad de retirar las vísceras y que le había cortado el pene, el cual se lo colocó en la boca al detenido”*; en el mismo sentido declara Arnoldo Aedo Matus de fs. 87 (Tomo I) que en lo pertinente señala: *“posterior a su regreso de Santiago, que podrá corresponder a los días comprendidos a la primera quincena del mes de noviembre”*, continua *“un cabo de apellido Farías, quien había llegado hace poco trasladado de Santiago, también debían estar a esa hora en la sala de guardia”*; en tanto José Fernando Romero Silva depone a fs. 84 a 86 (Tomo I) en lo pertinente sostiene: *“Atina que una vez en octubre de 1973, cuando retornaron de Santiago en el avión hércules, llegaron al Regimiento Tucapel los cabos segundo Benjamín Farías, conocido en la primera compañía de cazadores como “el loco” y Luis Oporto a quien le apodaban “el canguro”, ambos provenientes de la Escuela de Infantería”*. Así también están los dichos de Heraldo Espinoza Elgueta de fs. 264 a 265 (Tomo I) en lo pertinente aquilata: *“En ese tiempo todos andaban con pistolas. El deponente andaba con un revolver 38. Todo el mundo andaba armado en ese tiempo, Farías apareció después del 11 de septiembre, como en octubre de 1973, de la escuela de infantería. Delibera, cuando **Farías** le disparó al joven en Villarrica lo hizo con una pistola automática. No lo hizo con revolver, de eso está seguro. No sabe cuál era el nombre de la pistola.”* Por otro lado, analizando

los documentos acompañados por la defensa consistentes en: a) certificado emitido por el departamento cultural, histórico y extensión del Ejército, Archivo General del Ejército; b) copia del informe emitido por Estado Mayor General del Ejército de Chile; c) copia de la resolución de 15/02/2018 causa rol 113.089 y d) resolución del 06/03/2020 de la Iltrma. Corte de Apelaciones de Temuco que aprueba lo consultado del 15/02/2018. En nada arredran los testimonios antes sindicados. En efecto el primer documento es un certificado, a diferencia de lo que expone la defensa mantiene los razonamientos del Tribunal y los hechos establecidos, toda vez que en la dirección del personal, señala que el encartado pasó a continuar sus servicios a menos el 18 de febrero de 1974, y los hechos ocurrieron entre enero/febrero de 1974. En todo caso, hay que hacer presente que se estaba en un régimen militar y las operaciones especiales y traslados se hacían en forma inmediata. En todo caso, una cosa es que a una persona se le designe un regimiento, y otra cosa son las publicaciones oficiales y revistas de comisario, que por materialidad se realizan meses posteriores. En consecuencia la propia defensa confirma que a la época de los hechos, se encontraba su defendido cumpliendo funciones en el Regimiento Tucapel. El segundo documento (letra b) es una copia del Informe del Estado Mayor del Ejército que da cuenta que el enjuiciado cumplió servicios entre el 01 de marzo y diciembre de 1974 en el Regimiento Tucapel de Temuco. Este documento tiene la misma estructura que el anterior, no obstante no precisa el registro de la dirección personal del encausado, que ya ha sido analizada, en lo demás poco aporta porque se trata de la lista de revista de comisario, que se realizan con posterioridad a las destinaciones materiales de los funcionarios militares. Un aspecto valioso, es que ninguno de esos documentos tiene el mérito probatorio de desvirtuar las declaraciones detalladas y minuciosas de las personas que estuvieron en el lago Villarrica con Benjamín Farías Lavín. El tercer documento (letra c) es una resolución de la causa rol 113.089 donde se sobresee parcial y definitivamente a Benjamín Farías Lavín. Y el cuarto documento (letra d) es una resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco que aprobó lo consultado la sentencia del 15/02/2018 que decreta el sobreseimiento definitivo de Farías Lavín. Pues bien dichos documentos no logran desvirtuar el valor probatorio de los testigos antes indicados, en efecto la defensa no ha acompañado ningún documento emitido por la autoridad de la época que acrediten que Benjamín Farías Lavín ingresó al Regimiento Tucapel en las fechas que indica. De los documentos que acompaña la defensa, sino que hacen referencia a una publicación. Precisar que dicha publicación se hace con posterioridad a lo que la persona asume sus funciones, lo que sí está claro que soldados del Regimiento Tucapel como los señalados sí pudieron ver la presencia

y participación en los hechos de Benjamín Farías Lavín Respecto al sobreseimiento y confirmación nada acreditan respecto a esta causa.

C. Respecto a que las declaraciones de los testigos Manuel Mora y Heraldo Espinoza son contradictorias, ello no es efectivo. En efecto se trata de la investigación de hechos ocurridos entre enero/febrero de 1974, en el lago Villarrica, lo que el Tribunal fue determinando en conformidad a las pruebas del proceso. Respecto a la forma en que el Teniente Velásquez eligió en la forma que debía ejecutar a la víctima, no tiene mayor relevancia, porque lo cierto es que se hizo la elección del soldado y se ejecutó a la víctima. En cuanto a los sobreseimientos ellos se refieren a otros hechos, que es la causa rol 113.089 y en el proceso en modo alguno está probado que exista un ánimo de revancha de los testigos precedentes, como lo señala la defensa.

D. Sobre lo anterior, finalmente al leer las declaraciones de los testigos Manuel Segundo Mora Torres, José Fernando Romero Silva, Heraldo Valentín Espinoza Elgueta, José Joel Matus Salazar.en el Regimiento Tucapel en esa época no recuerdan ni reconocen que hubiera otra persona de apellido Farías, él único que había a la época de los hechos, era Benjamín Farías Lavín. En consecuencia no es posible dar lugar a la absolución solicitada por la defensa de Benjamín Farías Lavín.-

G. ACUSACIÓN PARTICULAR.-

16°) A fs. 1.129 a fs. 1.133 (Tomo IV), el abogado Ricardo Lavín Salazar en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, formula acusación particular en contra de Benjamín Rodemil Farías Lavín, solicitando sea condenado como autor del delito de Homicidio calificado en contra de la víctima NN, de acuerdo a lo tipificado y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancias primera y quinta del Código Penal de la época, más las sanciones accesorias legales con costas.

Fundando su presentación en los siguientes antecedentes, los cuales para un mejor entendimiento se estructuran de la siguiente forma:

A. Establecimiento de los hechos constitutivos del delito que motiva la acusación particular. Comparte en su integridad y reproduce los hechos que se tienen por establecidos en la acusación de oficio, la calificación jurídica y la participación de los acusados.

B. Calificación jurídica del ilícito. Comparte lo razonado por el tribunal en el apartado N° 24 del auto acusatorio, en cuanto a considerar que se

desprenden cargos fundados para estimar que a Benjamín Farías Leiva le ha cabido participación en calidad de **autor**, en virtud del artículo 15 N° 1 del Código penal, del delito de Homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad en la víctima NN, conforme a lo dispuesto en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, circunstancias 1° y 5.

C. Circunstancias que deben influir en la aplicación de las penas:

Solicita considerar la concurrencia de la circunstancia agravante N° 8 del artículo 12 del Código Penal, respecto de la participación que les cabe en la comisión de los ilícitos a los acusados por el Tribunal como **autor del delito de Homicidio calificado**, toda vez que, a juicio de la parte, se desprende de lo obrado en autos que quien llevo adelante la comisión de estos hechos ostentaba la calidad de funcionario público. Cita doctrina para argumentar la concurrencia de la circunstancia N° 8 del artículo 12 del Código Penal y añade que los delitos de lesa humanidad no implica necesariamente que el sujeto activo sea funcionario público y así da se evidencia en causas que han sido condenados civiles proclives al régimen militar.-

D. Quantum de la Pena. Solicita al tribunal que se le aplique la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo por el delito de homicidio calificado, en calidad de autor.-

17°) Que, haciéndonos cargo de la acusación particular de **fs. 1.129 a 1.132 (Tomo IV)**, presentada por el abogado Ricardo Lavín Salazar coincide con el tribunal respecto de la acusación en cuanto a los hechos y la calificación jurídica. Lo que agrega y pide al tribunal es, considerar la concurrencia de la agravante del artículo 12 N° 8 del Código Penal respecto de la participación que le cabe en la comisión del ilícito al acusado por el Tribunal como **autor**. Las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal serán analizadas con posterioridad. En consecuencia el tribunal en este aspecto nada más tiene que analizar.

H. Reflexiones previas al análisis de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

18°) Que profundizando el origen y concepto del delito de lesa humanidad para un adecuado análisis de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y determinación de la pena, cabe citar la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006 puntualizando lo siguiente:

A. Párrafo 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía.

B. Párrafo 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946.

C. Párrafo 96. Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso *Prosecutor v. Dusko Tadic*, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. **Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.**

D. Párrafo 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

19°) Que como ya se ha dicho, por tratarse de un delito de lesa humanidad y no común, sobre esta materia el Tribunal tiene presente lo que en forma reiterada la Excm. Corte Suprema ha manifestado que hechos, como los investigados en esta causa y por los cuales se ha dictado acusación, que corresponde a **Homicidio Calificado** delito de tal magnitud que deben ser

imprescriptible. Asimismo, dicho ilícito es de aquellos que la doctrina reconoce como de **lesa humanidad**. Todo lo anterior en conformidad a lo dispuesto en los artículos 14 N°1 y 15 N°2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por Chile, tienen plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables.

20°) Cabe también hacer presente, que el mismo fallo *Almonacid Arellano y otros vs Chile* dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 119, al analizar el Decreto Ley de Amnistía 2.191 y en lo pertinente manifiesta que “las leyes de amnistía con las características descritas (es decir, como la chilena) conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley N°2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

21°) Sobre la misma materia del delito de lesa humanidad, cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ya señalado, “**Almonacid Arellano y otros versus Chile**”, en que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso “**Barrios Altos versus Perú**” de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo “*Almonacid Arellano y otros versus Chile*” afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 82.5, 82.6, 82.7, 111 y en especial en el párrafo 119 donde la Corte expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad general del Estado, agregando que el Decreto Ley 2.191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el

castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile. En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excm. Corte Suprema y este Tribunal, la Corte Interamericana en el fallo aludido manifestó lo siguiente:

A. 82.5. La época más violenta de todo el período represivo corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% de las 33.221 detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 1973”. Esta misma Comisión señaló que “más del 94% de las personas que sufrieron prisión política” dijeron haber sido torturadas por agentes estatales.

B. 82.6. Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones sociales. “Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían de la conducta „conflictiva” de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc.” Las ejecuciones de estas personas “se insertan dentro del clima reinante [...] de hacer una “limpieza” de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual “amenaza”. No obstante, en la época inicial de la represión existió un amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas.

C. 82.7. En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales –crimen cometido en el presente caso, por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. [...] En las regiones del sur [del país] la persona, sometida ya al control de sus captores, [era] ejecutada en presencia de su familia”.

22°). En el mismo sentido cabe también hacer presente, que el **fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de noviembre de 2021, en caso Maidanik y Otros Vs. Uruguay**, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”) por las violaciones a distintos derechos

humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares, desatándose los siguientes párrafos:

A. Párrafo 206: ...“en relación tanto con actos de desaparición forzada como respecto a otras graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, en la misma oportunidad este Tribunal señaló que “es incompatible con las obligaciones internacionales de un Estado Parte en la Convención que éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean **imprescriptibles**, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado”...

B. Párrafo 211: “El Estado debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, contando, para ese cometido, con las facultades y recursos necesarios²³⁹, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas, así como para acceder plenamente a la documentación e información pertinente y para llevar a cabo las actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y a las víctimas de ejecución extrajudicial”.

C. Párrafo 246: “La **Corte** recuerda que, al decidir sobre el caso Gelman Vs. Uruguay determinó que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, dispuso que “el Estado deberá asegurar que [dicha ley] no vuelva a representar un obstáculo [...] para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de [...] graves violaciones de derechos humanos [...] acontecidas en Uruguay”.

D. Párrafo 251: “Considerando lo anterior, la Corte entiende necesario recordar al Estado que: cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex

oficio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [...]. Por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.

23°) En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

- A. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además es una verdadera exigencia social y civilizadora.
- B. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.
- C. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.
- D. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.
- E. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.
- F. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.
- I. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.

24°) Cabe puntualizar que en el caso de **“Hilario Barrios Varas” (causa rol 25.657-14 de la Excm. Corte Suprema)**, en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno se dan todos los elementos que ha descrito la Excm. Corte Suprema, esto es, en síntesis, una represión generalizada del régimen de la época, una hiperseguridad al margen de toda condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte interamericana de Derechos Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en forma robusta la Excm. Corte Suprema y éste Ministro Visitador corresponde sin duda a un delito de lesa humanidad. **Delitos que son imprescriptibles.**

25°) Convenio de Ginebra: Que a mayor abundamiento, además cabe hacer presente que sobre los Convenios de Ginebra la jurisprudencia ha sido uniforme. Así en causa rol 2182-98 del ingreso de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago **“Caso Luis Almonacid Dúmenez”** de 29 de octubre de 2013, en su considerando 18, **párrafo 6**, señala que **“los Convenios de Ginebra”** consagran el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra, sin poder "auto exonerarse" a su respecto. Tales convenios entraron en vigor en nuestro ordenamiento en las fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de 1951. Los aludidos Convenios rigen también respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter internacional, situación que, jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de septiembre 1973, como se ha afirmado por la doctrina; pero que también, aun cuando se estimare que dicha situación es una ficción, los aludidos convenios son aplicables en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° común a todos ellos y ya citado, donde se plasma el principio de humanidad, así como por los principios que emanan de los Convenios de Ginebra son vinculantes por ser parte del derecho internacional consuetudinario, que pertenece a la categoría del *ius cogens*. En efecto, el artículo 3°, común a los cuatro Convenios, prescribe: "en caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra causa serán en toda circunstancia tratadas con humanidad. Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba

mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en toda sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios". En consecuencia, las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento y la condena por tales delitos son procedentes, cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido. Se corrobora esta aseveración, por otra parte, en la sentencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°2664-04), en cuanto expresa en su considerando décimo séptimo "Que debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968 que surge en la actualidad con categoría de norma de los Cogens o Principios Generales de Derecho Internacional".

I. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL

26°) Atenuante de Responsabilidad Penal:

i.) El abogado Christian Salgado, en representación de Benjamín Farías Lavín a **fs. 1.143 a 1.149 (Tomo IV)**, alega como atenuantes de responsabilidad penal la prevista en el **artículo 11 N°6 y N° 9** del Código Penal y la del **artículo 103** del mismo cuerpo legal.

A. Que en relación a la minorante del **artículo 11 N°6** del Código Penal. El Tribunal **dará lugar** a esta minorante, en **calidad de simple, por no existir mérito para otra calificación**. Al acusado le favorece esta circunstancia minorante, toda vez que de su extracto de filiación y antecedentes de fs. 916 y siguientes (Tomo III) y 1.187 a 1.188 (Tomo IV); a la época de los hechos, no tenía antecedentes penales pretéritos. Se califica de simple porque razonar de otra manera en relación a cualquier persona que reside en Chile, se incurriría en una discriminación arbitraria, puesto que solo los que pueden acceder a educación, formación y perfeccionamiento se les califica; pero los que no pueden hacer eso (que hay muchas personas en Chile) no se les podría calificar, lo que sin duda constituye una discriminación sobre la materia.

B. Que en relación a la **atenuante 11 N°9**. Atendido el mérito del proceso y tomando en consideración que los hechos ocurrieron en enero- febrero de 1974 y del conjunto de la investigación, se pudo determinar por otros medios sobre la realización del homicidio calificado en la víctima NN, como además se ha razonado en esta sentencia. En consecuencia Benjamín Farías Lavín (que no ha

colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos), no se acogerá la petición de la defensa.

27°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual:

En relación al artículo 103 del Código penal, el Tribunal se hace cargo de ésta Institución, por lo que cabe precisar:

A. En síntesis podemos expresar que sobre esta materia este Tribunal se remitirá a los razonamientos dados respecto a la imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad. Luego, siendo el delito de autos catalogado como de lesa humanidad, no es posible aplicar en todo su espectro algún instituto de prescripción. De no ser así, resulta muy difícil sostener la categoría de lesa humanidad. Si los hechos han sido calificados de esa forma debe sostenerse dicha afirmación tanto en la calificación del delito como en la determinación de la pena. Además, en relación a esta materia, el autor **Óscar López** (Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Uruguay, 2008. Pág. 235 y siguientes) menciona el **caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú” de 10 de julio de 2007**, que en su párrafo **190**, señala que la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni disposiciones de prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables. Además, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en sus “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile” del mes de julio del año 2014, señaló que le preocupa la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción” contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. Además, en esa materia la **Excma. Corte Suprema, en sentencia en causa rol 28.581-2016 de 24 de octubre de 2016 (causa rol 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, caso “Nicanor Moyano Valdés”)** ha manifestado sobre esta materia, en su motivo quinto, que resulta conveniente recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquella, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos. Sin embargo, como en el caso se trata de un delito de lesa humanidad, circunstancia que el fallo declaró expresamente, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción persecutoria, cabe sostener que por aplicación de las normas del Derecho Internacional y dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del

tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie.

B. Ahondando en esta institución de la prescripción gradual, el último estudio actualizado sobre la aplicación de ésta por los Tribunales y la Excma. Corte Suprema corresponde a la tesista de magister de la Universidad de Chile **Karina Fernández Neira**, en su trabajo “La aplicación de la prescripción gradual del delito en las causas sobre violaciones de derechos humanos” (página 192) quien después de estudiar detalladamente aspectos dogmáticos y legales tanto nacionales como de derecho comparado, concluye “que la aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser rechazada. En los casos antes referidos, la Corte Suprema no motiva correctamente sus sentencias, descuida aspectos dogmáticos y procesales, e incurre en incongruencias argumentativas en el afán de aplicar una institución cuyo diseño histórico-legislativo fue pensado para otras realidades, y cuya aplicación en casos de derechos humanos resulta forzada. Además, aunque la jurisprudencia citada evidencia la evolución de nuestro Tribunal superior, pues éste reconoce explícitamente que el Derecho internacional es una fuente directa de obligaciones internacionales para el Estado de Chile en lo referido al respeto de los derechos humanos, dicha evolución ha sufrido serios tropiezos y contradicciones a causa de los fallos del último bienio. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema, finalmente, compromete la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

C. Recientemente la ltma. **Corte de apelaciones de Temuco en la causa rol penal N°359-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019**, pronunciándose sobre la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, en su **considerando tercero** señala: “Finalmente, se tiene además en consideración, que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de Agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de "La

Masacre de la Rochela vs Colombia", señaló de manera expresa: "que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo "La Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191).

D. Del mismo modo, Excelentísima Corte de Suprema en causa rol N°8914-2018, seguida por el delito de Homicidio calificado en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, acoge el recurso de casación en el fondo, deducido por la Unidad Programa Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por la ltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 05 de abril de 2018, en su aspecto penal, declarando su nulidad y dictando sentencia de reemplazo con fecha 15 de junio de 2020. En dicha sentencia expresa lo siguiente: “**Noveno:** Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de los Cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”. En consecuencia, esta institución del artículo 103 del Código Penal tampoco es aplicable en la causa y **se rechaza** la petición realizada por la defensa.-

28°) Agravantes de Responsabilidad Penal.

El abogado Ricardo Lavín Salazar, en su escrito de fs. 1129 y siguientes (Tomo IV) invoca como circunstancia agravante la prevista en el artículo 12 N°8 del Código Penal.

Que en relación a la agravante del artículo **12 N°8** del Código Penal, este Tribunal no acogerá lo solicitado toda vez que en este caso, a diferencia de otras causas, hubo un Oficial que estuvo a cargo de la patrulla y que en esa calidad dicho funcionario, hizo uso de la calidad de empleado público, en el caso del acusado Benjamín Farías Lavín, él estaba cumpliendo funciones en el Ejército

de Chile, pero de acuerdo al mérito del proceso, a la acusación dictada en estos autos y a los hechos establecidos en este fallo, en concepto de este Ministro, no es posible engarzar la agravante alegada por el querellante en el encartado. **Por ello esta agravante será rechazada.**

29°) Determinación de la Pena. En la determinación de la pena se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos, como esenciales son:

A. En primer lugar, la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, establecidas en los **artículos 11 y 12** del Código Penal y otras normas del ordenamiento.

B. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los **artículos 50** y siguientes del mismo texto.

C. En tercer lugar, tratándose en este caso de delitos que su penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el **artículo 68** del texto punitivo, y si no es así el **artículo 67** del texto citado.

D. En cuarto lugar, todo lo anterior debe combinarse con la posibilidad cierta que los encartados acceda a cumplir parcialmente alguna pena en libertad según los beneficios de la **Ley 18.216** (salvo que exista una prohibición legal o no esté de acuerdo con los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos en la materia).

E. En quinto lugar, dentro de otros elementos, debe considerarse el **artículo 69** del Código Penal.

F. En sexto lugar, el equilibrio adecuado entre el **artículo 74** del Código Penal y el **artículo 509** del Código de Procedimiento Penal (si fuera pertinente), jugando un rol fundamental que en la determinación de la pena exista la posibilidad que los acusados cumplan una parte de la pena en libertad. Pues debe preferirse aquello a que cumpla una parte de la pena privados de libertad (salvo que exista prohibición legal o esté en contra de los estándares normativos e interpretativos, sobre derechos humanos en la materia).

30°) Que conforme a la calificación jurídica precedente y sus razonamientos posteriores, los hechos materia de la causa corresponden a la figura típica del delito de: **Homicidio Calificado** de la víctima N.N, perpetrado en la comuna de Villarrica en los meses de enero/febrero de 1974. Delito previsto y sancionado en el **artículo 391 N° 1, circunstancias 1° y 5° del Código Penal**, vigente a la época de los hechos, que establece la pena de **presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo** más las sanciones accesorias legales.

31°) Cabe hacer presente, que según el auto acusatorio de **fs. 1.097 a fs. 1.127 (Tomo IV)**, de 13 de enero de 2022, el encartado está acusado por el delito de **Homicidio Calificado** en la víctima NN, delito perpetrado en los meses de enero/febrero de 1974, en la comuna de Villarrica.-

a) En cuanto a la pena a imponer para el acusado **Benjamín Farías Lavín**, a éste le beneficia una atenuante, esto es, la contemplada en el artículo 11 N°6 del Código Penal en calidad de simple y no le perjudica agravante alguna. Ahora bien en conformidad al artículo 68 del Código Penal, la pena no puede aplicarse en su máximo. En este caso por el delito **de homicidio calificado de la víctima NN**, se aplicará la pena de **doce años de presidio mayor en su grado medio más las accesorias legales**

32°) Beneficios de la Ley 18.216 y sus Modificaciones Posteriores.

A. Respecto al acusado **Benjamín Farías Lavín**, atendida las razones que se van a exponer (en especial la extensión de la pena) **no procede ningún beneficio de la ley 18.216 aplicable al acusado**. Sin perjuicio que se remitieron oficios para las pericias respectivas, tanto al Centro de Reinserción Social de Gendarmería como al Servicio Médico Legal.-

33°) Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente los acusados tuvieran una pena inferior de igual forma **no puede acceder a cumplir la pena en libertad**, en efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de los estándares normativos e interpretativos en materia de derechos humanos es necesario hacer las siguientes reflexiones, como el Tribunal lo ha realizado últimamente en causa rol causa rol 2-2013-V de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, causa rol 45.361 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.357 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.017 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa ro 2-2012 del Juzgado de Letras de Pucón, causa rol 114.034 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt.

A. Un **estándar** en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos

fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Ministro que a partir de la normativa aludida, esta deber ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo.

B. Sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

C. Esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida en término simples como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de

acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. Pp.356-357).

D. Para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que observar por su puesto la Convención Americana (ya citada) en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

E. Del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un **estándar normativo y/o interpretativo** en materia de derechos humanos. En este caso en relación a la aplicación de sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

Siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

i. Caso Barrios Altos versus Perú, de 14 de marzo de 2001, en el párrafo 41, expuso que considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

ii. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, de 26 de septiembre de 2006, párrafos 111 a 114, la Corte IDH ha señalado: Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de

evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado en el Caso Barrios Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil destacar también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en “principio, las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho internacional de los derechos humanos”. Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

iii. Caso la Masacre de la Rochela vs Colombia, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191, señaló de manera expresa: que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia.

iv. Caso Cantoral Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, de 10 de julio de 2007, en su párrafo 190, puntualiza: La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los

procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. En particular, la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables.

v. Caso Masacre de las Dos Erres versus Guatemala de 24 de noviembre de 2009, en el párrafo 129, señala que ante esta situación, la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que [...]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” [...] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[...]. En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber.

vi. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) vs. Brasil de 24 de noviembre de 2010 en el párrafo 155, indica: Adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones. Entre ellas, destaca [...] el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de

desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante Tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas análogas que puedan eximirlos de acciones o sanciones penales, y la concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares.

F. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia ha sostenido este estándar en materia de derechos humanos en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos perpetrados por la intervención de Agentes del Estado. Del mismo modo, se debe evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo para el cumplimiento de la sentencia. Del mismo modo que las penas resulten ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por Agentes del Estado. Lo anterior, es totalmente diferente al tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.

G. Sobre esta materia, esto es, de los beneficios que pueden otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la delincuencia común) el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la **Ley 18.216**. En efecto en esta ley, si bien el **artículo 33** permite al Tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el artículo 1 y siguientes de la citada ley. En efecto el **artículo 1** de la señalada ley indicada, en forma categórica y expresa, prescribe “No procederá la facultad establecida en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34 y Prestación de servicios en beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal”.

H. En esa idea de razonamiento, si bien la Ley 18.216, se refiere a los ilícitos penales de la delincuencia común. Manifiesta la voluntad del Estado de Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los autores consumados de determinados delitos, en este caso **Homicidio calificado**. En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte IDH antes citada,

según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira, debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. Considerando los artículos 1, 2 y 29 de la Convención Americana citada. Además los artículos 26, 31.1 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969. **(Nogueira, Humberto (2014): “Sistema interamericano de protección de derechos humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Santiago de Chile, Librotecnia, pp. 395-420).**

34°) En consecuencia, aplicando el control de convencionalidad, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los **estándares normativos e interpretativos** sobre derechos humanos para los efectos de la sanción y cumplimiento de las penas, en relación a los ilícitos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio) **no es posible** (además de lo razonado y de los estándares normativos) **otorgarle algún beneficio de la ley 18.216 al acusado** en esta causa y así se dirá en lo resolutivo. De esta forma el control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. **(Núñez, Constanza (2017): El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina, ARA, Editores. p. 36).** Lo anterior ha sido además ratificado por la **II tma. Corte de Apelaciones de Temuco, el 04 de marzo de 2020, en causa rol 1.052-2019**, en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a derechos Humanos (lesa humanidad). En consecuencia **no es posible otorgarle al acusado ningún beneficio y debe cumplir la pena efectiva impuesta** como se dirá en lo resolutivo.

V. ASPECTOS RESOLUTIVOS.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, , 11 N 6, 9, 12 N°8, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 50, 52 56, 61, 68, 69 y 391 N° 1 **Código Penal**; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108 a 120, 121 y siguientes, 424 y siguientes, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes y 533 del **Código de Procedimiento Penal**; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la **Constitución Política de la República**; **Ley 18.216**; **Ley 19.123** y sus modificaciones posteriores; **Ley 19.980**; **Ley 20.357**, **Convención Americana sobre Derechos Humanos** y los **Convenios de Ginebra de 1949**, se declara:

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

I. QUE SE CONDENA a BENJAMIN FARIAS LAVIN, R.U.N. 7.023.207-3, ya individualizado, en calidad de **AUTOR**, a la pena de **doce años de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales** correspondientes a la inhabilidad absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por el delito de **Homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad**, de la víctima NN. Perpetrado entre el enero/febrero de 1974, en la comuna de Villarrica. Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 circunstancias 1° y 5° del Código Penal vigente a la época de los hecho.

II.- Que respecto al acusado **BENJAMIN FARIAS LAVÍN**, según se expresó, **no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216**, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberán cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de **abono** los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

a) **PRISIÓN PREVENTIVA: Desde el 22 DE OCTUBRE DE 2020 al 27 DE OCTUBRE DE 2020**, como consta de fs. 927 (Tomo III), cuando es notificado del auto de procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva. Que el 27 de octubre de 2020, se da orden de excarcelación según consta a fs.956 (Tomo III).-

III.-La pena impuesta al condenado comenzará a regir desde que **se presente o sea habido en la presente causa.**

IV.- Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin efecto las medidas cautelares personales impuestas al acusado, oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedente.

Notifíquese esta sentencia personalmente al sentenciado, cítese personalmente, bajo apercibimiento de arresto. Diríjanse los exhortos pertinentes, si correspondiere.

Notifíquese por cédula al abogado querellante, a través del Receptor de turno del presente mes.

Regístrese y cúmplase, en su oportunidad, con lo que ordena el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal, comuníquese a los diferentes Tribunales en que se tramitaren procesos en contra del sentenciado para informarle sobre las decisiones del presente fallo.

Consúltase si no se apelare y archívese en su oportunidad.

Siendo un hecho ocurrido en el año 1974 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol N° 39.296.-

Dictada por don **ÁLVARO CLAUDIO MESA LATORRE**, Ministro en Visita Extraordinaria.

Autoriza doña Priscilla Frantzen Cervantes, Secretaria Ad Hoc de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco

En Temuco, a veintidós de abril de dos mil veintitrés, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. (frf).